

39ª REUNION — 4ª SESION EXTRAORDINARIA — SEPTIEMBRE 3 DE 1960

Presidencia del señor diputado Federico F. Monjardín

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

DIPUTADOS PRESENTES:

ABRAHAM, Réstom  
AIDAR, Miguel  
ALARCIA, Fermín  
ALEMÁN URQUIZA, Luis César  
ALZABÉ, Pedro Bernabé  
AQUINO, Porfirio Antonio  
ARITO, Juan  
BAUDUCCO, Enrique  
BECERRA, Olegario Antonio  
BENEVENTANO, Domingo  
BERTONE, Marcos R.  
BOFFI, Luis L.  
BOGLIANO, Palmiro B.  
BONET CONVALÍA, Salvador  
BONIFACIO, Juan José  
BREYTER, Isaac  
BROUWER DE KONING, Julio R.  
BULIT GONÍ, Enrique A.  
BURDEOS, José Antonio  
CALABRESE, Pablo  
CAMEI, Carlos Ernesto  
CAPRIOTTI, Roberto A.  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRERA, Rodolfo Ricardo  
CONDOLUCI, Domingo A.  
DECAVI, Jorge Raúl  
DESPOUX, Pablo Pedro  
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo  
DOURS, Roberto José  
ERREA, Daniel  
ESCALADA, Alfredo H.  
FASCE, Antonio  
FERNÁNDEZ, José Manuel  
FERRARIS, Jorge Domingo  
FERREIRA, Jorge W.  
FOSERO, Raúl F.  
FOSSATI, Evers Nelson  
FREGA, José  
FUERTES, A. Ricardo  
GALEANO, Roberto A.  
GARCIA, Ernesto  
GARCÍA FLORES, José I.  
GARCÍA SOLÁ, Héctor  
GARCÍA VEIGA, Ignacio  
GILL, Miguel  
GÓMEZ, Augusto  
GÓMEZ MACHADO, Héctor  
GONZÁLEZ, Ricardo A.  
GOROSPE, Valentín  
GOYA, Israel  
GRANDI DE MARTÍN, Palmira A.  
GUTIÉRREZ, José María  
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.  
HEREDIA, Gilberto L.

JUAREZ PEÑALVA, Miguel Ángel  
JUNIN, Simón  
JURI, Jorge  
LAFUENTE, Augusto Antonio  
LICEAGA, José V.  
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo  
LÓPEZ, Juan Raúl  
LÓPEZ SANSON, Ernesto  
LÓPEZ SERROT, Oscar  
LOYOLA, Virgilio  
LLUGDAR, Elías N.  
MALUF, Emilio  
MANES, Juan Carlos  
MARTÍNEZ ROLÓN, José  
MONJARDÍN, Federico F.  
MONTE, Ricardo Álvaro  
MUSACCHIO, Vicente M.  
NASSIF NEME, Carim  
OREJA, Pablo Fermín  
PANELO, Ricardo E.  
PARRY, Enrique  
PELLÓN, Raúl  
PENNACCHI, Alfredo Arquimedes D.  
PETRAGLIA, Angel N.  
POSSE, Melchor S.  
PRECE, Angel Oscar  
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José  
ROMERO, Manuel Angel  
RUIZ, Lucio Carlos  
SAGO, Fayiz  
SALIM, Abraham  
SANTAGADA, Nírido E.  
SAURET, Héctor E.  
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel  
SCHWEIZER, Bernardo  
SOLARI, Juan Alberto  
SUJEROS, Pedro Ignacio P.  
TARULLI, Pascual  
TELLO HERRERA, José Aurelio  
TONELLI, Haroldo Juan  
UZAL, Francisco Hipólito  
VALLE, Salvador  
VECCHIETTI, Augusto Néstor  
VINCIGUERRA, Rómulo

AUSENTES, CON LICENCIA:

GAILLARD, Augusto  
SOLANAS, Juan Carlos  
ZANNI, Enrique Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

ABAROA, Rufino Vicente  
ABDALA, Felipe  
ACOSTA, Julio E.  
ACUÑA, Ramón Edgardo

AGUINAGA, Carlos Ernesto  
ANGARONI, Héctor Marcelo  
ARIETA, Ignacio  
ARMENDÁRIZ, Alejandro  
AYBAR, José Antonio  
BAIGOREIA, Nélida Rosa T.  
BARRETO, Miguel  
BECERRA, Carlos Alberto  
BEIRÓ, Angel Francisco  
BELNICOFF, Manuel  
BILBAO, Alfredo C.  
BLANCO, Rubén Victor M.  
BUSANICHE, Julio J.  
BUSQUET SERRA, Manuel  
BUSTOS, Jerónimo L.  
CAMARLINGHI, Alfredo E.  
CANEDO, Raúl  
CASAS, José B.  
CASATI, Hércules H.  
CONTE, Luis  
CONTE (h.), Adolfo  
CONTIN, Carlos R.  
CORTAZAR, Eleodoro M.  
COSTA, Abelardo M.  
CUEVAZ, Agustín  
DÍAZ, Rosario Domingo  
ELENA, Reinaldo  
ESPINA, Juan Carlos  
FERNÁNDEZ IRUJO, Ricardo  
FERRARI, Luis  
FREYTES, Angel R.  
GALLO, Luis M.  
GARAY, F. Alfredo  
GARONA, Alberto Agustín  
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario  
GÓMEZ BELLO, Miguel Angel  
HERNANDEZ RAMIREZ, Rafael  
INSAURRALDE, Leopoldo S.  
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.  
JOFRE, Emilio  
LAGOS, César M.  
LAROCCA, José R.  
LAVALLE, Ricardo  
LONGHI, Julio P.  
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.  
LUELMO, Horacio Flavio  
MARCONATO, Pedro Luis  
MARCHINI, Atilio Enrique O.  
MARINI, Anselmo A.  
MÁS, Juan Antonio  
MATHOV, Arturo  
MERCADER, Emir E.  
MIHURA, Emilio  
MONTEAGUDO, Francisco  
MORENO, Eufemio Tecló

MOSCA, Gabriel Carlos J.  
MURIAS, José  
NAIM, Juan  
NOUGUES, Isaias Juan  
PARENTE, Miguel A.  
PAVIOLO, Ricardo J.  
PERETTE, Carlos H.  
PEREZ, Inocencio A.  
PERKINS, Jorge Walter  
PINTOS ROSAS, Francisco M.  
POLOGNA, Aurelio José

POZZIO, Antullo F.  
RABANAL, Francisco  
RECIO, José A.  
ROBERTO, Mario  
RODRIGUEZ ARAYA, Agustín  
ROJAS, Nerio  
ROSENKRANTZ, Eduardo S.  
SAMMARTINO, Ernesto E.  
SANTONI, Nabucodonosor  
SEGOVIA, Carlos A.  
SPANGENBERG, Enrique

STORANI, Conrado Hugo  
SUÁREZ, Facundo Roberto  
TROILO, Eleogardo B.  
VESCO, José Luis  
ZADOFF, Arón  
ZARRIELLO, Raúl Jorge  
ZUBIAURRE, Alberto

ELECTO, NO INCORPORADO:

CHAMORRO, Cristiano

## SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (Pág. 2336.)
- 2.—**Convocatoria a sesión extraordinaria.** (Pág. 2336.)
- 3.—**Consideración del dictamen de las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley nacional de la energía eléctrica.** Se sanciona. (Página 2337.)
- 4.—**Apéndice:**
  - I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 2396.)
  - II.—**Inserción de documentos en el Diario de Sesiones.** (Pág. 2402.)

—En Buenos Aires, a tres días del mes de septiembre de 1960, a la hora 14 y 30:

1

### MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Gómez Machado.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Desearía saber, señor presidente, cuántos diputados hay en el recinto.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Noventa y cuatro señores diputados.

**Sr. Gómez Machado.** — Solicito, entonces, que se continúe llamando hasta las diecisiete.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Si hubiera asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Como hay asentimiento, se continuará llamando.

—Se continúa llamando.

—A la hora 17:

**Sr. Gómez Machado.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — En la casa hay noventa y seis señores legisladores. Un colega enfermo, que tiene vocación democrática, en un esfuerzo físico extraordinario concurrirá al recinto para que tengamos quórum. En esa forma

podremos votar un proyecto de ley al servicio de la emancipación del país. Por este motivo, propongo que se continúe llamando hasta la hora veinte.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Se seguirá llamando hasta las veinte.

—Se continúa llamando.

—A la hora 19 y 50:

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Gómez Machado.** — Desearía, señor presidente, se me informara qué número de diputados hay en la casa.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — En la casa hay 97, y en el recinto 95 señores diputados.

**Sr. Gómez Machado.** — Como acaban de entrar dos diputados más al recinto, desearía que por Secretaría se verificara qué número hay ahora.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Hay 96 señores diputados en el recinto.

—Después de un instante:

2

### CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Con la presencia de 97 señores diputados queda abierta la sesión.

Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Becerra.

**Sr. Gómez Machado.** — Ruego al señor diputado Becerra postergue toda cuestión que no sea la ley de energía.

**Sr. Becerra (O. A.).** — No tengo ningún inconveniente en postergar el planteo de la cuestión de privilegio para la primera sesión ordinaria de la Cámara.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Por Secretaría se va a dar cuenta de los documentos motivo, de la convocatoria a esta sesión extraordinaria.

**Sr. Secretario (Oliver).**— En la Presidencia de la Honorable Cámara se ha recibido la siguiente petición:

Buenos Aires, 1º de septiembre de 1960.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Federico F. Monjardín.*

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara, solicitamos se convoque a sesión extraordinaria del cuerpo para el día sábado 3 del corriente, a las 14 horas, para considerar el orden del día número 46, despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Industria y Presupuesto y Hacienda, sobre ley nacional de la energía. Saludamos a usted muy atentamente. — Firmado: *Héctor Gómez Machado, Victorino H. B. Gutiérrez, Ricardo Alvaro Monte, Alfredo H. Escalada, Evers Nelson Fossati, Enrique Parry, Jorge Juri, Juan Carlos Manes, Ricardo A. González, Pablo Fermín Oreja, Juan Alberto Solari y Abraham Salim.*

El señor presidente dictó una resolución en estos términos:

Vista la presentación de varios señores diputados, en la que solicitan se convoque a sesión extraordinaria el sábado 3 del corriente, a las 14, para considerar el proyecto sobre ley nacional de energía; y considerando que dicha petición se halla comprendida en las disposiciones del artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara y atento a lo estatuido en el artículo 36 del mismo,

*El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

#### RESUELVE:

Citar a los señores diputados para celebrar sesión extraordinaria el día sábado 3 del corriente, a las 14, a efectos de considerar el proyecto sobre ley nacional de energía.

Sala de la Presidencia, 1º de septiembre de 1960. — Firmado: *Federico F. Monjardín, Eduardo T. Oliver.*

En consecuencia, se remitió la comunicación que han recibido los señores diputados:

A solicitud del señor diputado Gómez Machado y otros señores diputados, conforme a los artículos 35 y 36 del reglamento, invite al señor diputado a concurrir al recinto de sesiones para celebrar sesión extraordinaria el sábado 3 del corriente, a las 14, a fin de considerar el proyecto sobre ley nacional de energía. Saludo al señor diputado muy atentamente. — Firmado: *Federico F. Monjardín, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y Eduardo T. Oliver, secretario.*

**Sr. Presidente (Monjardín).**— La Cámara decidirá si va a ocuparse del motivo de la convocatoria.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 96 votos; votan 97 señores diputados.

3

## LEY NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

(Orden del día número 46)

Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda han tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley nacional de la energía eléctrica remitido por el Poder Ejecutivo; y, por las razones que dará el miembro informante aconsejan, en mayoría, la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional; con excepción del transporte y distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión de señales, palabras o imágenes, que se registrarán por sus respectivas leyes espaciales.

Art. 2º — A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 3º — A los efectos de la presente ley, denominase servicio público de electricidad la distribución regular y continua de energía eléctrica para atender las necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de una colectividad o grupo social determinado de acuerdo a las regulaciones pertinentes.

Correlativamente, las actividades de la industria eléctrica destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público serán consideradas de interés general, afectadas a dicho servicio y encuadradas en las normas legales y reglamentarias que aseguren el funcionamiento normal del mismo.

Art. 4º — Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con una línea de transmisión o de ésta con el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no comporten desmedro a las disposiciones de la presente ley.

Art. 5º — La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El

derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el de modificar el uso y fines a que estén destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que lo requieran la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.

Art. 6º — Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando:

- a) Se vinculen a la defensa nacional;
- b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur;
- c) Corresponden a un lugar sometido a la legislación exclusiva del Congreso Nacional;
- d) Se trate de aprovechamientos hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de todos ellos;
- e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión;
- f) Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera;
- g) Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear o atómica.

Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º cuando una ley del Congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de su unificación.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo proveerá lo conducente, dentro de las facultades que le otorga esta ley, para promover en cualquier lugar del país grandes captaciones de energía hidroeléctrica.

Art. 8º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica promovidos por el gobierno federal o por una provincia, en los casos que los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, afectando a más de una provincia, deberán ser autorizados por ley nacional.

Art. 9º — En cuanto se relacione con lo dispuesto en el artículo 6º, el gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía, en cualquier lugar del país, en la medida requerida para los fines a su cargo.

Art. 10. — Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier

naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de explotación, de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley y especialmente para el regular desarrollo o funcionamiento de la red nacional de interconexión y/o los restantes sistemas eléctricos nacionales.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica designando a quien tendrá facultad en cada caso para promover los procedimientos judiciales de expropiación.

Art. 11. — En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6º y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo otorgará las concesiones y autorizaciones, y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Las facultades precedentes comprenden el derecho de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y demás lugares sometidos a la legislación exclusiva del Congreso Nacional.

Queda así mismo autorizado el Poder Ejecutivo nacional, según lo justifiquen las circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones que sean consecuencia de esta ley la exención de gravámenes e impuestos nacionales vinculados a la constitución de los mismos.

En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales, referidos en el artículo 35, inciso b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º de la misma que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Art. 12. — Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprenden en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.

Art. 13. — Las disposiciones de la ley 4.408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán de aplicación subsidiaria en cuanto no esté previsto y sea compatible con la presente, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales —provinciales y municipales— en todo lo que sea materia de su respectiva competencia.

#### *Concesiones y autorizaciones*

Art. 14. — El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, re-

quiere concesión o autorización del Poder Ejecutivo, en los siguientes casos:

a) Se requiere concesión:

1. Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública, cuando la potencia normal que se concede exceda de quinientos kilovatios.
2. Para el ejercicio de actividades destinadas a un servicio público de electricidad.

b) Se requiere autorización:

1. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a cinco mil kilovatios.
2. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea menor de cinco mil kilovatios pero sus instalaciones requieran el uso de la vía pública o, en general, de bienes del dominio público o afectados al uso o servicio público.

Art. 15.— En las concesiones para aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) - 1), que podrán otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeterminado, habrán de establecerse las condiciones y cláusulas siguientes:

1. El objeto principal de la utilización.
2. Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.

En estas normas se deberá tener en cuenta el siguiente orden de prioridad para el uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el riego y luego la producción de energía.

3. Las potencias características del aprovechamiento y la potencia máxima de la instalación.
4. El plazo de la ejecución de los trabajos determinados en la concesión.

5. El plazo de explotación de la concesión cuando ésta sea a término, el que no podrá exceder de sesenta años.
6. Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al Estado los bienes y las instalaciones.
7. Las condiciones y causales de caducidad por inobservancia de las obligaciones impuestas en las concesiones a término.
8. La intelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión, y la forma, tiempo y condiciones en que se realizarán las transferencias de los bienes, cuando la concesión fuese por tiempo indeterminado.
9. El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso de la fuente, que ingresará al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Art. 16.— En las concesiones para el aprovechamiento de fuentes de energía hidroeléctricas de jurisdicción nacional, para los trabajos determinados en la concesión o para la explotación de la misma, el concesionario, sin perjuicio de las indemnizaciones que deba pagar a los particulares afectados, tendrán los siguientes derechos:

- I. De ocupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión las propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua, y para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales.
- II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua.
- III. De solicitar al Poder Ejecutivo que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 10, cuando fuere necesaria la ocupación definitiva del dominio de terceros, y toda vez que ello no se hubiera previsto en el mismo acto constitutivo de la concesión y no fuera posible obtener el acuerdo de partes.

Art. 17.— El Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal, podrá estimular bajo forma de aporte de capital, financiación, contribución y/o exenciones impositivas temporarias a los titulares de las concesiones a que se refiere el artículo 15 cuyos trabajos y obras originaren beneficios múltiples o cuyo objetivo principal interese a la defensa nacional o procure un mejoramiento notable de las condiciones de utilización agrícola de los cursos de agua o la regularización de su régimen o facilite su navegación.

Art. 18. — En las concesiones de servicio público de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) - 2), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 en cuanto resulte de aplicación, se establecerán especialmente:

1. Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
2. Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuera pertinente.
3. La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de electricidad está obligado a atender.
4. La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse, así como de sus modificaciones y ampliaciones, los que en todo momento deberán ajustarse para atender el incremento de la demanda de la zona.
5. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones.
6. Las garantías que debe prestar el concesionario según determine la reglamentación.
7. Las causales de caducidad y revocación.
8. Las condiciones en que el Estado adquirirá los bienes afectados a la concesión, en caso de caducidad, revocación o falencia.
9. Las obligaciones y derechos del concesionario.
10. Las condiciones, derechos u obligaciones para la interconexión de las instalaciones.
11. La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los mismos y en especial el régimen de las instalaciones costeadas por los usuarios.
12. La forma de determinación del capital inicial.
13. El sistema de justiprecio de los bienes afectados a la concesión, cuando fuere necesario para determinar las tarifas, la utilidad del concesionario o la adquisición de los mismos por el Estado.
14. El derecho de constituir las servidumbres necesarias a los fines de la concesión.
15. Las atribuciones del Estado de inspección, fiscalización y demás, inherentes al poder de policía.
16. El régimen para la constitución de los fondos de depreciación, renovación, ampliaciones y otros que sea necesario prever.
17. El régimen del suministro y venta de energía.

18. El régimen tarifario.

19. El régimen de infracciones y multas.

Art. 19. — Toda cesión total o parcial de una concesión y todo cambio de concesionario requerirán para su validez la aceptación expresa de la autoridad competente.

Art. 20. — El régimen de las autorizaciones de jurisdicción nacional artículo 14, inciso b), será reglamentado por el Poder Ejecutivo y se caracterizará por la exclusión de uno o más requisitos, según los casos, de los fijados a las concesiones de servicio público.

Se incluirán sin embargo, en cuanto fueran de aplicación, cláusulas que contemplen lo previsto en los incisos 12 a 19 del artículo 18.

Art. 21. — Los aprovechamientos de la energía hidroeléctrica y cualquier otra actividad de la industria eléctrica excluidos del régimen de concesiones y autorización del artículo 14, pero comprendidos en el ámbito de la jurisdicción nacional, se ejercerán con sujeción a las reglamentaciones vigentes o a dictarse.

En especial, podrán los particulares, individual o colectivamente, o agrupados en cooperativas, consorcios de usuarios y otras formas de asociación legítima, utilizar para las necesidades de sus propiedades o industrias la energía hidroeléctrica de cursos de agua pública, con la sola sujeción a dichas reglamentaciones y siempre que la potencia total instalada no exceda de quinientos kilovatios y no afecte a otros aprovechamientos, o los planes nacionales y locales de electrificación.

Igualmente, los propietarios de cursos de agua privada a que se refieren los artículos 2.350 y 2.637 del Código Civil, podrán utilizar la respectiva energía hidroeléctrica para su propio uso y aun cederla a terceros, con tal que ello no revista el carácter de un servicio público.

#### *Importación y exportación de energía eléctrica*

Art. 22. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para autorizar la importación y exportación de energía eléctrica, previa determinación de la cantidad máxima de energía a exportar o a importar.

La autorización deberá subordinarse a condiciones y garantías relativas al uso de la energía y al precio de venta o reventa.

At. 23. — La autorización no tendrá plazo superior a diez años, pudiendo ser prorrogable; y podrá revocarse en cualquier momento, cuando no subsistieren las circunstancias que originaron su otorgamiento, o mediaren graves motivos de interés público.

La revocación podrá también tener lugar por no uso de la autorización, o inobservancia de las condiciones a que se subordinó su otorgamiento.

### *Consejo Federal de la Energía Eléctrica*

Art. 24. — Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del país y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;
- b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; a las prioridades en la ejecución de estudios y obras; a las concesiones y autorizaciones; y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad;
- c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria eléctrica;
- d) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

Art. 25. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por:

- a) El secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá, o el subsecretario en su reemplazo;
- b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combustibles, que será designado por el Poder Ejecutivo;
- c) El presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado;
- d) Un representante y un suplente por cada provincia designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos gobiernos locales;
- e) Un representante de la Capital Federal y Territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

Art. 26. — El consejo designará seis de sus miembros que constituirán un comité que será presidido por el representante de la Secretaría de Energía y Combustibles.

Dicho comité tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomiende;

b) Ejercer las funciones que el consejo le delegue;

c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato al consejo si el caso lo requiriese o en la primera reunión ordinaria en su defecto.

Art. 27. — Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y del comité, las dependencias que determine la Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que dicte para su actuación.

Art. 28. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica delimitará «zonas de electrificación» integrada cada una de ellas por la provincia o provincias que, racional y técnicamente, constituyan un núcleo energético desde el punto de vista del afianzamiento gradual del sistema eléctrico argentino o tengan, cuando se trate de dos o más provincias, una interdependencia real o potencial en la materia.

En cada zona de electrificación así constituida funcionará un Comité Zonal de la Energía Eléctrica, dependiente del consejo federal y formado por los miembros titulares de las provincias de que se trate, a que se refiere el artículo 25, inciso d) y e), y por los presidentes o directores de los entes a cargo, en las mismas provincias, de los problemas locales de hidráulica y electricidad.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica será reglamentado sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una intervención informativa en todo problema, de la competencia del consejo federal, que se refiera a la respectiva zona; así como la más amplia libertad de iniciativa, por ante el consejo federal y por intermedio de los miembros titulares respectivos a que alude el artículo 26, incisos c) y d) para proponer las tarifas, la aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las soluciones energéticas que juzguen de interés para la zona respectiva.

Art. 29. — Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, se atenderán con cargo al Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

### *Fondos eléctricos. — Fondo Nacional de la Energía Eléctrica*

Art. 30. — Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, con el fin de contribuir a la financiación de los planes de electrificación, el cual se integrará:

- a) Con un aporte del Tesoro nacional, que se fijará anualmente;
- b) Con el 50 %, como mínimo, del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder

Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;

- c) Con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía que se establecen en el artículo 15, inciso 9;
- d) Con el derecho de importación de la electricidad que en cada caso se establezca por los organismos competentes;
- e) Con el recargo de \$ 0,10 por kilovatio-hora sobre el precio de venta de la electricidad. Queda facultado el Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, para modificar este recargo, no pudiendo exceder del 15% de dicho precio de venta;
- f) Con el producido de la negociación de títulos de deuda nacional, que se emitan con cargo a ser servidos con recursos del Fondo;
- g) Con la recaudación por reembolso, y sus intereses, de los préstamos que se hagan de los recursos del Fondo;
- h) Con donaciones, legados, aportes y otros recursos no especificados anteriormente.

Art. 31. — El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles, y se aplicará:

- a) El 80% del mismo, con destino exclusivo a los estudios, construcción y ampliación de las centrales, redes y obras complementarias o conexas que ejecute el Estado nacional;
- b) El 20% remanente será transferido al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, conforme con lo dispuesto en el artículo 32, inciso d).

#### *Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior*

Art. 32. — Unificanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se integrará:

- a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;
- b) Con los aportes del Tesoro de la Nación que correspondan a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Económico y otros que se determinen en la ley de presupuesto;
- c) Con el diez por ciento (10%) del producido del Fondo Nacional de la Energía;
- d) Con el veinte por ciento (20%) (artículo 30, inciso d) del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Art. 33. — El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por la Secretaría de Energía y Combustible, y se aplicará para:

- a) Aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para acogerse a estos beneficios, las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la amortización de tales aportes. Las sumas recaudadas en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a la renovación, ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de electrificación, o al reintegro, en su caso, de los respectivos préstamos;
- b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias;
- c) Préstamos a empresas privadas de servicios públicos de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000 kilovatios instalados.

Al cierre de cada ejercicio, los saldos anuales no utilizados se transferirán al ejercicio siguiente del mismo fondo.

Art. 34. — La Secretaría de Energía y Combustibles distribuirá el fondo referido con la intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y lo administrará, asegurando, en todos los casos, el retorno de los préstamos de acuerdo con las siguientes normas:

- a) En los casos de los préstamos del artículo 33, inciso a) y b), con un interés no menor del 6 % anual, y con amortización hasta quince años;
- b) Para los casos de los préstamos del artículo 33, inciso c), con un interés no inferior al 8 % anual, y con amortización hasta cinco años.

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta diez (10) años más en los siguientes casos: 1) Cuando los préstamos se apliquen total o parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural; 2) Cuando se destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 30 % del total de la inversión. En estos casos, para lo invertido en electrificación



rural o en la compra de equipos y elementos de fabricación nacional, la tasa de interés aplicable podrá reducirse al 3 % anual.

*Transporte y distribución de la energía eléctrica. — Sistemas eléctricos*

Art. 35. — Para los efectos de la presente ley, se denominan:

- a) Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), las centrales, líneas y redes de transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias —sin distinción de las personas, públicas o privadas, a quienes pertenezcan—, sometidos a la jurisdicción nacional;
- b) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP), las centrales, líneas y redes de jurisdicción provincial;
- c) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE), las centrales, líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones complementarias, de propiedad del Estado nacional, o que él administra o explota;
- d) Red Nacional de Interconexión (RNI), al conjunto de sistemas eléctricos nacionales interconectados.

Art. 36. — La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervención del Concejo Federal de la Energía Eléctrica, tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión y la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran necesaria y racionalmente la misma, cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo.

Cuando se trate de captaciones hidroeléctricas utilizables mediante aprovechamientos fluviales múltiples, su planificación, estudio y coordinación quedarán supeditados a las condiciones que contemplen la racional y económica utilización de todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica.

Art. 37. — Todas las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía, en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Energía y Combustibles, la que tendrá a su cargo:

- a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), mediante la interconexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
- b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la Nación;

- c) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro de las utilidades y la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
- d) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;
- e) Ejercer las funciones de policía de seguridad técnica de los sistemas a que se refieren los incisos a), c) y d) del artículo 35, y de inspección técnica contable sobre las instalaciones, funcionamiento y régimen tarifario de ellos;
- f) Impartir las normas técnicas y disposiciones necesarias para el funcionamiento y operación de los servicios de jurisdicción nacional, de acuerdo con los principios de la presente ley y de los reglamentos que se dicten para su aplicación;
- g) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo las tarifas y precios de compra y venta de la energía a los productores y a los distribuidores de la Red Nacional de Interconexión (RNI), y servicios públicos de jurisdicción nacional;
- h) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), incluida la Red Nacional de Interconexión (RNI), con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 38. — El despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y el manejo y funcionamiento de los Sistemas Eléctricos del Estado estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, la que a dichos efectos, sin perjuicio de las facultades que le confiere su estatuto orgánico, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nacional de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a las empresas u organismos prestatarios de servicios públicos de electricidad y a las grandes industrias;
- b) Establecer anualmente el régimen de funcionamiento de cada central integrante de la Red Nacional de Interconexión;
- c) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de cargas, de acuerdo con las normas preparadas por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Los Sistemas Eléctricos Provinciales a que se refiere el artículo 35, inciso b), podrán conectarse a la Red Nacional de Interconexión si

desean recibir o entregar energía por dicha red. A tal efecto la autoridad provincial respectiva y Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, acordarán las condiciones de la operación y régimen del mutuo servicio, a los efectos del despacho de carga.

### *Precios y tarifas*

Art. 39. — El Poder Ejecutivo nacional fijará los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en las centrales y líneas que integran la Red Nacional de Interconexión y para los servicios públicos de jurisdicción nacional, los que dentro del principio de lo justo y razonable deberán responder básicamente a los siguientes conceptos:

#### *a) Costos de capital:*

1. Se considerarán en los costos de capital las dotaciones al fondo de renovación que se determinarán sobre la base de un porcentaje fijo a establecer, sobre el valor de reposición de la potencia instalada con sus equipos y elementos conexos.
2. Las dotaciones a los fondos de reserva.
3. Los impuestos.
4. Los seguros.
5. Las amortizaciones de capital, siempre que en la correspondiente concesión o autorización existan cláusulas de transpaso total o parcial sin cargo para el Estado, de los bienes del concesionario o permisionario al vencer la concesión o autorización.
6. Los intereses del capital, que se reglarán de acuerdo con las normas de la correspondiente concesión o autorización.

#### *b) Costo de los sueldos de personal:*

1. Los sueldos, jornales y en general toda remuneración que se paguen de acuerdo con normas legales que los autoricen.
2. Los beneficios de carácter social establecidos y que se establezcan por normas legales y las sumas que anualmente deben destinarse a constituir o incrementar los fondos de reservas especiales que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones.

#### *c) Gastos generales, administración, dirección técnica y asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley;*

#### *d) Combustibles, lubricantes y en general todos los materiales cuyo consumo resulte necesario en el período correspondien-*

te y que estén destinados a la generación, transformación, transmisión y distribución de electricidad, en su caso;

- e) Valor de la energía que se adquiere a terceros;
- f) Intereses y gastos complementarios de financiación sobre bonos y otros capitales crediticios destinados a la explotación y que hayan sido aprobados previamente por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá exceder del 10 % anual sobre los respectivos capitales;
- g) Los demás gastos no especificados en los rubros anteriores, siempre que guarden relación de causalidad con las actividades de la explotación;
- h) Las pérdidas de energía por todo concepto, de acuerdo con las normas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles;
- i) Cláusulas de ajuste:

1. Los costos de capital, mantenimiento y varios se ajustarán anualmente.
2. Los cambios que sufra el precio de la mano de obra y de los combustibles serán reajustados dentro de los treinta (30) días de producidos, de acuerdo con las fórmulas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles.
3. Las disminuciones de costo originadas en una mayor eficiencia técnica serán acreditadas por partes iguales a favor de los consumidores y la empresa o entidad productora, transportadora o distribuidora que lo haya originado.

Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa de energía y de las tarifas se seguirá el procedimiento de apremio establecido en el título 25 de la ley 50, siendo título hábil la constancia de deuda expedido por la oficina competente del ente prestatario.

Art. 40. — Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base de la demanda probable estimada como conveniente, que soporte cada central durante el año.

### *Disposiciones complementarias*

Art. 41. — Las empresas del Estado o privadas que integren los sistemas eléctricos nacionales ajustarán sus libros y contabilidad a un plan general de cuentas para permitir la fiscalización contable permanente de los mismos por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Art. 42. — Las industrias en el ámbito de la jurisdicción nacional, cuando las circunstancias

lo justifiquen y ello se juzgue conveniente y adecuado por la Secretaría de Energía y Combustibles, podrán abastecerse directamente e interconectar sus propias centrales con los servicios eléctricos nacionales.

Art. 43. — Las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirán el cinco por ciento (5 %) del importe que resulte de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a la venta en bloque.

En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5 % se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas.

Art. 44. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a utilizar de los recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior a que se refiere el artículo 32 de la presente ley las sumas necesarias para la continuidad del auxilio financiero establecido por el decreto 11.219/59.

Art. 45. — Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado, podrá financiar sus obras de expansión futuras o en ejecución mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusivamente a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas, en modo tal que el producido de las mismas cubra las amortizaciones e intereses de las deudas que se contraigan al amparo del presente régimen.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan, las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizados.

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipos de interés y características financieras que considere convenientes a los fines de proceder a la emisión de los valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella se considere necesaria.

Art. 46. — (Transitorio.) El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se constituirá una vez que la mitad de las provincias haya comunicado al Poder Ejecutivo nacional su propuesta para el nombramiento de los representantes y éstos hayan sido designados. Si en el término de los noventa días las provincias no hubiesen realizado tal propuesta, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica será integrado con el número de representantes designados.

Constituido el consejo, deberá proceder dentro de los noventa días siguientes a elevar para la aprobación del Poder Ejecutivo nacional el proyecto de reglamentación de la presente ley y el proyecto de organización funcional a que ajustará su cometido.

Art. 47. — Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes, en cuanto se opongan a la presente ley.

Art. 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 3 de agosto de 1960.

José V. Liceaga. — Oscar López Serrot. — Angel Oscar Prece. — Simón Junín. — José Antonio Burdeos. — Ignacio García Veiga. — Porfirio Antonio Aquino. — Juan Arito. — Roberto A. Capriotti. — Rodolfo Ricardo Carrera. — Domingo A. Condoluci. — Jorge Raúl Decavi. — José Manuel Fernández. — Jorge W. Ferreira. — Ricardo A. González. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Ernesto López Sansón. — Virgilio Loyola. — Elías N. Llugdar. — Raúl Pellón. — Héctor B. Sauret.

En disidencia parcial sobre aspectos fundamentales del proyecto:

Carlos E. Aguinaga. — Emilio Jofré.

## I

### Dictamen de la primera minoría

#### Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en minoría, han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre ley nacional de la energía eléctrica y los distintos proyectos de la diputación perteneciente al sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo referidos a problemas energéticos; y, por las razones que dará el miembro informante y las que se expresan en el adjunto informe, aconsejan su rechazo y, en su reemplazo, la aprobación de los siguientes proyectos:

## 1

### Proyecto de resolución

#### La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

1º — Designase una comisión especial de esta Honorable Cámara, compuesta de doce miembros, para que en el término de noventa días a partir de su constitución redacte un proyecto de ley nacional de la energía eléctrica.

2º — El proyecto de ley tendrá en cuenta, en su ordenamiento, los siguientes principios:

a) Necesidad de un sistema eléctrico nacional, en base a una coordinación jurisdiccional, técnica y económica;

- b) La creación de un ente autárquico nacional en el que estarán representadas la Nación y las provincias, en plena igualdad de facultades, derechos y obligaciones, y con representación de técnicos, obreros y usuarios;
- c) El derecho de las provincias al dominio y jurisdicción de sus fuentes de energía;
- d) Definir como un servicio público la generación, transmisión, transformación y distribución de la energía eléctrica;
- e) Prohibición expresa de otorgamiento de concesiones de ningún género a empresas privadas para comercialización de la energía eléctrica en cualquiera de sus fases;
- f) Fomento del sistema de cooperativas;
- g) Promoción inmediata de una política de aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos;
- h) Creación de un fondo propio de energía eléctrica que asegure la normal prestación del servicio y contemple sus futuras necesidades;
- i) Asegurar el carácter social de la prestación de los servicios eléctricos mediante una planificación de sistemas de producción que permita su aprovechamiento a los más bajos costos;
- j) Fomentar el desarrollo de la electricidad rural.

3º — Esta comisión especial tendrá amplias facultades para solicitar la información y asesoramiento que estimara necesarios.

## 2

## Proyecto de resolución

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

## RESUELVE:

1º — Designase una comisión especial de esta Honorable Cámara para que investigue todo lo relacionado con la contratación de los convenios celebrados con CADE y ANSEC, las gestiones de un nuevo convenio con la empresa CIAE y la tramitación en el exterior de la ley de la energía eléctrica.

2º — Esta comisión se compondrá de doce miembros y se le otorgarán todas las facultades necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido.

3º — Esta comisión especial deberá expedirse en el término de ciento ochenta días a partir de la fecha de su constitución.

Sala de las comisiones, 3 de agosto de 1960.

Carlos Alberto Becerra. — Carlos R. Contín. — Mario Giordano Eche-  
goyen. — Anselmo A. Marini. —  
Antulio F. Pozzio. — Francisco Ra-  
banal. — Agustín Rodríguez Araya.

## INFORME

Nuestra disidencia total con el proyecto de ley nacional de la energía eléctrica tiene las siguientes razones principales, entre otras:

- a) Por la falta total de un plan racional e integral de soluciones a las necesidades de energía eléctrica que tiene el país, que sirva de base para una adecuación legal;
- b) Por responder a bases de estudio e inspiración extranacionales;
- c) Por establecer una indebida delegación de facultades y atribuciones, propias del Congreso de la Nación, al presidente de la República;
- d) Por violar el principio de las autonomías provinciales;
- e) Por crear un centralismo de ejecución que tendrá repercusión desfavorable en lo político y económico para las provincias;
- f) Por adoptar el sistema de concesiones;
- g) Porque prescinde del principio de la licitación pública en el trámite de las concesiones y autorizaciones;
- h) Porque otorga al presidente de la Nación la facultad omnimoda, como autoridad única para conceder;
- i) Por vulnerar el derecho administrativo y el Código de Aguas;
- j) Por establecer un régimen de privilegios contrarios al principio de igualdad ante la ley;
- k) Por suprimir el carácter de servicio público a la generación, transmisión y transformación;
- l) Por la lesión a la soberanía nacional, que implicaría la entrega del monopolio de la explotación de los sistemas de producción de energía a consorcios privados que no pueden consultar las necesidades estratégicas de la defensa y seguridad de la Nación;
- m) Por posibilitar la renegociación de los contratos-concesión otorgados a empresas extranjeras de electricidad;
- n) Por promover la liquidación definitiva de la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica;
- ñ) Por postergar, en consecuencia, el desarrollo y aprovechamiento por las provincias de sus recursos naturales y de sus fuentes de materias primas, retardando el proceso de transformación y progreso nacional.

Carlos Alberto Becerra. — Antulio F. Pozzio. — Anselmo A. Marini.

## ANTECEDENTES

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1959.

*Al Honorable Congreso Nacional.*

El proyecto de ley nacional de la energía eléctrica que el Poder Ejecutivo somete a consideración de vuestra honorabilidad, ha sido concebido como un anticipo de la futura legislación que, integrada con las normas legales sobre petróleo, energía nuclear, gas natural, carbón mineral y otras fuentes de energía, resulta indispensable para promover el desarrollo de las industrias energéticas y el aprovechamiento coordinado de tan importantes recursos naturales.

Nuestro país no cuenta con un estatuto legal orgánico que brinde suficiente seguridad jurídica en esta materia, y permita a todos los sectores sociales encontrar la protección debida a sus legítimos intereses.

Tanto en el orden estatal como en el empresario —público y privado—, en el laboral, en el de los usuarios particulares, en el de la industria y del agro, existen inquietudes y graves problemas legales y económicos a este respecto, que en gran parte pueden resolverse mediante una adecuada legislación, precisa y clara, que asegure a cada uno lo suyo y el debido resguardo de sus derechos y bienes.

Sólo en un ambiente de seguridad jurídica será factible el juego armónico de los intereses y el desarrollo de la industria eléctrica en proporciones compatibles con los requerimientos del país; con miras a satisfacer, en primer término, sus necesidades mínimas, lograr después un abastecimiento normal y eficiente, y promover en definitiva un desarrollo económico integral y regional en cada zona del interior.

Tal programa o plan se orienta fundamentalmente hacia el mayor aprovechamiento posible de la electricidad, la descentralización industrial y la electrificación rural, todo ello sin perjuicio de un eficiente abastecimiento a los centros de población urbana.

Pero esta orientación tropieza con dificultades a veces insalvables, ante la carencia de disposiciones legales especiales y orgánicas que regulen el aprovechamiento de las fuentes de energía hidráulica; el concepto legal de la electricidad, de la industria eléctrica y de los servicios públicos; el régimen de las concesiones y autorizaciones; el ejercicio de las distintas actividades de la industria eléctrica; la competencia de las diversas autoridades, dentro del marco general de nuestro sistema de gobierno; la interconexión eléctrica en todo el territorio nacional; los regímenes tarifarios y de precios de la electricidad; los planes generales y regionales de electrificación; la financiación de las obras; la coordinación de los servicios; la libre circulación de la energía eléctrica en todo el territorio nacional, etcétera.

A tan ambicioso plan de legislación responde, en sus grandes lineamientos —mediante la afirmación de principios básicos y normas fundamentales— el proyecto que se acompaña.

Su complementación mediante las normas reglamentarias que deberá dictar el Poder Ejecutivo ha de permitir la aplicación de los principios expuestos, evitando superposiciones, la dispersión del esfuerzo y de los fondos; y asegurando la acción de los gobiernos, en sus respectivas jurisdicciones, en un juego armónico con las actividades de los inversores y empresarios particulares, las del trabajo y las de los usuarios de los distintos servicios.

Se ha previsto también la creación de un Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, destinado a posi-

bilitar el reemplazo, en un futuro próximo, de las fuentes perecederas o transitorias de energía, por otras permanentes e imperecederas, como son las hidráulicas.

El petróleo, el gas natural, el carbón, no son recursos inagotables, por lo que resulta de buen gobierno la estructuración de normas que contemplen con la mayor antelación posible su reemplazo.

Por otra parte, el desarrollo extraordinario de la industria petroquímica aconseja prever la creciente necesidad de tales recursos naturales y asegurar su abastecimiento y expansión.

Ambos problemas se resuelven mediante la utilización de la fuerza hidráulica, que se pierde a diario en magnitudes equivalentes a millones de toneladas de petróleo, gas, etcétera.

La sustitución en un futuro próximo de las centrales térmicas, por hidroeléctricas —y más adelante por la energía nuclear, o nuevas fuentes— constituye un problema de orden económico y de sana previsión, que interesa a todo el pueblo y que no es posible descuidar sin grave riesgo para la economía de la Nación.

Dicho Fondo Nacional se complementa con un Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, destinado a facilitar la financiación de obras complementarias de las provincias, municipalidades, cooperativas, consorcios de usuarios y pequeñas empresas privadas. Se ha previsto un tratamiento preferencial para aquellos casos en que los fondos se destinen a planes que incluyan la electrificación rural y la adquisición de equipos o materiales eléctricos de fabricación nacional.

Cabe destacar que constituyendo el objetivo fundamental de la ley la promoción del desarrollo de la industria eléctrica en todo el territorio de la Nación, a fin de cubrir en un futuro cercano sus actuales demandas y las nuevas que el crecimiento social e industrial originen, es indispensable la interconexión de las grandes centrales de generación eléctrica, lo que permitirá por razones de orden técnico y económico la disponibilidad de energía abundante y barata aun en los lugares más apartados, y que por sí solos no justificarían una inversión de esa naturaleza.

Desde otro punto de vista, ello no solamente facilitará el intercambio de energía en períodos normales y su mayor aprovechamiento en los lugares en que más se la necesite, sino que representa una previsión para casos de emergencia y para la seguridad nacional.

Pero el basamento de los sistemas interconectados son las centrales hidroeléctricas; y por ello las grandes captaciones de energía hidráulica se consideran de utilidad pública, íntimamente afectadas al interés general y encuadradas en las previsiones del artículo 67 —inciso 16— y disposiciones concordantes de la Constitución Nacional.

Se establecen además en el proyecto normas claras y precisas sobre las condiciones básicas que deberán regir la prestación de los servicios públicos de electricidad de jurisdicción nacional, tanto en la Capital Federal y demás lugares que menciona el inciso 27 del artículo 67 de la Constitución Nacional como en los demás casos enunciados en el artículo 21 del proyecto, en que el gobierno nacional ejerce las atribuciones emergentes de los incisos 12 y 16 y disposiciones concordantes del mismo artículo de la Constitución.

Se ha incluido asimismo la creación del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, constituido por delegados de cada una de las provincias, de la Capital Federal y territorios nacionales, que tendrá por objeto actuar como organismo consultor y asesor del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales que lo requieran.

La institución cuenta con numerosos antecedentes en el derecho comparado y contribuirá con su valioso aporte a la orientación de la política de gobierno en materia de energía eléctrica; a la solución de los innumerables problemas de orden jurisdiccional, económico y legal que al respecto pueden presentarse, así como al perfeccionamiento ulterior de la ley y sus reglamentaciones, cuyas reformas tendrá como misión aconsejar.

Merece una especial atención el «transporte y distribución de la energía eléctrica» en todo el país.

La definición de los diversos sistemas —nacionales y provinciales— que en su conjunto integran el «Sistema Eléctrico Argentino», dando origen a la «Red Nacional de Interconexión», aclara conceptos dispersos y pone de manifiesto el promisorio futuro del desarrollo eléctrico dentro del más amplio respeto al régimen federal de la Constitución.

De tal modo, la Secretaría de Estado con competencia en materia de energía, con la participación que el proyecto acuerda al «Consejo Federal de la Energía Eléctrica», planificará y coordinará las obras y servicios integrantes del sistema.

Todas las funciones de control y policía técnica de los servicios estarán a cargo —en jurisdicción nacional— de la Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

El «Despacho de Cargas en la Red Nacional de Interconexión» y el manejo y funcionamiento de los «Sistemas Eléctricos del Estado», serán atendidos por Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado.

El Poder Ejecutivo fijará los precios y tarifas para la electricidad que se comercialice en las centrales y líneas integrantes de la «Red Nacional de Interconexión», los que deberán responder básicamente a los conceptos que el proyecto define.

Se establece así un basamento firme para los diversos intereses en juego, del Estado, de los usuarios y de los particulares o entidades que contribuyen con su aporte y su trabajo a la realización del plan trazado.

Todo ello sin perjuicio ni interferencias para los sistemas eléctricos de las provincias, en sus respectivas jurisdicciones y competencias.

Tales son, en grandes lineamientos, los principios generales en que se inspira el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo se complace en someter a consideración de vuestra honorabilidad y cuyo fundamento jurídico esencial se encuentra en las normas de los artículos 31, 67 incisos 12, 16, 27 y 2ª y concordantes de la Constitución Nacional.

Las normas que en el orden institucional y económico contiene el proyecto adjunto —todas ellas de relevante trascendencia para el programa de gobierno de expansión y desarrollo nacional— quedan a la espera del decidido apoyo que se encarece a vuestra honorabilidad, dada la urgencia que su aprobación requiere.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONDISI.

Alvaro C. Alsogaray. — Carlos A. Juni.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

### TITULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1º — La energía eléctrica, cualquiera sea la fuente que se utilice para su generación, es, jurídicamente considerada, una «cosa», en los términos del Código Civil, sin distinción de las personas a quienes pertenece, sean éstas de existencia visible o ideal, públicas o privadas.

Art. 2º — La energía eléctrica es comerciable, puede transferirse por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes generales civiles y comerciales, sin perjuicio de las regulaciones que por esta ley se establecen.

Art. 3º — Constituye servicio público de electricidad la distribución regular de energía eléctrica a los usuarios o consumidores —individualmente considerados— de una población urbana o rural.

Se considerarán de interés general, afectadas al servicio público y encuadradas en las normas legales y reglamentarias que aseguren su funcionamiento, todas las actividades de la industria eléctrica destinadas total o parcialmente al abastecimiento de energía a un servicio público.

Art. 4º — La compra y venta de electricidad entre una central y una línea de transmisión; o entre éstas y el ente administrativo o concesionario en su caso, que presta un servicio público, constituye una operación comercial de carácter privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

### TITULO II

#### Industria eléctrica

#### CAPÍTULO I

#### Disposiciones comunes

Art. 5º — Para los efectos de esta ley se comprende en la denominación genérica de industria eléctrica, la generación, transformación, transmisión y distribución de la electricidad.

Art. 6º — La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa, jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El derecho de utilización de la energía hidráulica no implica el de usar el agua ni la propiedad superficial para otros fines, salvo en la medida estrictamente indispensable para la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.

Art. 7º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica se distinguen en tres categorías, según tengan por objeto: grandes, medianas o pequeñas captaciones.

- a) Se consideran grandes captaciones aquellas cuya potencia normal —producto de la altura de la caída por el caudal medio anual— exceda de 15.000 kilovatios;
- b) Se consideran medianas captaciones las de una potencia normal igual o inferior a 15.000 kilovatios, pero excedente de 500 kilovatios;

- c) Se consideran menores las captaciones de energía hidráulica inferiores a 500 kilovatios de potencia.

Art. 8º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica serán autorizados por ley cuando los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra.

Art. 9º — El ejercicio de parte o de todas las actividades de la industria eléctrica de jurisdicción nacional, con el alcance definido en los artículos 5º, 21 y 22, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión o autorización del Poder Ejecutivo.

A) Se requiere concesión:

- I. Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua públicos, cuando la potencia normal exceda de 500 kilovatios.
- II. Para el ejercicio de las actividades destinadas a los servicios públicos de electricidad.

B) Se requiere autorización:

- I. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a 5.000 kilovatios.
- II. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea menor de 5.000 kilovatios, siempre que sus instalaciones requieran el uso de la vía pública o, en general, de bienes del dominio público, o afectados al uso o servicio público.

## CAPÍTULO II

### *Concesiones para el aprovechamiento de la energía hidráulica*

Art. 10. — Para los trabajos determinados en la concesión de aprovechamiento de energía hidráulica (artículo 9º, inciso A-D, así como para su explotación, el concesionario tendrá los siguientes derechos:

- I. De ocupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión, las propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua, y para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales.
- II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua.

Art. 11. — Cuando fuere necesaria la ocupación definitiva de propiedades privadas, siempre que un interés general lo justifique, el Poder Ejecutivo podrá declararlas de utilidad pública y sujetas a expropiación, en el acto constitutivo de la concesión.

Art. 12. — Quedan a cargo del concesionario las indemnizaciones que resulten como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

Art. 13. — El Poder Ejecutivo podrá acordar una contribución proporcional, bajo la forma de financiamiento,

subvención o exenciones impositivas, a los concesionarios cuyos trabajos y obras originen beneficios múltiples o cuyo objetivo principal sea el suministro de energía a servicios públicos; o interesen a la defensa nacional; o procuren un mejoramiento notable de las condiciones de utilización agrícola de los cursos de agua o la regularización de su régimen, o a su navegación.

Art. 14. — Las concesiones a que se refiere el artículo 10 podrán otorgarse, según su destino, por plazo fijo, o por tiempo indeterminado y con carácter precario. Entre las condiciones de la concesión deberán establecerse especialmente:

- 1º El objeto principal de la utilización.
- 2º Las previsiones reglamentarias del uso del agua, y en particular: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.
- 3º La potencia máxima y la sobreelevación de la potencia normal de la caída objeto de la concesión.
- 4º El plazo de ejecución de los trabajos.
- 5º El plazo de vigencia de la concesión cuando ésta sea a término, que no podrá exceder de sesenta años.
- 6º Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al Estado los bienes y las instalaciones.
- 7º Las condiciones y causales de caducidad o revocación por inobservancia de las obligaciones impuestas en la concesión.
- 8º El plazo de antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión por requerirlo el interés general, o por no subsistir las circunstancias que determinaron su otorgamiento, siempre que la concesión fuese por tiempo indeterminado.
- 9º El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso de la fuente. Dicho canon será ingresado por los respectivos concesionarios al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, cuando la concesión se encuentre sometida a la jurisdicción nacional.

Art. 15. — Toda cesión total o parcial de la concesión y todo cambio de concesionarios requerirán para ser válidos ser notificados y aceptados por la autoridad concedente. Esta, dentro de los seis meses de dicha notificación, deberá expresar su aceptación o rechazo fundado, teniéndosela por conforme en caso de silencio.

## CAPÍTULO III

### *Concesiones de servicio público*

Art. 16. — En las concesiones de servicio público de electricidad de jurisdicción nacional (artículo 9º, inciso A-II), sin perjuicio de las condiciones enunciadas en los artículos 14 y 15, en cuanto resulten de aplicación, se establecerá especialmente:

- a) Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones inherentes a la misma;

- b) Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente;
- c) La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de electricidad está obligado a atender;
- d) La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse, así como de sus modificaciones y ampliaciones;
- e) El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones;
- f) Las garantías que debe prestar el concesionario, de acuerdo con la reglamentación de esta ley;
- g) Las causales de caducidad y revocación;
- h) Las condiciones en que el Estado adquirirá los bienes afectados a la concesión al vencimiento del plazo por caducidad, revocación o falencia;
- i) Las obligaciones y derechos del concesionario;
- j) El porcentaje del suministro anual para servicio público;
- k) Las condiciones, derechos y obligaciones para la interconexión de las instalaciones;
- l) Los límites y condiciones para la prestación del suministro sin el carácter de servicio público;
- ll) La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los mismos; y en especial las instalaciones costeadas por terceros;
- m) La forma de determinación del capital inicial;
- n) El sistema de actualización del valor de los bienes afectados a la concesión cuando fuere necesario para determinar las tarifas, la utilidad del concesionario o el rescate por el Estado;
- ñ) El derecho de constituir las servidumbres necesarias destinadas a los fines de la concesión;
- o) Las atribuciones del Estado para la inspección y control;
- p) El régimen para los fondos de depreciación y ampliaciones;
- q) El régimen del suministro y venta;
- r) Las exenciones al régimen impositivo;
- s) El régimen tarifario;
- t) El régimen de infracciones y multas.

#### CAPÍTULO IV

##### *Autorizaciones y permisos*

Art. 17.—El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de las autorizaciones que se mencionan en el artículo 9º, inciso b).

Art. 18.—La energía hidráulica de los cursos de agua privada dentro de las prescripciones de la presente ley puede ser utilizada por los respectivos propietarios, y transferida a terceros, siempre que no revista el carácter de un servicio público.

Art. 19.—Podrán también los particulares individual o colectivamente, o agrupados en cooperativas, consorcios de usuarios, y otras formas de asociaciones legítimas, utilizar para las necesidades de sus propiedades o industrias, la energía hidráulica de los cursos de agua pública, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes o que se dicten, siempre que la potencia instalada no exceda de 500 kilovatios y no afecte a otros aprovechamientos, o a los planes generales y locales de electrificación.

Art. 20.—Cuando el Poder Ejecutivo autorice la construcción de redes generales para prestar servicios públicos de electricidad, cesará el derecho establecido en el artículo 19, siempre que así lo disponga la autoridad competente, debiendo los usuarios en tal caso interconectar las respectivas instalaciones con las redes generales, en las condiciones normales para todos los beneficiarios del servicio y abonar las correspondientes tarifas o contribuciones.

#### TÍTULO III

##### *Jurisdicción y competencia*

Art. 21.—Decláranse de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente; su transformación, transmisión y distribución, siempre que las mismas se vinculen a la seguridad o a un interés general de la Nación, al comercio de las provincias entre sí, o con las naciones extranjeras, sirvan a un establecimiento de utilidad nacional, o integren la red nacional de interconexión.

Decláranse asimismo de jurisdicción nacional a los efectos de la presente ley las grandes captaciones de energía hidráulica definidas en el artículo 7º, inciso a).

Art. 22.—Compete a la autoridad nacional por intermedio del Poder Ejecutivo otorgar, modificar o revocar las concesiones y autorizaciones actuales o futuras necesarias para el ejercicio de la industria eléctrica y ejercer las funciones de policía y demás atribuciones correspondientes a su jurisdicción, conforme a lo enunciado en el artículo anterior.

Art. 23.—Se encuentran sometidas a la jurisdicción provincial las captaciones medianas y menores de energía hidráulica, definidas en el artículo 7º, incisos b) y c), cuando los fines a que se las destinan son de interés local, o cuando en virtud de su autonomía o unidad técnica de servicio no se encuentren vinculadas a un interés nacional, y no interfieran los planes de trabajo, inversiones o servicios de interés nacional.

Art. 24.—La Nación, en cumplimiento de sus fines, y en los servicios de utilidad pública o de interés general, puede utilizar las fuentes de energía del dominio público, nacional, provincial y/o municipal, en la medida requerida para dichos fines; y promover su más adecuada utilización por todos los interesados, mediante leyes especiales protectoras de estos fines, y por concesiones temporales y recompensas de estímulo.

Art. 25.—Las disposiciones de la ley 4.408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán de aplicación supletoria para todas las actividades de la industria eléctrica de jurisdicción nacional, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales —provinciales y municipales— en cuanto sea materia de su respectiva competencia.

#### TÍTULO IV

##### *Importación y exportación de la energía eléctrica*

Art. 26.—La importación y la exportación de energía eléctrica sólo será permitida previa autorización, otorgada por el Poder Ejecutivo nacional, en la que se determinará la cantidad máxima de energía eléctrica a exportar o a importar.



**Art. 27.** — La autorización para importar y exportar energía eléctrica puede subordinarse a condiciones o garantías relativas al uso de la energía y al precio de venta o reventa.

**Art. 28.** — La autorización no tendrá una vigencia superior a 10 años, prorrogables; y podrá revocarse en cualquier momento cuando no subsistan las circunstancias que originaron su otorgamiento o por graves motivos de interés público.

**Art. 29.** — La revocación podrá también tener lugar por no uso de la concesión o por inobservancia de las condiciones a las cuales se subordinó su otorgamiento.

## TITULO V

### Consejo Federal de la Energía Eléctrica

**Art. 30.** — Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- A) Considerar y coordinar los planes de desarrollo del sistema eléctrico argentino, y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;
- B) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; a las prioridades en la ejecución de estudios y obras; a las concesiones y autorizaciones; y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad;
- C) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria eléctrica;
- D) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

**Art. 31.** — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por miembros natos y miembros titulares.

Son miembros natos:

- a) El subsecretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá;
- b) El presidente de la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica, que actuará como vicepresidente;

Son miembros titulares:

- a) Un representante de cada provincia designado a propuesta de los respectivos gobiernos locales;
- b) Un representante de la Capital Federal y territorios nacionales, que nombrará el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo nacional podrá designar cinco delegados, dos por el Senado y tres por la Cámara de Diputados, que participarán en las reuniones del consejo.

**Art. 32.** — El consejo designará un comité, integrado por sus miembros natos y cuatro titulares, que tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomiende;

- b) Ejercer las funciones que el mismo le delegue;
- c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato al consejo si el caso lo requiriese, o en la primera reunión ordinaria en su defecto.

**Art. 33.** — Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y del comité, las dependencias que determine la Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que dicte para su actuación.

**Art. 34.** — Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica se atenderán con cargo al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.

## TITULO VI

### Fondos eléctricos

#### CAPÍTULO I

#### *Fondo Nacional de la Energía Eléctrica*

**Art. 35.** — Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que se integrará:

- A) Con un aporte del Tesoro nacional que se fijará anualmente;
- B) Con el 50 % como mínimo del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;
- C) Con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía que se establecen en el artículo 14, inciso 9°;
- D) Con el derecho de importación de la electricidad que en cada caso se establezca por los organismos competentes;
- E) Con un recargo de \$ 0,10 por kilovatio-hora sobre el precio de venta de la electricidad. Queda facultado el Poder Ejecutivo para modificar este recargo, no pudiendo exceder del 10 % de dicho precio.

**Art. 36.** — El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles, y se aplicará:

- A) El 80 % del mismo, con destino exclusivo a los estudios, construcción y ampliación de las centrales, redes y obras complementarias o conexas que ejecute el Estado nacional;
- B) El 20 % remanente será transferido al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, inciso D).

**Art. 37.** — Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, podrá financiar sus obras de expansión futuras o en ejecución mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusivamente a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas en modo tal que el producido de las mismas cubra las amortizaciones e intereses de las deudas que se contraigan al amparo del presente régimen.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a

los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizados.

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipo de intereses y características financieras que considere convenientes a los fines de proceder a la emisión de los valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella se considere necesaria.

## CAPÍTULO II

### *Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior*

Art. 38. — Unificanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se integrará:

- A) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;
- B) Con los aportes del Tesoro de la Nación que corresponden a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Económico;
- C) Con el 10 % (diez por ciento) del producido del Fondo Nacional de la Energía;
- D) Con el 20 % (artículo 36, inciso B) del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Art. 39. — El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por la Dirección Nacional de la Energía y Combustibles, y se aplicará para:

- A) Préstamos a las provincias y municipalidades para sus planes de electrificación, siempre que encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía y no graven el consumo de energía eléctrica para otros fines que no sean exclusivamente del desarrollo de energía eléctrica;
- B) Préstamos a cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias;
- C) Préstamos a empresas privadas de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000 kilovatios instalados;
- D) Gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

Art. 40. — La Dirección Nacional de Energía y Combustibles administrará el fondo referido, asegurando en todos los casos el retorno de los préstamos efectuados, según las normas siguientes:

- A) En los casos del artículo 39, inciso A), con un interés no menor del 6 % anual y con amortización hasta quince años;
- B) Para los casos previstos en el artículo 39, inciso B), con un interés no menor del 6 % anual y con amortización hasta quince años;
- C) Para los casos del artículo 39, inciso C), con un interés no inferior al 8 % anual y con amortización hasta cinco años.

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta en 10 (diez) años más en los si-

guientes casos: a) Cuando los préstamos se apliquen total o parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural; b) Cuando se destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 80 % del total de la inversión. En estos casos el interés podrá ser disminuido hasta el 3 % anual para la parte proporcional correspondiente a las inversiones especificadas en los apartados a) y b).

## TÍTULO VII

### **Transporte y distribución de la energía eléctrica**

#### CAPÍTULO I

##### *Disposiciones especiales*

Art. 41. — El transporte y la distribución de energía eléctrica —excluidas las transmisiones de señales, palabras o imágenes, siempre que ellas constituyan su objetivo principal, a los cuales son aplicables sus respectivas leyes especiales— se rigen por las disposiciones de la presente ley.

Art. 42. — Serán de aplicación, a los fines determinados en el artículo precedente, los principios y normas básicas preceptuados en los títulos II y III, sobre industria eléctrica y jurisdicción y competencia de esta ley.

Art. 43. — Las obras e instalaciones de generación, transformación, transporte y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, y la energía generada o transportada en las mismas, no pueden ser gravadas con impuestos, contribuciones ni medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación.

#### CAPÍTULO II

##### *Sistemas eléctricos*

Art. 44. — Para los efectos de la presente ley se denominan:

- A) Sistema Eléctrico Argentino (SEA), al conjunto de centrales, líneas y redes de transmisión y obras e instalaciones complementarias —estatales y privadas— que se destinen, principalmente, a la provisión de energía eléctrica a los servicios públicos o a grandes industrias en todo el territorio nacional, cualquiera sea la jurisdicción a que pertenezcan;
- B) Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), las centrales, líneas y redes de transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias —sin distinción de las personas, públicas o privadas, a quienes pertenezcan—, sometidos a la jurisdicción nacional, según lo establecido en el título III, artículo 21 y siguientes;
- C) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP), las centrales, líneas y redes de jurisdicción provincial, según lo establecido en el título III, artículo 23;
- D) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE), las centrales, líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones complementarias de propiedad del Estado o que administra o explota el Estado;

- E) Red Nacional de Interconexión (RNI), al conjunto de Sistemas Eléctricos Interconectados.

Art. 45. — La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios integrantes del Sistema Eléctrico Argentino (SEA), y la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias, que integran la Red Nacional de Interconexión, cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 46. — Todas las funciones y atribuciones de gobierno, control y policía, en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles, la que tendrá a su cargo:

- A) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales, mediante la interconexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
- B) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la Nación;
- C) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro de las utilidades y la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
- D) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;
- E) Ejercer las funciones de policía de seguridad técnica de los sistemas; y de control técnico y contable sobre las instalaciones, funcionamiento y régimen tarifario;
- F) Impartir las normas técnicas y disposiciones necesarias para el funcionamiento y operación de los servicios, de acuerdo con los principios de la presente ley y de los reglamentos que se dicten para su aplicación; así como las relativas al despacho de cargas en los servicios eléctricos interconectados;
- G) Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, las tarifas y precios de compra y venta de la energía a los productores y a los distribuidores de la Red Nacional de Interconexión;
- H) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales y de la Red Nacional de Interconexión, con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 47. — El despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y el manejo y funcionamiento de los Sistemas Eléctricos del Estado estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrica, la que a dichos efectos, sin perjuicio de las facultades que le confiere su estatuto orgánico, tendrá las siguientes atribuciones:

- A) Comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nacional de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a las empresas u organismos prestatarios de servicios públicos de electricidad, y a las grandes industrias;
- B) Establecer anualmente el régimen de funcionamiento de cada central integrante de la Red Nacional de Interconexión;

- C) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de cargas, de acuerdo con las normas preparadas por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

### CAPÍTULO III

#### Precios y tarifas

Art. 48. — El Poder Ejecutivo nacional fijará los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en las centrales y líneas que integren la Red Nacional de Interconexión y en los servicios públicos de jurisdicción nacional, los que deberán responder básicamente a los siguientes conceptos:

#### A) Costos de capital:

1. Se considerarán en los costos de capital las dotaciones al fondo de renovación, que se determinarán sobre la base de un porcentaje fijo a establecer, sobre el valor de reposición de la potencia instalada, con sus equipos y elementos conexos.
2. Las dotaciones a los fondos de reserva.
3. Los impuestos.
4. Los seguros.
5. Las amortizaciones del capital, siempre que en la correspondiente a concesión o autorización existan cláusulas de reversión.
6. Los intereses del capital, que se reglarán de acuerdo con las normas de la correspondiente concesión o autorización.

#### B) Costos de los sueldos del personal:

1. Los sueldos, jornales y en general toda remuneración que se pague por concepto de los servicios prestados por los empleados y obreros, siempre que se efectúen como consecuencia del cumplimiento de las leyes y resoluciones administrativas o de convenios y contratos debidamente autorizados.
2. Los beneficios de carácter social establecidos y que se establezcan en favor del personal de empleados y obreros, por leyes, resoluciones y convenios legalmente autorizados, y las sumas que anualmente deben destinarse a constituir o incrementar los fondos de reserva especiales que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones.

C) Gastos generales, administración, dirección técnica y asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley;

D) Combustibles, lubricantes y en general todos los materiales cuyo consumo resulte necesario en el período correspondiente y que están destinados a la generación, transporte, distribución y venta de electricidad, en su caso;

E) Valor de la energía que se adquiera a terceros,

F) Intereses y gastos complementarios de financiación sobre bonos y otros capitales crediticios destinados a la explotación y que hayan sido aprobados previamente por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá exceder del 10 % anual sobre los respectivos capitales;

- G) Los demás gastos no especificados en los rubros anteriores, siempre que guarden relación de causalidad con las actividades de la explotación;
- H) Las pérdidas de energía por todo concepto, de acuerdo con las normas que establezca la Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

Art. 49. — Cláusulas de ajuste.

- A) Los gastos de capital, mantenimiento y varios se ajustarán anualmente;
- B) Los cambios que sufra el precio de la mano de obra y de los combustibles serán reajustados dentro de los treinta (30) días de producidos, de acuerdo con las fórmulas que establezca la Dirección Nacional de Energía y Combustibles;
- C) Las disminuciones de costo originadas en una mayor eficiencia técnica serán acreditadas por partes iguales a favor de los consumidores y la empresa o entidad productora, transportadora o distribuidora que las haya originado.

Art. 50. — Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base de la carga probable que se estima como conveniente, que soporte cada usina durante el año.

## TITULO VIII

### Disposiciones complementarias

Art. 51. — Las empresas del Estado o privadas que integren los servicios eléctricos nacionales ajustarán sus libros y contabilidad a un plan general de cuentas para permitir el control contable permanente de los mismos, por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

Art. 52. — Las industrias, cuando las circunstancias lo justifiquen y ello se juzgue conveniente y adecuado por la Secretaría de Energía y Combustibles, podrán abastecerse directamente e interconectar sus propias centrales con los servicios eléctricos nacionales.

Art. 53. — Las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirán el cinco por ciento (5 %) del importe que resulte de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a la venta en bloque.

Art. 54. — A los fines de la presente ley el Poder Ejecutivo queda autorizado para reorganizar los servicios eléctricos existentes de jurisdicción nacional que se presten en virtud de concesiones y/o contratos celebrados entre la Nación o los municipios y las concesionarios y/o empresas prestatarias, estableciendo de común acuerdo con éstas los nuevos contratos que los sustituyan o modifiquen. Queda facultado asimismo el Poder Ejecutivo para eximir de todo impuesto o gravamen a los contratos y los actos jurídicos u operaciones económico-financieras a que dé motivo el cumplimiento del presente artículo o que sean consecuencia de los acuerdos celebrados en virtud del mismo.

Art. 55. — Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes en cuanto se opongan a las de la presente ley.

Art. 56. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alvaro C. Alsogaray. — Carlos A. Juní.

## (Anexo a la orden del día número 46)

### I

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

### TITULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1º — La energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, forma parte del patrimonio público de la Nación, y en los casos previstos en los artículos 9º y 32 de esta ley, del patrimonio público de las provincias y se halla bajo el contralor del Estado nacional, o provincial, según corresponda a una u otra jurisdicción.

Art. 2º — La energía eléctrica es un servicio público, y su concesión, explotación, distribución, industrialización y comercialización solamente pueden ser autorizadas por el Estado.

Art. 3º — Constituye servicio público de electricidad la generación o producción de electricidad cualquiera sea su origen (térmico, hidráulico, nuclear, etcétera) y su distribución regular a los usuarios o consumidores ya sean de una población urbana o rural.

Se considerarán de interés general afectados al servicio público encuadrados en las normas legales y reglamentarias que aseguren su funcionamiento, todas las actividades de la industria eléctrica destinadas total o parcialmente a la generación, transporte, distribución y abastecimiento de energía eléctrica.

Art. 4º — Siendo un servicio público la generación y distribución de electricidad, el mismo será cumplido por un organismo jurídico, siendo indivisible la generación y distribución de la misma, salvo que la fuente generadora tenga un remanente de energía para ser conectada a la Red Nacional de Interconexión.

### TITULO II

#### Industria eléctrica

#### CAPÍTULO I

Art. 5º — Para los efectos de esta ley se comprende en la denominación genérica de industria eléctrica la generación o producción, la transformación, transporte y distribución de electricidad.

Art. 6º — El derecho de utilización de la energía hidráulica no implica el de usar el agua ni la propiedad superficial para otros fines, salvo en la medida estrictamente indispensable para la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones aplicables en cada caso.

Art. 7º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica se distinguen en tres categorías, según tengan por objeto grandes, medianas o pequeñas captaciones.

a) Se consideran grandes captaciones aquellas cuya potencia normal —producto de la altura

de la caída por el caudal medio anual—exceda de 15.000 kilovatios;

- b) Se consideran medianas captaciones las de una potencia normal igual o inferior a 15.000 kilovatios, pero excedente de 500 kilovatios;
- c) Se consideran menores las captaciones de energía hidráulica inferiores a 500 kilovatios de potencia.

Art. 8º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica serán autorizados por ley del Congreso de la Nación siempre que los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasiego del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, o cuando se trate del aprovechamiento de ríos internacionales.

Art. 9º — El ejercicio de parte o de todas las actividades de la industria eléctrica, de jurisdicción nacional, con el alcance definido en los artículos 5º, 29, 30 y 32, requiere concesión por ley del Congreso.

#### A) Se requiere concesión:

I — Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua públicos cuando la potencia normal exceda los 15.000 kilovatios.

II — Para el establecimiento de plantas térmicas o nucleares o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a 10.000 kilovatios.

El aprovechamiento de fuentes de energía hidráulica menores de 15.000 kilovatios y el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución menores de 10.000 kilovatios será objeto de concesiones o autorizaciones por cuenta de los gobiernos provinciales o municipales a que correspondan dichas fuentes o establecimientos.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo nacional realizará en todos los casos licitaciones públicas para establecer y explotar los servicios de energía eléctrica.

Art. 11. — La licitación pública será hecha por medio de la publicación en el Boletín Oficial y en los Diarios de la Capital Federal.

Art. 12. — Sólo serán tenidas en cuenta las propuestas de los participantes a la licitación cuya idoneidad técnica, moral y financiera haya sido previamente verificada por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica a que se refieren el artículo 40 y subsiguientes.

## CAPÍTULO II

### *Concesiones de servicios públicos*

Art. 13. — En las concesiones de servicio público de electricidad de jurisdicción nacional se establecerá especialmente:

- a) Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones inherentes a la misma;
- b) Las condiciones de uso y ocupación de bienes del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario cuando fuere pertinente;

- c) La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de electricidad está obligado a atender;
- d) La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse; así como de sus modificaciones y ampliaciones;
- e) El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones;
- f) Las garantías que debe prestar el concesionario de acuerdo con la reglamentación de esta ley;
- g) Las condiciones y causales de caducidad o revocación por inobservancia de las obligaciones impuestas en la concesión;
- h) El plazo de antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión;
- i) Las obligaciones y derechos del concesionario;
- j) El porcentaje del suministro anual para servicio público;
- k) Las condiciones, derechos y obligaciones para la interconexión de las instalaciones;
- l) El plazo de vigencia de la concesión, que no podrá exceder de 30 años;
- ll) La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los mismos; y, en especial, las instalaciones costeadas por terceros;
- m) La forma de determinación del capital inicial;
- n) El derecho de constituir las servidumbres necesarias destinadas a los fines de la concesión;
- ñ) Las atribuciones del Estado para la inspección y contralor;
- o) El régimen para los fondos de depreciación y ampliaciones;
- p) El régimen del suministro y venta de energía;
- q) El régimen tarifario;
- r) El régimen de penalidades y multas;
- s) Las condiciones en que el Estado adquirirá los bienes afectados a la concesión al vencimiento del plazo, por caducidad, revocación o falencia.

Art. 14. — Para los trabajos determinados en la concesión de aprovechamiento de energía hidráulica (artículo 9º, inciso A-1), así como para su explotación, el concesionario tendrá los siguientes derechos:

- I. De ocupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión las propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua y para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales.
- II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua.

Art. 15. — Cuando fuere necesario la ocupación definitiva de propiedades privadas, siempre que un interés general lo justifique, el Congreso de la Nación podrá declararlas, en virtud de una ley, de utilidad pública o sujetas a expropiación, en el acto constitutivo de la concesión.

Art. 16. — Quedan a cargo del concesionario las indemnizaciones que resulten como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 14 y 15.

Art. 17. — Las concesiones a que se refiere el artículo 14 deberán ajustarse además a las condiciones siguientes:

- 1º El objeto principal de la utilización.
- 2º Las necesidades de la defensa nacional.
- 3º Las previsiones reglamentarias del uso del agua, y en particular las que interesen: a la navegación; a la protección contra las inundaciones; a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas; al riego; a la conservación y libre circulación de los peces; a la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.
- 4º La potencia máxima y la sobreelevación de la potencia normal de la caída objeto de la concesión.

Art. 18. — Toda concesión no podrá ser cedida total o parcialmente sin autorización del Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso.

### CAPÍTULO III

#### De las tarifas

Art. 19. — Las tarifas de los servicios de energía eléctrica serán establecidos exclusivamente en moneda nacional.

Art. 20. — Las tarifas serán fijadas por el Consejo Federal de Energía Eléctrica:

- a) Bajo la forma de servicio de costo;
- b) Garantizando la remuneración de la empresa concesionaria sobre la inversión del capital real;
- c) No existirán discriminaciones entre consumidores, quedando en las mismas condiciones de utilización del servicio.

Art. 21. — El costo del servicio eléctrico comprende:

- a) Gastos de explotación;
- b) Remuneración de la inversión;
- c) Índice de amortización y depreciación.

Se considerarán gastos de explotación los necesarios para la prestación del servicio de energía eléctrica y su venta, comprendiendo la producción, el transporte y la distribución, así como los gastos generales y de administración.

No serán considerados como gastos de explotación los intereses y la amortización de empréstitos contratados para la realización de la inversión, ya sea en moneda nacional o extranjera, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Si la empresa fuese deudora de empréstitos en moneda extranjera contraídos para la instalación o aumento de su inversión, será considerada como gastos de explotación la diferencia entre el costo del cambio realmente pagado para la remesa de capital e intereses de los referidos empréstitos, y aquel en que esté contabilizado el empréstito o que sirvió de base para la determinación del costo real de los bienes e instalaciones construidas o adquiridas con el producto del empréstito.

Art. 22. — En el costo del servicio será considerado un importe global anual correspondiente a un porcentaje sobre el capital real reconocido que compense

las depreciaciones de bienes, y que se destinará a constituir el fondo de reserva legal.

Art. 23. — Las tarifas estarán sujetas a una revisión obligatoria cada tres años pero podrán ser reajustadas antes de ese plazo, en más o en menos, a fin de mantener la paridad entre los ingresos y el costo del servicio.

Art. 24. — A fin de efectuarse la revisión trienal de la tarifas, el concesionario deberá presentar al Consejo Federal de Energía Eléctrica:

- a) La demostración de costo de los servicios durante los tres ejercicios últimos;
- b) El detalle, del volumen de venta de energía y los ingresos obtenidos durante el mismo período;
- c) La previsión de costo del servicio en el próximo período tarifario;
- d) La previsión de la venta de energía en el próximo período tarifario;
- e) El cálculo de la tarifa, se efectuará a los elementos siguientes:

#### I. Gastos de operación:

- a) Personal, número, costo;
- b) Cargas sociales, porcentajes, costo;
- c) Combustibles, cantidad, costo;
- d) Material;
- e) Energía comprada, cantidad y costo;
- f) Diferencia en el servicio de empréstito de acuerdo al artículo 22.

#### II. Impuestos y tasas. Relación y valores.

#### III. Cuotas de depreciación y amortización. Porcentajes y montos.

#### IV. Interés del capital invertido.

Art. 25. — El Consejo Federal de Energía Eléctrica comprobará los datos suministrados, verificará los cálculos efectuados para la determinación de la nueva tarifa y fijará el precio de ésta.

Art. 26. — A los efectos de la aplicación de las tarifas, los consumidores se dividen en las siguientes clases:

1. — Consumidores particulares.
2. — Consumidores industriales.
3. — Consumidores comerciales.
4. — Consumidores rurales.
5. — Iluminación pública.
6. — Reparticiones públicas del Estado.
7. — Ferrocarriles.
8. — Otros transportes colectivos.
9. — Otras empresas de electricidad.
10. — Red nacional de interconexión.

Dentro del mismo grupo no hay distinción entre los consumidores, salvo en cuanto a las condiciones del suministro y utilización del servicio.

### CAPÍTULO IV

#### De las penalidades

Art. 27. — Los concesionarios de servicios de energía eléctrica incurrirán en multa:

- I. Por la falta de suministro en los plazos que le sean asignados o por falsedad de datos estadísticos de naturaleza técnica, contable, económica o de cualquier otra clase de información requerida directamente por el Consejo Fede-

ral de Energía Eléctrica o que deba suministrar de acuerdo a la ley.

- II. Si se verificase la ineficiencia de funcionamiento o de conservación de las instalaciones, y si las características del suministro no satisficieren las exigencias de esta ley, y las mismas no fuesen normalizadas dentro del plazo fijado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica, salvo los casos de fuerza mayor.
- III. Si no fuesen ejecutadas las ampliaciones y mejoras de las instalaciones determinadas de acuerdo con la ley y dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor.
- IV. Si una vez obtenido el mínimo permitido del factor reserva de su sistema generador, el concesionario que dentro de los seis meses de alcanzado el mínimo de disponibilidad permitido, no adoptase los medios necesarios para obtener un aumento de su potencial eléctrico, y presentase los proyectos de las ampliaciones necesarias, así como iniciar y concluir los trabajos en los plazos que le fueren fijados.
- V. Por incumplimiento de las demás exigencias de la presente ley y su reglamentación, y de sus instrucciones y normas técnicas serán aplicadas multas que oscilarán entre 50.000 y 1.000.000 de pesos moneda nacional.

Art. 28. — Cuando los concesionarios reincidiesen en algunas de las infracciones del artículo anterior, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, después de la necesaria verificación y oído el concesionario, clasificará la infracción y aplicará una multa de 500.000 a 2.000.000 de pesos moneda nacional, en concepto de indemnización o rezarcimiento de daños y perjuicios pudiendo también solicitar al Congreso la caducidad de la concesión.

### TITULO III

#### Jurisdicción y competencia

Art. 29. — Declárase de jurisdicción nacional la generación o producción de energía eléctrica de fuente nuclear o atómica de cualquier potencia, las de fuente hidráulica que exceda los 15.000 kilovatios y las térmicas o de cualquier otra fuente que sean superiores a los 10.000 kilovatios, su transformación, transmisión y distribución, quedando entendido que a los efectos de la comercialización, estos procesos eléctricos son indivisibles, salvo que la fuente generadora sea conectada a la red nacional de interconexión.

Art. 30. — Podrán efectuarse acuerdos entre la Nación y las provincias para un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica dentro del territorio de la República, pudiendo éstas ingresar en la red nacional de interconexión, con su caudal remanente, a una tarifa que se determinará de común acuerdo entre las partes.

Art. 31. — Compete a la autoridad nacional, por intermedio del Congreso, otorgar, notificar o revocar las concesiones y autorizaciones actuales o futuras para el ejercicio de la industria eléctrica, y el Poder Ejecutivo deberá ejercer las funciones de policía y demás atribuciones correspondientes a su jurisdicción conforme a lo enunciado en el artículo 30.

Art. 32. — Las provincias ejercerán en sus respectivos territorios, respecto de las fuentes de energía hidráulica y su utilización, sus poderes propios de policía y las atribuciones que les son conferidas por la presente ley, con excepción de las siguientes:

- a) Las que correspondan a fuentes de energía provenientes de cursos de agua de jurisdicción nacional;
- b) Las de potencia superior a 15.000 kilovatios;
- c) Las que por su situación geográfica puedan interesar a más de una provincia;
- d) Aquellas cuyo aprovechamiento racional exija trabajos de regularización o acumulación, interesando a más de una provincia.

También se encuentran sometidas a jurisdicción provincial o municipal las plantas térmicas menores de 10.000 kilovatios, su transmisión, transformación y distribución dentro de los límites del territorio de la provincia.

Art. 33. — La Nación, en cumplimiento de sus fines y en los servicios de utilidad pública o de interés general, puede utilizar las fuentes de energía de dominio público, nacional o provincial y/o municipal, en la medida requerida para dichos fines; y promover su más adecuada utilización por todos los interesados mediante leyes especiales protectoras de estos fines y por concesiones temporales y recompensas de estímulo.

Art. 34. — Las disposiciones de la ley 4.408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán de aplicación supletoria para todas las actividades de la industria eléctrica de jurisdicción nacional, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales, provinciales y municipales, en cuanto sea materia de su respectiva competencia.

### TITULO IV

#### Importación y exportación de energía eléctrica

Art. 35. — La importación y la exportación de energía eléctrica sólo será permitida previa autorización otorgada por ley del Congreso, en la que se determinará la cantidad máxima de energía eléctrica a exportar o a importar.

Art. 36. — La autorización para importar y exportar energía eléctrica puede subordinarse a condiciones o garantías relativas al uso de la energía y al precio de venta o reventa.

Art. 37. — La autorización no tendrá vigencia superior a diez años prorrogables, y podrá revocarse en cualquier momento cuando no subsistan las circunstancias que originaron su otorgamiento, o por graves motivos de interés público.

Art. 38. — La revocación podrá también tener lugar por no uso de la concesión o por inobservancia de las condiciones a las cuales se subordinó su otorgamiento.

### TITULO V

#### Consejo Federal de la Energía Eléctrica

Art. 39. — Créase como organismo autárquico el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, con directa vinculación a la Secretaría de Energía y Combustibles. El Poder Ejecutivo, dentro del ordenamiento de la presente ley, reglamentará el funcionamiento de dicho organismo. El Consejo Federal de Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo del sistema eléctrico argentino y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;

- b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad, a las prioridades en la ejecución de estudios y obras, a las concesiones y autorizaciones y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad;
- c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria eléctrica;
- d) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

Art. 40. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por miembros titulares nombrados:

- a) Dos representantes de la Empresa del Estado Agua y Energía;
- b) Un representante por cada provincia, designados a propuesta de los respectivos gobiernos locales;
- c) Un representante de la Capital Federal y territorios nacionales, que nombrará el Poder Ejecutivo;
- d) Dos delegados por la Cámara de Senadores de la Nación y cuatro por la Cámara de Diputados que participarán de las reuniones del consejo;
- e) Dos representantes de la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza.

El presidente y el vicepresidente del consejo federal serán elegidos entre los miembros de este organismo, por simple mayoría. Los miembros titulares durarán dos años en sus funciones y serán reelegibles.

Art. 41. — El consejo designará un comité integrado por seis de sus miembros titulares, que tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomienda;
- b) Ejercer las funciones que el mismo le delegue;
- c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta inmediatamente al consejo, si el caso lo requiriese, o en la primera reunión ordinaria, en su defecto.

Art. 42. — Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y del comité las dependencias que determine la Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que dicte para su actuación.

Art. 43. — Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica se atenderán con cargo al fondo especial de desarrollo eléctrico del interior.

## TÍTULO VI

### Fondos eléctricos

#### CAPÍTULO I

##### *Fondo Nacional de la Energía Eléctrica*

Art. 44. — Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que se integrará:

- a) Con un aporte del tesoro nacional que se fijará anualmente;

- b) Con el 50 % como mínimo del producido del fondo nacional de la energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;
- c) Con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía;
- d) Con el derecho de importación de la electricidad que en cada caso se establezca por los organismos competentes;
- e) Con un recargo de \$ 0,10 por kw. sobre el precio de venta de la electricidad. Queda facultado el Poder Ejecutivo para modificar este recargo, no pudiendo exceder del 10 % de dicho precio.

Art. 45. — El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se aplicará:

- a) El 70 % del mismo, con destino exclusivo a los estudios, construcción y ampliación de las centrales, redes y obras complementarias o conexas que ejecute el Estado nacional;
- b) El 30 % remanente será transferido al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 47, inciso d).

Art. 46. — Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado, podrá financiar sus obras de expansión futuras o en ejecución mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan, las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizadas.

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipo de interés y característica financiera que considere conveniente, a los fines de proceder a la emisión de los valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella se considere necesaria.

#### CAPÍTULO II

##### *Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico Interior*

Art. 47. — Unifícanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se integrará:

- a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;
- b) Con los aportes del tesoro de la Nación que corresponden a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Económico;
- c) Con el 10 % del producido del Fondo Nacional de Energía Eléctrica;
- d) Con el 30 % (artículo 45, inciso b) del Fondo Nacional de Energía.

Art. 48. — El Fondo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se aplicará para:



- a) Préstamos a las provincias y municipalidades para sus planes de electrificación, siempre que encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía, y no graven el consumo de energía eléctrica para otros fines que no sean exclusivamente del desarrollo de energía eléctrica;
- b) Préstamos a cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias;
- c) Préstamos a empresas privadas de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios, en centrales de capacidad no superior a 2.000 kw. instalados;
- d) Gastos que demande el Consejo Federal de Energía Eléctrica.

Art. 49. — El Consejo Federal de Energía Eléctrica administrará el Fondo referido asegurando en todos los casos el retorno de los préstamos efectuados según las normas siguientes:

- a) En los casos del artículo 48, inciso a), con un interés no menor del 6 % anual y con amortización hasta quince años;
- b) Para los casos previstos en el artículo 49, inciso b), con un interés no menor del 6 % anual, y con amortización hasta quince años;
- c) Para los casos del artículo 48, inciso c), con un interés no menor al 8 % anual y con amortización hasta cinco años.

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta 10 años más en los siguientes casos:

- a) Cuando los préstamos se apliquen total o parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural;
- b) Cuando se destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 80 % del total de la inversión. En estos casos el interés podrá ser disminuído hasta el 3 % anual para la parte proporcional correspondiente a las inversiones especificadas en los apartados a) y b).

## TITULO VII

### Transporte y distribución de la energía eléctrica

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones especiales

Art. 50. — El transporte y la distribución de la energía eléctrica, excluidas las transmisiones de señales, palabras o imágenes, siempre que ellas constituyan su objetivo principal, a los cuales son aplicables sus respectivas leyes especiales, se rigen por las disposiciones de la presente ley.

Art. 51. — Serán de aplicación a los fines determinados en el artículo precedente, los principios y normas básicas preceptuadas en los artículos referentes a industria eléctrica y jurisdicción y competencia de esta ley.

Art. 52. — Las obras e instalaciones de generación, transformación, transporte y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, y la energía

generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos, contribuciones ni medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación.

## CAPÍTULO II

### Sistemas eléctricos

Art. 53. — Para los efectos de la presente ley se denominan:

- a) Sistema Eléctrico Argentino —SEA— al conjunto de centrales, líneas y redes de transmisión y obras e instalaciones complementarias, estatales o privadas, que se destinen principalmente a la provisión de energía eléctrica a los servicios públicos o a grandes industrias en todo el territorio nacional, cualquiera sea la jurisdicción a que pertenezcan;
- b) Sistemas Eléctricos Nacionales —SEN— las centrales, líneas y redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias sin distinción de las personas, públicas o privadas a quienes pertenezcan, sometidos a la jurisdicción nacional según el artículo 29;
- c) Sistema Eléctrico del Estado —SEE— las centrales y líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones complementarias de propiedad del Estado o que administra o explota el Estado;
- d) Red Nacional de Interconexión —RNI— el conjunto de sistemas eléctricos interconectados.

Art. 54. — Las secretarías de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo Federal de Energía Eléctrica tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios integrantes del Sistema Eléctrico Argentino —SEA— y la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran la Red Nacional de Interconexión, cuya aprobación será efectuada por ley del Congreso Nacional.

Art. 55. — Todas las funciones y atribuciones de gobierno, contralor y policía en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica serán ejercidas por el Consejo Federal de Energía Eléctrica, el que tendrá a su cargo:

- a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales mediante la interconexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
- b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la Nación;
- c) Mantener actualizado el inventario de las fuerzas de energía, el catastro de las utilidades y la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
- d) Asesorar al Congreso con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;
- e) Impartir las normas técnicas e instrucciones y disposiciones necesarias para el funcionamiento y operación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de los reglamentos que se dicten para su aplicación, así como las relativas al despacho de cargas en los servicios eléctricos interconectados;

- f) Reglamentar el funcionamiento de Sistemas Eléctricos Nacionales y de la Red Nacional de Interconexión con aprobación del Congreso.

## TITULO VIII

### Disposiciones complementarias

Art. 56. — Las industrias, cuando las circunstancias lo justifiquen y ello se juzgue conveniente y adecuado, por autorización del Consejo Federal de Energía Eléctrica podrán abastecerse directamente e interconectar sus propias centrales con los servicios eléctricos nacionales.

Art. 57. — A los fines de la presente ley el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Congreso, podrá reorganizar los servicios eléctricos existentes de jurisdicción nacional que se presten en virtud de concesiones y/o contratos celebrados entre la Nación o los municipios y los concesionarios y/o empresas prestatarias. El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso los nuevos contratos que se sustituyan o modifiquen.

Art. 58. — La fiscalización técnica de los servicios de energía eléctrica será ejercida por el Consejo Federal de Energía Eléctrica, y comprende:

- a) La ejecución de los proyectos de obras e instalaciones;
- b) La utilización de la energía;
- c) El cumplimiento de la presente ley y de las instrucciones y normas técnicas referentes a la utilización de la energía eléctrica.

Art. 59. — A fin de ejercer su fiscalización contable las empresas concesionarias deberán llevar sus libros de contabilidad en moneda nacional y organizar sus registros y archivos de modo de posibilitar su inspección permanente y la revisión de sus cuentas.

Art. 60. — El Consejo Federal de Energía Eléctrica ejercerá la fiscalización contable y financiera y verificará la emisión de títulos de deuda por las empresas concesionarias de energía eléctrica.

Sólo se permite la emisión de títulos, cualquiera sea su naturaleza, para:

- a) Adquisición de propiedades;
- b) La construcción, ampliación o mejora de instalaciones, sistemas de distribución u otras obras relacionadas con aquélla;
- c) La adquisición de equipos destinados a mejorar la actividad y la conservación de los bienes e instalaciones en servicio.

Art. 61. — Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes en cuanto se opongan a las de la presente ley.

Art. 62. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Ernesto E. Sammartino.*

Señor presidente:

Para la presentación y estructuración del presente proyecto de ley he partido del convencimiento de que es necesaria en el país una ley orgánica de la energía eléctrica. No es ésa una convicción repentina ni reciente.

En el año 1946 (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, año 1946, tomo I, página 100) presenté un proyecto de ley declarando de utilidad pública los servicios de generación y distribución de energía eléctrica. En ese proyecto creaba la Dirección Nacional de Energía y señalaba las fun-

ciones de ese organismo. Hoy complemento y amplío ese proyecto que no obtuvo despacho de la Comisión de Legislación General. La iniciativa que acompaño con estos fundamentos no es totalmente original. Para elaborarla he incorporado a su texto diversas disposiciones del proyecto del Poder Ejecutivo, que, en su conjunto, he modificado substancialmente.

He seguido, asimismo, en otros capítulos, los lineamientos de la ley de energía del Brasil, y he sido asesorado en aspectos específicos y generales por el ingeniero Héctor Lhez, que pertenece a esa patriótica y clarividente legión de técnicos argentinos que desechando todas las seducciones materiales y desafiando todos los obstáculos, viene luchando desde hace años por la liberación económica del país.

Algún día figurarán los nombres de todos estos esforzados y a la vez desconocidos soldados de la independencia económica argentina, sin la cual la independencia política carecería de significación, en el cuadro de honor de los auténticos forjadores de la nacionalidad.

En el proyecto que acompaño he comenzado por afirmar en los dos primeros artículos, en oposición al concepto del proyecto oficial, que la define como una "cosa", que la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, forma parte del patrimonio público y se halla bajo el contralor del Estado, que es el único que puede autorizar, por ley del Congreso, su concesión, explotación, distribución, industrialización y comercialización.

En el artículo 4º del proyecto considero indivisible la generación y distribución de la energía, en contraposición del artículo 4º del proyecto oficial, que abre las puertas a las maniobras de las empresas privadas que pretenden reservarse la propiedad de las usinas y dejar al Estado las redes que se encuentran en pésimo estado y las tareas de distribución del servicio.

El artículo nueve de la iniciativa que acompaño establece que se requerirá concesión por ley del Congreso de la Nación para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica cuando la potencia normal exceda de 15.000 kilovatios, y para el establecimiento de plantas técnicas o nucleares o líneas de transmisión o distribución, cualquiera sea la fuente de energía a transportar cuando la potencia sea igual o superior a 10.000 kilovatios.

En cambio, serán los gobiernos provinciales, por la vía que determinen, los que otorguen las concesiones cuando no se trate de trasvase de agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, cuando no se trate de aprovechamiento de ríos internacionales, o cuando se trate del aprovechamiento de fuentes de energía hidráulica menores de 15.000 kilovatios y el establecimiento de plantas térmicas menores de 10.000 kilovatios, siempre, claro está, que las fuentes de generación de energía se hallen en los límites jurisdiccionales. Además, si las provincias lo estiman conveniente a sus intereses, pueden vender el exceso de energía eléctrica a la Nación, conectándose a la red nacional de interconexión.

Por el artículo 10 propongo que si es necesario otorgar concesiones, se lleve a cabo por licitación pública, como se estila en todos los países democráticos.

Nada concreto dice el proyecto oficial de las tarifas, que han sido objeto de minuciosas disposiciones en la ley de energía del Brasil, de la que he tomado los principios fundamentales en la materia.

En Brasil, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, según la reglamentación de la ley de energía, tiene, entre otras atribuciones:

1º Por el artículo 15, la fiscalización técnica.

2º Por el artículo 25, la fiscalización contable, debiendo las empresas mantener regularmente anotados, según el artículo 26, en moneda nacional, sus libros de contabilidad y organizar sus registros y archivos, de modo de posibilitar la inspección permanente de la fiscalización y revisión de cuentas.

De acuerdo al artículo 28, los organismos de fiscalización podrán impugnar los asientos de los libros de la empresa, la que deberá rectificar los errores dentro de los 60 días.

Nada de esto pasa con las empresas de electricidad de nuestro país, cuyos asientos contables se hacen discrecionalmente.

Todos estos problemas han sido previstos y resu-

También he incorporado un capítulo de penalidades, que no figura en el proyecto oficial, y he asignado autarquía al Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

Otras disposiciones de la iniciativa, que por razones de brevedad no comento, sirven para configurar las diferencias profundas que las separan, conceptual y orgánicamente, del proyecto original del Poder Ejecutivo.

Ernesto E. Sammartino.

## II

(Punto II. — Señor diputado Rosenkrantz y otros)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

## LEY NACIONAL DE ENERGIA

### TITULO PRIMERO

#### *Plan nacional de desarrollo eléctrico*

Artículo 1º — Apruébase el plan nacional de electrificación, para el decenio 1961/1970, elaborado por Agua y Energía - Empresa del Estado, integrado por las obras e instalaciones que figuran en los anexos adjuntos y por aquellas otras que revistan el carácter de complementarias y/o accesorias:

Anexo 1 — Centrales hidráulicas

„ 2 — „ térmicas

„ 3 — Líneas de transmisión y distribución

Art. 2º — El plan de estudios, obras e instalaciones de que habla el artículo anterior y su habilitación, se sujetarán a las indicaciones contenidas en la parte pertinente de los anexos mencionados.

Art. 3º — Los beneficios del plan nacional de electrificación se extenderán a las provincias que expresamente se adhieran al mismo mediante leyes o convenios por los que, además, se coordinen con los organismos nacionales:

- a) Los regímenes de utilización y fiscalización de las aguas;
- b) Los sistemas de obras;
- c) Los sistemas operativos de la energía eléctrica; y
- d) Los regímenes financieros pertinentes.

### TITULO SEGUNDO

#### *Del dominio de las fuentes de energía*

Art. 4º — Las fuentes naturales de la energía son bienes del dominio público de la Nación o de las provincias, según el lugar en que se encuentren.

Art. 5º — El dominio sobre dichas fuentes es inalienable, inembargable e imprescriptible.

### TITULO TERCERO

#### *Servicio público*

Art. 6º — La generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, constituye una unidad técnica, económica y jurisdiccional, y se denomina «servicio público de electricidad».

Art. 7º — El «servicio público de electricidad», implica el suministro regular y continuo del fluido eléctrico con el fin de atender a las necesidades indispensables y generales de los usuarios de una colectividad o grupo social determinado, de acuerdo a las reglamentaciones pertinentes.

Art. 8º — Prohíbese el otorgamiento de nuevas delegaciones, en cualquier forma, de prestaciones del «servicio público de electricidad» a empresas privadas con fines de lucro.

Art. 9º — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica realizará las obras hidroeléctricas, teniendo en cuenta:

- a) Las necesidades nacionales y provinciales del riego;
- b) La conservación y fiscalización de los recursos hidráulicos;
- c) La necesaria coordinación entre el Estado nacional y las provincias;
- d) Los derechos y obligaciones de los usuarios y beneficiarios; y
- e) La adecuación del siguiente régimen general de prioridades a cada caso en particular:

I. Bebida y uso sanitario.

II. Riego.

III. Navegación.

IV. Hidroelectricidad.

V. Saneamiento, desagües y defensas.

### TITULO CUARTO

#### *Sistematización e interconexión*

Art. 10. — A los efectos de la presente ley, las centrales, las líneas y redes de transmisión y distribución y las obras e instalaciones complementarias, prestarías de los servicios públicos de electricidad, se clasificarán según la jurisdicción a que estén sujetas, en:

- a) Sistema Eléctrico Municipal (SEM);
- b) Sistema Eléctrico Provincial (SEP);
- c) Sistema Eléctrico Regional (SER);
- d) Sistema Unificado Nacional (SUN).

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica determinará los límites geográficos de los sistemas eléctricos regionales delineados en el plan aprobado por esta ley, con el consentimiento de las provincias afectadas.

Dentro de cada sistema se juzgará comprendida toda otra operación o acto jurídico destinado a resguardar y a asegurar la continuidad del respectivo servicio público de electricidad.

Art. 11. — El despacho de cargas en el Sistema Unificado Nacional y el manejo y funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Regionales estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado.

Art. 12. — También estarán a cargo de la misma empresa las investigaciones, estudios, proyectos y obras inherentes al plan aprobado en el artículo 1º.

## TITULO QUINTO

### *Del gobierno de la energía*

Art. 13. — La Secretaría de Energía y Combustibles, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, el Banco de Electrificación y Riego, Agua y Energía Eléctrica - Empresa del Estado, las empresas de energía provinciales o municipales, constituyen, dentro de sus respectivas atribuciones, los entes a cargo del gobierno de la energía eléctrica en todo el ámbito del país.

Art. 14. — Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del país y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;
- b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de provincia que lo requieran en todo lo concerniente a los servicios públicos de electricidad; a las prioridades en la ejecución de los estudios y obras; a las concesiones y a los precios y tarifas para los servicios públicos de electricidad;
- c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de energía eléctrica;
- d) Proponer las normas que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

Art. 15. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por:

- a) El secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá o el subsecretario en su reemplazo;
- b) Un representante y un suplente para que lo sustituya, designados por los gobiernos de cada provincia;
- c) Un representante de la Capital Federal;
- d) Tres representantes de los usuarios, a saber: industriales, comerciantes y particulares, nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de los organismos que determine la reglamentación;

- e) Un representante del personal, a propuesta de la organización profesional que determine la reglamentación.

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros, tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

La Dirección Nacional de Energía y Combustibles, Agua y Energía Eléctrica - Empresa del Estado y el Centro Argentino de Ingenieros, nombrarán cada una de ellos un asesor que en forma permanente podrá asistir a las reuniones del consejo.

Art. 16. — El consejo designará seis de sus miembros que constituirán un comité, presidido por el secretario de Energía y Combustibles, o por un reemplazante designado a ese solo efecto.

Dicho comité tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomiende;
- b) Ejercer las funciones que el consejo le delegue;
- c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato al consejo si el caso lo requiriese, o en la primera reunión ordinaria en su defecto.

## TITULO SEXTO

### *Del Banco de Electrificación y Riego*

Art. 17. — Créase el Banco de Electrificación y Riego con asiento en la ciudad de Buenos Aires, con facultad de establecer sucursales en el interior y exterior del país.

Art. 18. — El banco tendrá por objeto principal financiar el plan nacional de electrificación aprobado en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 19. — El banco formará su capital con:

- a) El 50 %, como mínimo, del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;
- b) Un aporte del Tesoro nacional, que se fijará anualmente;
- c) El producto de un impuesto por los beneficios de riego y desagüe a las tierras beneficiadas;
- d) Una parte alícuota de las tarifas eléctricas, a fijarse;
- e) La suscripción de acciones por los futuros usuarios (cuotas de potencial);
- f) La suscripción de debentures u otro tipo de obligaciones negociables y reembolsables;
- g) Las amortizaciones de capital e intereses correspondientes a las obras que se vayan habilitando;
- h) Las previsiones financieras de renovación y reserva;
- i) Los aportes de capital nacional y extranjero, por corporaciones e inversionistas privados o públicos, cuyo reembolso garantizarán los bancos Central de la República Argentina, de la Nación Argentina e Industrial de la Nación, sin que esos aportes signifiquen, en ningún caso, participar en la dirección del banco.

Art. 20. — Dentro de los noventa días de constituido, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica elaborará un proyecto de carta orgánica del banco, que elevará al Poder Ejecutivo nacional para su ulterior sanción legislativa.

Art. 21. — El banco fomentará con el asesoramiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica el uso y aplicación de la electricidad en las zonas rurales y suburbanas y la extensión de los beneficios del riego a las regiones que lo necesitan. Igualmente contemplará la financiación de los planes provinciales de electrificación y riego.

## TITULO SEPTIMO

### De las tarifas

Art. 22. — El Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo a las atribuciones conferidas oportunamente, fijará los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en los sistemas regionales y en el Sistema Unificado Nacional, y por medio del Consejo Federal de la Energía Eléctrica convendrá la compensación y unificación con las prestaciones provinciales y municipales.

Art. 23. — Las tarifas deberán establecerse previendo y asegurando la amortización de obras e instalaciones, su mantenimiento, conservación y operación, así como su renovación y el desarrollo futuro de los servicios en la medida que lo exijan las demandas reales del país y su expansión.

Art. 24. — El Poder Ejecutivo nacional podrá conceder tarifas de fomento, en las zonas del país que aconseje el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, con el fin de propender al desarrollo integral de una región.

Art. 25. — La disminución del costo del servicio público de electricidad, basada en el mejoramiento técnico, en el aprovechamiento hidroeléctrico o en el mayor rendimiento por las interconexiones, se aplicará en proporciones a fijarse, a la rebaja de las tarifas y al estudio de instalación de modernas fuentes generadoras de electricidad (nuclear, mareomotriz, eólica, etcétera).

### Disposiciones Complementarias

Art. 26. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dentro de los ciento ochenta días de su constitución, practicará un censo nacional de autogeneración, la reglamentará en vista a su aprovechamiento integral y podrá autorizar su conexión con los sistemas eléctricos existentes, cuando el interés general así lo aconseje.

Art. 27. — Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de explotación, de cuyo dominio uso fuere indispensable disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley y especialmente para el regular desarrollo y/o funcionamiento del Sistema Unificado Nacional y/o los restantes sistemas eléctricos.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica, designando a quien tendrá facultad en caso para promover los procedimientos judiciales de expropiación.

Art. 28. — En defecto de convenio, la Nación podrá expropiar el uso de las fuentes de hidroelectricidad para la realización del Plan Nacional de Electrificación, aprobado por esta ley, mediante el pago de una regalía no menor del 5 % del importe que resulte de aplicar a la energía vendida, la tarifa correspondiente a la venta en bloque. Las provincias deberán satisfacer con esos importes, fundamentalmente, la expansión de la electrificación rural.

Art. 29. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a convenir, ad referendum del Congreso Nacional, la importación o exportación de energía eléctrica.

Art. 30. — Autorízase por esta única vez a la Secretaría de Energía y Combustibles para que juntamente con Agua y Energía Empresa del Estado, actualice dentro de los noventa días de la sanción de la presente ley, el plan nacional de electrificación.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo S. Ronsenkranz. — Luis L. Boffi.  
— Agustín Cuevaz. — Rosario Domingo Díaz. — Juan Carlos Espina. — Luis M. Gallo. — Atilio E. O. Marchini. — Nabucodonosor Santoni. — Carlos A. Segovia. — Enrique Spangenberg.

## PLAN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS 10 - 12 AÑOS PROXIMOS

### Producción y costos

	Potencia	Energía	En divisas (millones de U\$S.)	En moneda nacional (millones de \$ m/n.)
A) Centrales hidráulicas	2.397 Mw.	9.570 Gwh.	184,06	30.260
B) Centrales térmicas ..	1.180 Mw.	4.000 Gwh.	150,60	10.365
C) Líneas de transmisión y distribución ...	32.200 kw.	—	146,31	16.165
		13.570	481,31	56.785

Totales (calculando los dólares a \$ m/n. 83.— [VII/60])

U\$S. 481.310.000 × 83 = \$ m/n. 39.948.000.000  
\$ m/n. 56.785.000.000  
\$ m/n. 96.733.000.000

*Probables compromisos de pago*

AÑO	Millones de \$ m/n.	Millones de U\$S.	Equivalente en millones de \$ m/n.	Totales en millones de \$ m/n.
1961	3.000	20	1.660	4.660
1962	4.000	25	2.075	6.075
1963	5.000	30	2.490	7.490
1964	5.000	40	3.220	8.220
1965	5.000	50	4.150	9.150
1966	5.000	60	4.980	9.980
1967	5.000	60	4.980	9.980
1968	6.000	60	4.980	10.980
1969	8.000	55	4.565	12.565
1970	10.000	50	4.150	14.150
	56.000	450 (1)	37.250	93.250

*Pronóstico de venta de energía para los próximos 10 años*

AÑO	Industrial, Gwh.	Otros, Gwh.	Total, Gw.	kwh. por habitante
1961	4.284	4.284	8.400	390
1962	4.732	4.368	9.100	416
1963	5.194	4.606	9.800	438
1964	5.778	4.922	10.700	470
1965	6.496	5.104	11.600	499
1966	7.424	5.376	12.800	540
1967	8.460	5.640	14.100	583
1968	9.610	5.890	15.500	627
1969	10.944	6.156	17.100	680
1970	12.408	6.392	18.800	738

## CUADRO A

*Pronóstico de habilitaciones progresivas*

Año	CENTRAL	Potencia MW	Potencia anual MW	Energía GWh	Energía anual GWh
1959	Grupos electrógenos .....	10	10	25	25
1960	Grupos electrógenos .....	60		150	
	Corralito .....	16	76	70	220
1961	G. Céspedes y J. Romero (ampliación)	11		84	
	H. Furque .....	0,9		4	
	Grupos electrógenos .....	20	32	50	138
1962	Florentino Ameghino .....	68		120	
	Grupos electrógenos .....	20		50	
	Tucumán .....	10		30	
	Calchines .....	15		50	
	Mar del Plata .....	30		80	
	Alto Valle .....	15		50	
	Rosario (Calderas) .....	40		120	
	Buenos Aires .....	150	348	600	1.100
1963	Pueblo Viejo .....	15		70	
	Compensador Valle Grande (Mendoza)	—		120	
	Ullún .....	32		212	
	Grupos electrógenos .....	20		50	
	Tucumán .....	10		32	
	Calchines .....	15		50	
	Alto Valle .....	15		50	
	Buenos Aires .....	150		600	
	Concepción del Uruguay .....	15	272	40	1.224
1964	Buenos Aires .....	300		1.200	

(1) Queda un saldo a pagar en años posteriores a 1970, de aproximadamente U\$S. 31.000.000.

Año	CENTRAL	Potencia MW	Potencia anual MW	Energía GWh	Energía anual GWh
	Río Tercero Nº 3 .....	33		53	
	El Nihuil II .....	85		360	
	Barranqueras .....	15		50	
	Tucumán .....	10		32	
	Grupos electrógenos .....	25	468	60	1.755
1965	Río Hondo .....	12		45	
	El Nihuil III .....	45		110	
	Compensador San Roque .....	—		20	
	Yabebirí u otras .....	90		200	
	Barranqueras .....	15		50	
	Centrales menores .....	20	182	75	500
1966	Río Tercero Nº 4 y 5 .....	20		42	
	Angostura .....	40	60	130	172
1967	Huelches .....	60		130	
	Chocón .....	650		3.000	
	Rosario (ampliación) .....	100	810	300	3.430
1968	Agua del Toro .....	110	110	400	400
1969	Potrero del Clavillo .....	60		200	
y	Salto Grande (Internacional) .....	750		3.500	
1970	Tunuyán (1ª etapa) .....	200	1.010	800	4.500
Totales .....			3.378		13.460

OBRAS E INSTALACIONES NECESARIAS HASTA 1968/70

SISTEMA NACIONAL.

A - Centrales hidroeléctricas

DESIGNACION	Características		Costo presunto de lo que falta invertir		Costo m/n. u\$s. = 100 (millones)	Fecha en que debe entrar en servicio	Estado	Crédito legal autorizado
	Poten- cia MW	Energía anual GWh	u\$s (1) (millones)	m/nac.				
<i>Sistema regional Norte</i>								
Pueblo Viejo (Tucumán) .....	15	70	0,82	290	372	1963	En ejecución (maquinaria no contrata- da)	Si
Corralito (Salta) .....	16	70	0,08	80	88	1960	En termina- ción	Si
Río Hondo (Santiago del Es- tero) .....	12	40	1.—	80	180	1965	En licitación	Si
Angostura (Tucumán) .....	40	140	3,40	420	760	1965/1966	En estudio	—
Potrero del Clavillo (Tucumán)	60	200	5,10	540	1.050	1968/1970	En estudio	—
	143	520	10,40	1.410	2.450			

NOTA: La disponibilidad de gas natural abundante y a precio conveniente puede llegar a disminuir la urgencia de habilitación de nuevas centrales hidroeléctricas de este sistema

*Sistema regional centro*

Río Tercero Nº 3 .....	33	53	3,20	194	514	1963/1964	En construc- ción	Si
Compensador San Roque ....	—	20	—	100	100	1964/1965	Proyectado	Si
Río Tercero, números 4 y 5 ..	20	42	1,70	210	380	1966	En proyecto	—
Derivación río Anizacate al sis- tema Los Molinos .....	—	60	—	350	350	1966/1967	En proyecto	—
	53	175	4,90	854	1.344			

(1) A partir del 1º/XI/1959.

DESIGNACION	Características		Costo presunto de lo que falta invertir		Costo m/n. u\$s. = 100 (millones)	Fecha en que debe entrar en servicio	Estado	Crédito legal autorizado
	Poten- cia MW	Energía anual GWh	u\$s (1) (millones)	m/nac. (millones)				
<i>Sistema regional litoral</i>								
Salto Grande (internacional) - Parte argentina .....	750	3.500	97.—	3.400	13.100	1968/69/70	En proyecto	Convenio internacional
Piray Guazú (Misiones) .....	90	200	7,50	250	1.000	1965/1966	En estudio	—
	840	3.700	104,50	3.650	14.100			
<i>Sistema regional andino</i>								
El Nihuil Nº 2 (Mendoza) ....	85	360	1,32	400	532	1963	En ejecución	Si
El Nihuil Nº 3 (Mendoza) ....	45	110	3,40	353	693	1965/1966	Adjudicada	Si
Agua del Toro (Mendoza) ....	110	400	9,60	480	1.440	1967/1968	En licitación	Si
Ullún (San Juan) (2) .....	32	210	1,80	200	380	1963	En ejecución	Si
Tunuyán (1ª etapa) .....	200	800	18.—	1.300	3.100	1969/1970	En estudio	—
Compensador Autel (Valle Grande) .....	—	120	—	420	420	1963	En ejecución	Si
Compensadores Agua del Toro y Tunuyán .....	—	—	—	800	800	1968/1970	En estudio	—
	472	2.000	34,12	3.953	7.365			
<i>Sistema regional patagónico</i>								
Florentino Ameghino (Chubut)	68	120	1,30	90	520	1963	En ejecución	Si
Chocón (Neuquén - Río Negro)	650	3.100	55,50	3.000	8.550	1966/1967	En licitación	Si
Huelches (La Pampa-Río Negro)	60	130	8.—	180	980	1966	En licitación	Si
Varias Río Negro - La Pampa (Julián Romero: ampliación; Guillermo Céspedes; Andersen; Hilarión Furque) .....	12	90	1.—	240	340	1961/1963	En ejecución y licitadas	Si
	790	3.440	68,80	3.510	10.390			
Presas de embalse para centrales anteriores y con otros propósitos de utilización Río Hondo, Agua del Toro, Florentino Ameghino y Huelches	—	—	—	2.000	2.000	1963/1968	En ejecución los 3 primeros	Si
Centrales menores complementarias de obras de beneficio múltiple no comprendidas en los grandes sistemas .....	20	80	1,80	80	260	1964/1966	En estudio	—
Totales generales .....	2.318	9.915	224,52	15.457	37.909			

(1) A partir del 19/XI/1959.

(2) Pago del 66 % a cargo de Agua y Energía Eléctrica



## B — Centrales termoeléctricas

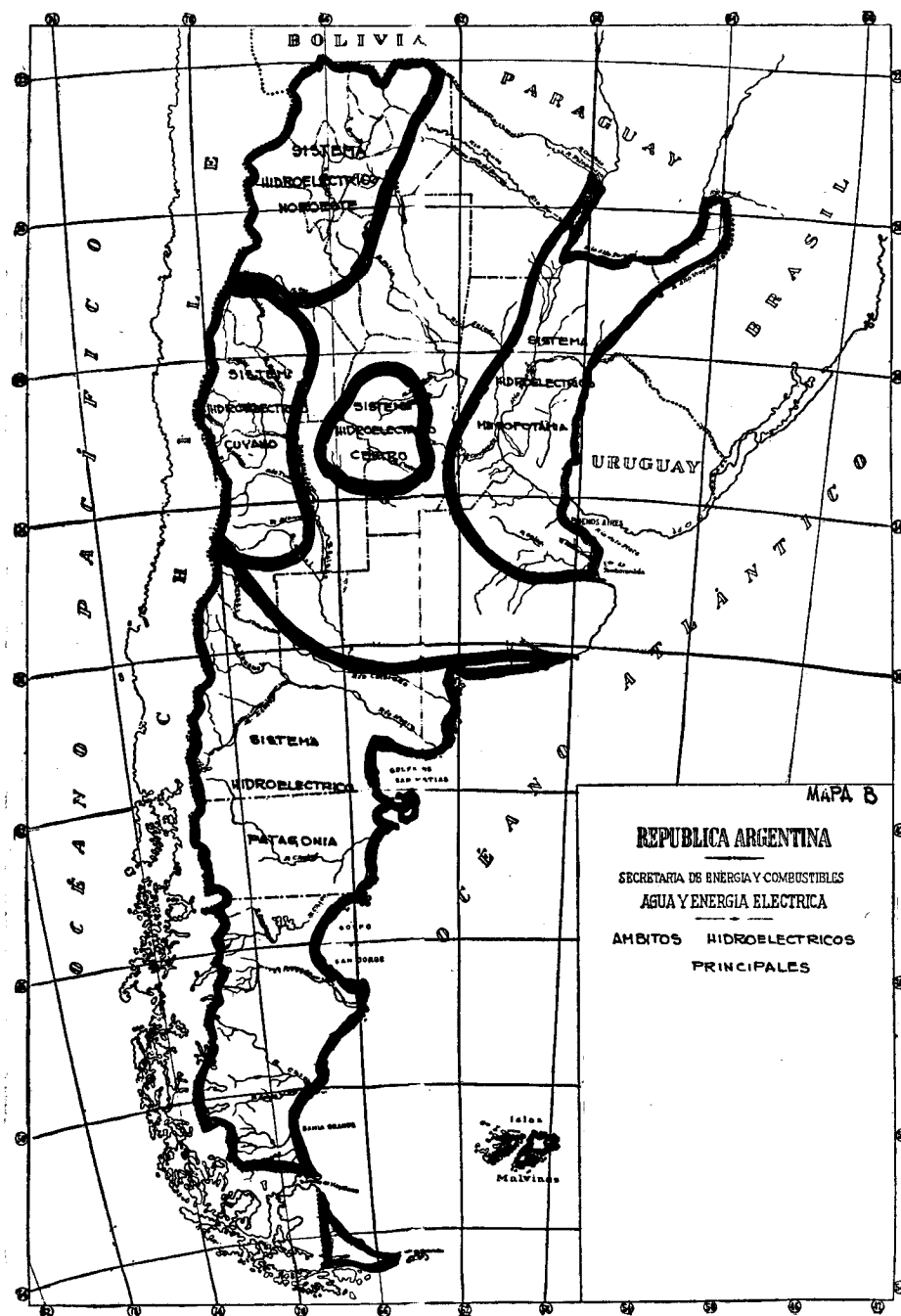
Sistema regional	DESIGNACION	COSTO PRESUNTO				Fecha en que debe entrar en servicio	ESTADO	Crédito legal autorizado
		Potencia MW	U/S equ (mill.)	M. nac. (mill.)	Total en m/n			
Norte	Tucumán .....	30	3,620	340	700	1961/62/63	Adjud. máq.	Si
Litoral	Buenos Aires .....	600	115,500	5,530	17,080	1962/63/64	En ejecución	Si
	Calchines (Santa Fe) (1) ...	30	2,300	180	510	1962/1963	En licitación	Si
	Barranqueras .....	30	4,600	440	900	1963/1964	Adjud. máq.	Si
	Mar del Plata .....	30	3,700	200	570	1962/1963	Adjud. máq.	Si
	Concepción del Uruguay ...	15	3,120	88	400	1962/1963	Adjud. máq.	Si
	Rosario (calderas) (1) .....	50	4,600	80	540	1961/1962	En licitación	Si
	Rosario (ampliación) (1) ....	100	18	100	1,900	1966		No
	Puerto Nuevo .....	140	—	—	—	1960	Acción privada	—
		995	152,820	6,618	21,900			
Patagónico	Alto Valle. Río Negro .....	30	3,700	380	750	1963	Adjudicada	Si
Todo el país	Grupos electrógenos Diesel ya adquiridos para ampliar servicios menores y facilitar la acción principal ...	155	15,200	1,220	2,740	1959/1964		
	Total general ....	1,210	175,34	8,558	26,090			
	Acción provincial y cooperativa .....		120					

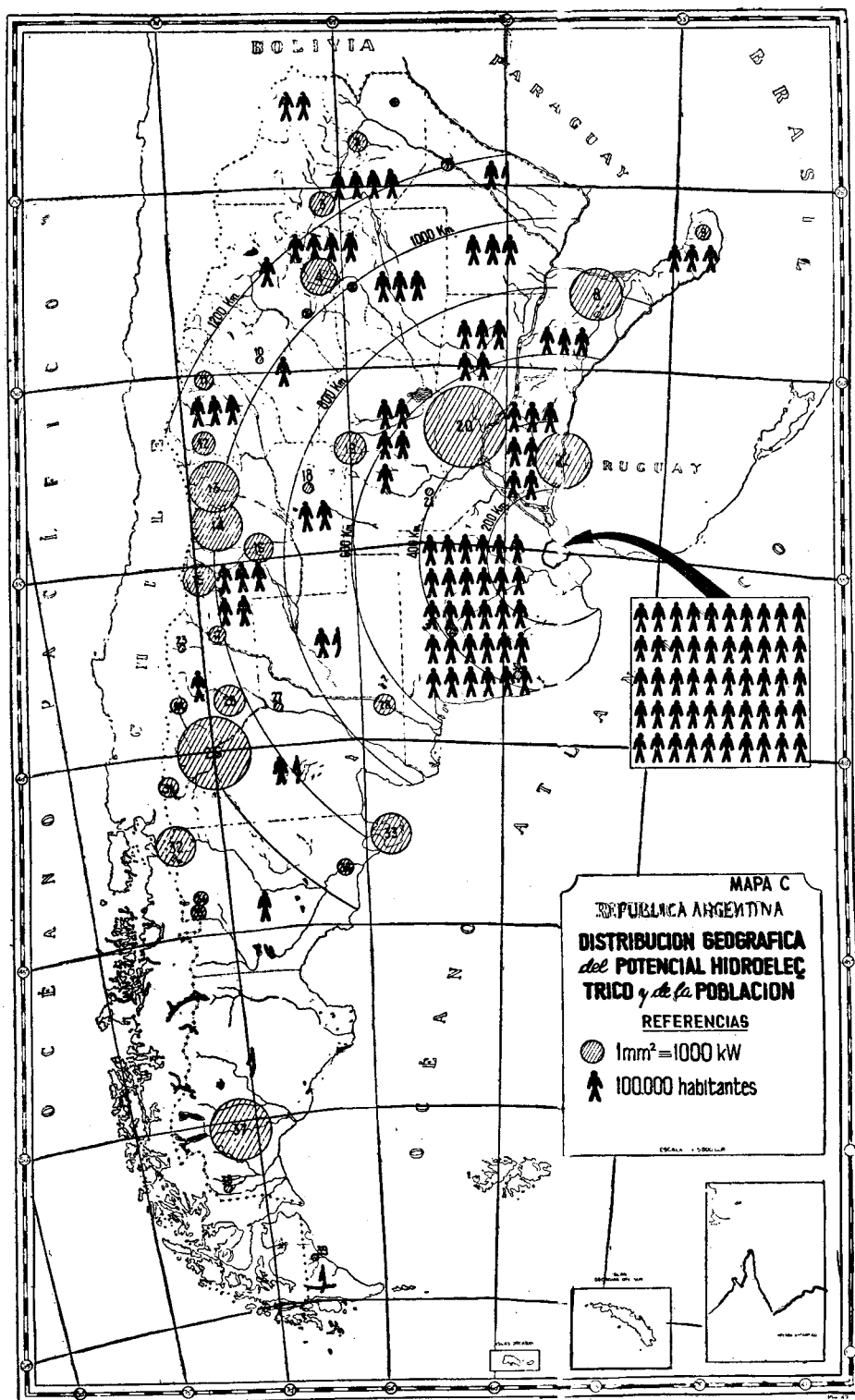
(1) Se anularían ante la posibilidad de instalar una nueva central de 300 MW, en 2 etapas.

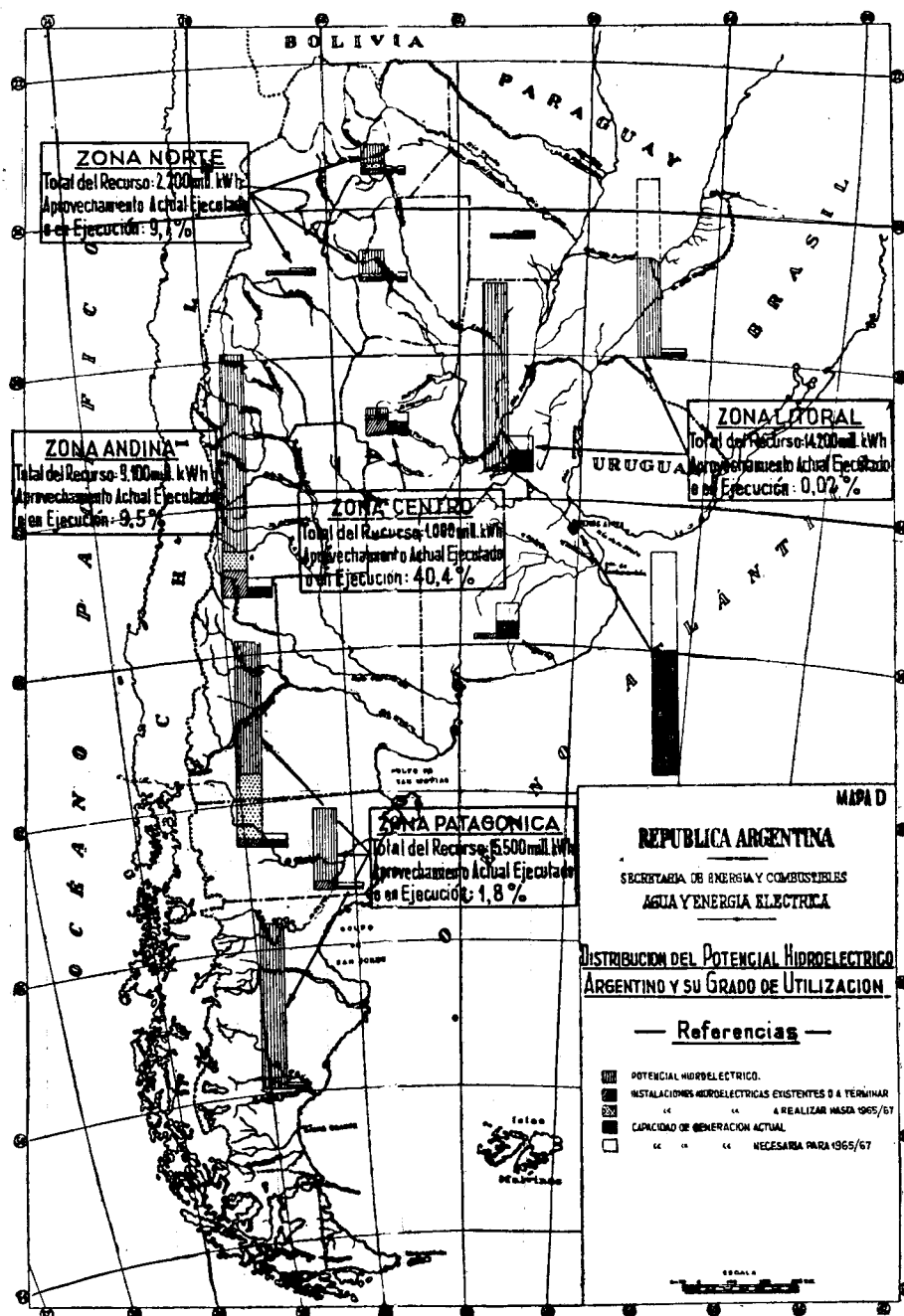
## C — Líneas de transmisión

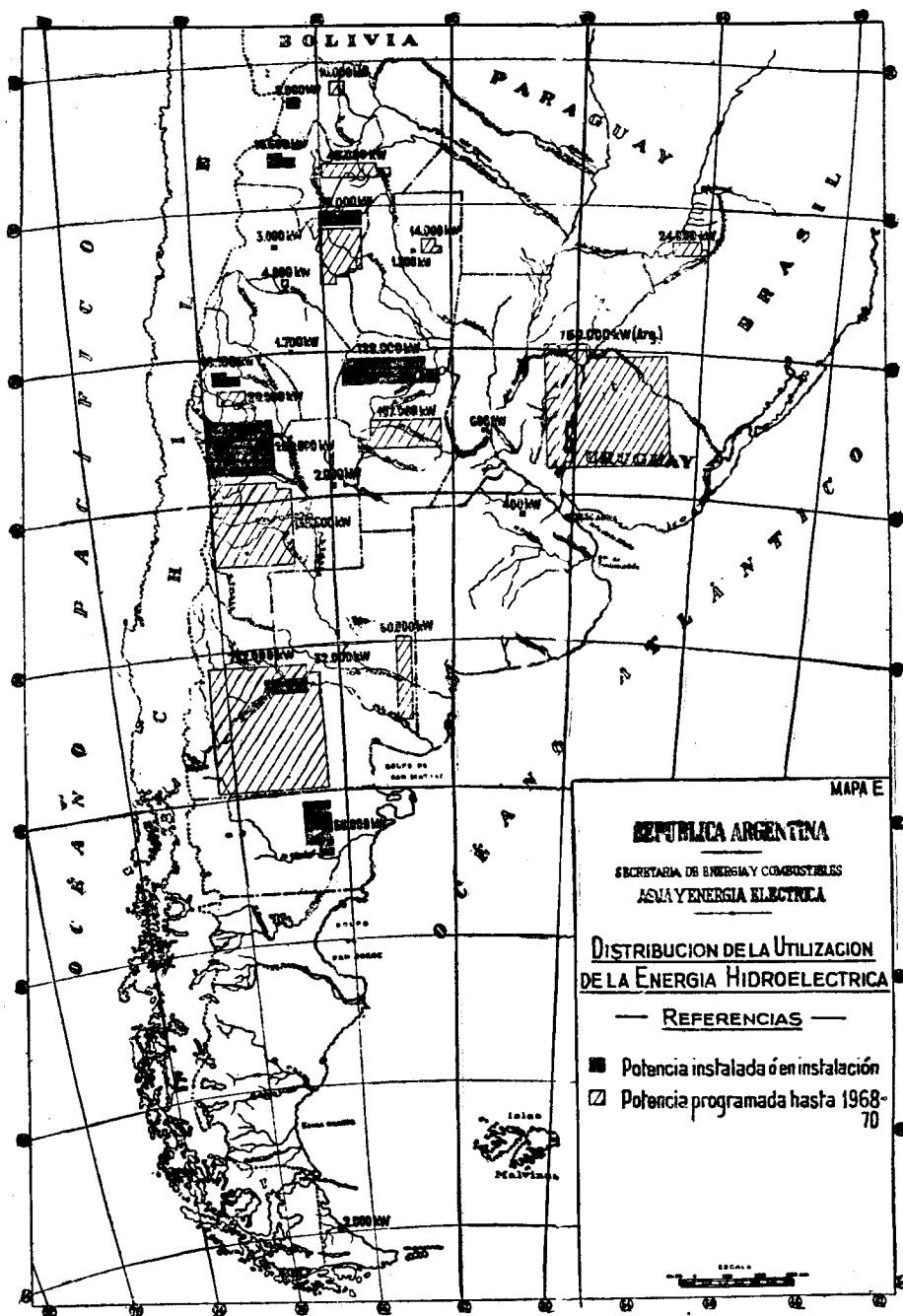
Sistema Regional	DESIGNACION	Kv.	Km.	COSTO u\$s. equiv. (millones)	PRESUNTO \$ m/n. (millones)	FALTANTE Total \$ m/n.	Fecha habilitación	Estado
Norte	Jujuy-Palpalá .....	33	17	0,002	2	2	1959	En terminación
	Palpalá-San Pedro .....	33	50	0,018	16	18	1959/60	En ejecución
	Estación Transf. San Pedro .....	33/13	—	—	3	3	1959/60	—
	Salta-Campo Santo-Palpalá .....	132	100	0,070	63	70	1960/61	A licitar
	Estación Transf. Campo Santo .....	132/13,2	—	0,040	2	6	1960	—
	Estación Transf. Palpalá .....	132/13,2	—	0,200	10	30	1960/61	—
	Pueblo Viejo-Villa Quinteros .....	132	173	0,120	108	120	1963	En estudio
	Río Hondo-Santiago del Estero .....	132/13,2	—	0,200	10	30	1963	—
	Estación Transf. Villa Quinteros .....	132/13,2	—	0,180	5	23	1963	—
	Estación Transf. Río Hondo .....	132/13,2	—	0,200	10	30	1963	—
	Estación Transf. Santiago del Estero ...	132/13,2	—	0,200	10	30	1963	—
	Estación Transf. Santiago del Estero ...	132/13,2	—	0,200	10	30	1963	—
	Estación Transf. Santiago del Estero ...	132/13,2	—	0,200	10	30	1963	—
	Línea Escaba-Catamarca .....	132	130	0,140	90	104	1963/64	A estudiar
Centro				1,170	319	436		
	Río Tercero-Río Cuarto .....	132	115	0,110	100	110	1960/61	En estudio
	Estación Transf. Río Cuarto .....	—	—	0,300	10	40	1960/61	—
				0,410	110	150		
Andino	Ullún-San Juan .....	132	30	0,065	27	33	1963	Estudiado
	Mendoza-San Juan .....	132	183	0,168	90	106	1960	En construcción
	Estación Transf. San Juan .....	—	—	0,730	24	97	1960	En adquisición
	Segunda línea El Nihuil-Mendoza ....	132	248	0,550	175	230	1963/64	Proyectada y
	Estación Transf. Tunuyán .....	—	—	0,255	14	39	1963	—
	Ampliación Estación Transf. Cruz de Piedra (Mendoza) .....	—	—	0,500	5	55	1960/61	—
	Mendoza-San Luis-Río Cuarto y estaciones compensadoras y transformadoras .....	380	400	18,000	350	2.100	1968	A estudiar
				20,300	687	2.670		
Litoral	Rosario-Santa Fe .....	132	180	0,400	130	170	1961/62	—
	Estaciones transformadoras .....	—	—	0,800	40	120	1961/62	—
	Rosario-Casilda-Becarchi-Venado Tuerto-Cañada de Gómez .....	132	200	0,440	140	185	1962/63	—
	Estaciones transformadoras .....	—	—	1,900	90	280	1962/63	—
	San Nicolás-Pergamino-Junín .....	132	150	0,340	110	144	1962/63	—
	Estaciones transformadoras .....	—	—	0,950	50	145	1962/63	—

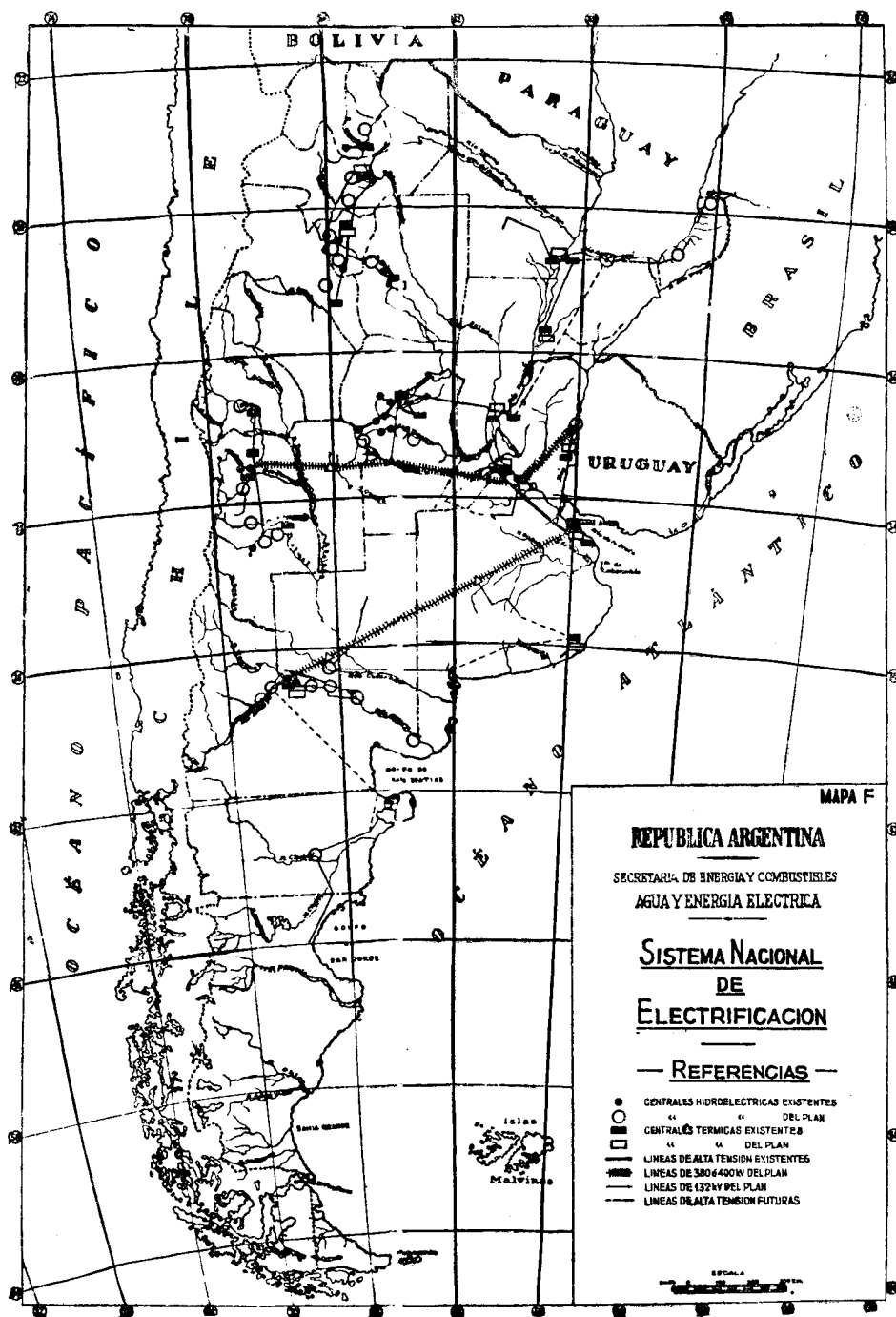
Sistema Regional	DESIGNACION	Kv.	Km.	COSTO u\$s. equiv. (millones)	PRESUNTO \$ m/n. (millones)	FALTANTE Total \$ m/n.	Fecha habilitación	Estado
	Ampliación Estación Transf. San Nicolás .....	—	—	0,300	30	60	1961	—
	Segunda línea Santa Fe-Paraná .....	132	25	0,050	35	40	1963	—
	Estaciones transformadoras .....	—	—	0,550	40	95	1963	—
	Otras líneas y estaciones transformadoras derivadas del sistema litoral ...	—	—	2	200	400	1961/68	En estudio y a estudiar
	Interconexión Gran Buenos Aires (menos la provisión de Metropolitan Vic- kers, incluida en Central Buenos Aires) .....	132	155	8	300	1.100	1962/63	En estudio
	Líneas y estaciones transformadoras en Misiones .....	66	140	0,5	70	120	1965/66	A estudiar
	Líneas y estaciones transformadoras en sistema Litoral Norte (Chaco y Corrientes) .....	132	380	1,2	220	340	1963/64	A estudiar
	Santa Fe-San Francisco y Estac. Transf. Salto Grande-Morón y líneas al sistema	132	140	0,9	110	200	1962/63	En estudio
		380	460	34	300	3.700	1968/69	A estudiar
				52,330	1.865	7.095		
Patagónico	Céspedes-Villa Regina .....	66	130	—	70	70	1962/63	En estudio
	Florentino Ameghino-Trelew-Madryn ..	132	220	0,500	150	200	1962/63	En estudio
	Estaciones transformadoras .....	—	—	0,450	18	60	1962/63	—
	El Chocón-Riachuelo y estaciones transformadoras y compensadoras .....	400	1.170	49	2.500	7.000	1966/67	En estudio
	El Chocón-Alto Valle del Río Negro ..	132	150	0,550	170	220	1966/67	A estudiar
	Estaciones transformadoras .....	—	—	2,400	70	300		
				52,900	2.978	7.850		
Todo el país	Líneas 66 y 33 derivados de sistemas anteriores .....	—	2.000	1	1.000	1.100		
	Líneas de distribución primaria .....	—	10.000	—	2.000	2.000		
	Redes .....	—	—	—	2.000	2.000		
				1	5.000	5.100		
	Totales generales .....			128,110	10.959	23.300		













## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El país sufre una evidente insuficiencia en su abastecimiento eléctrico. No es del caso hallar responsables de la situación, pero sí señalar que el defecto es imputable a la carencia de planes orgánicos de desarrollo de las distintas fuentes de energía eléctrica, a la falta de previsión financiera de las obras proyectadas o en ejecución y a la presencia de intereses poderosos que desean encauzar en su provecho la imposterizable e ineludible construcción de centrales hidro y termoelectricas.

Entendemos, siguiendo la tradición partidaria y fundamentalmente las necesidades del país, que registra dolorosos antecedentes en la materia, como así también la riquísima experiencia extranjera, que la orientación general del servicio público de electricidad, en cuanto al régimen de su explotación, debe ser el de la nacionalización, caracterizada por la participación preeminente de la Nación o de las provincias conjuntamente con representantes de empresas estatales, de los usuarios, técnicos, obreros y empresas privadas sin fines de lucro, en los órganos que gobiernen efectivamente la energía del país.

La prestación del servicio público de electricidad constituye un evidente monopolio de hecho, debido a que los ingentes capitales que requiere la movilización de las fuentes energéticas del país necesitan condiciones jurídico-económicas no logradas en el caso de la superposición de prestaciones dentro de un mismo radio o zona. Si agregamos a esto las características singulares de la industria eléctrica y la circunstancia de la concentración en pocas fuentes de las posibilidades financieras que ingresan del exterior, nos obliga a encarar el régimen jurídico de este servicio público con claro sentido nacional.

Todo esto abona la tesis de la nacionalización. Además podemos agregar que la imparcialidad que supone el ejercicio de ese monopolio por entidades nacionales traerá como consecuencia la creación del marco en el que, sin presiones ni favoritismos de orden lucrativo o económicos ajenos a las necesidades del país, se desarrollará integral y armónicamente la iniciativa privada aplicada a la producción de bienes de diferentes fines y apoyada en la energía eléctrica, pilar esencial de su promoción.

A tres ideas fundamentales responde el proyecto que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara. Un plan orgánico de obras e instalaciones, generadores y transmisoras del fluido eléctrico, un cauce para la financiación nacional y extranjera y la aplicación del principio de la nacionalización en la explotación del servicio público, son las características más salientes que lo avalan.

La puesta en marcha del Plan Nacional de Electrificación elevará el potencial eléctrico del país a los cinco millones quinientos mil kw., aproximadamente, lo que significa un aumento de tres millones quinientos mil kw. sobre las disponibilidades actuales, que se distribuirán en centrales hidro y termoelectricas, de acuerdo con las posibilidades naturales, las facilidades técnicas y las necesidades del consumo.

Este plan, suficientemente analizado por congresos científicos y por los organismos estatales de aplicación, es la única salida al grave problema de la insuficiencia del abastecimiento eléctrico. Cualquier otra solución que no se apoye en la existencia de un planeamiento previo es una salida utópica cuando no

una solución interesada. Afortunadamente para el país, la solución nacional es la única posible y los hombres de la UCRI, a lo largo de su militancia, han señalado en forma irrefutable los errores que significaría conformar el problema eléctrico dentro de concepciones de lucro inmediato o de orientación extraña al país.

Señor presidente: creemos sobreabundar si nos extendemos en el análisis de las disposiciones del proyecto. Su sencillez nos permite sostener que su concepción filosófico-política es compartida por la gran mayoría del pueblo argentino.

Eduardo S. Rosenkrantz. — Luis L. Boffi. — Agustín Cuevas. — Rosario Domingo Díaz. — Juan Carlos Espina. — Luis M. Gallo. — Atilio E. O. Marchini. — Nabucodonosor Santoni. — Carlos A. Segovia. — Enrique Spangenberg.

## III

(Punto III. — Señores diputados Jofré y Aguinaga)

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad en cuanto las mismas correspondan únicamente a la jurisdicción nacional; con excepción del transporte y distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión de señales, palabras o imágenes, que se registrarán por sus respectivas leyes.

También quedan excluidas de esta ley las actividades de la industria eléctrica cuando éstas se desarrollen en territorio provincial y sus redes no se encuentren interconectadas con otras redes interprovinciales o nacionales.

Art. 2º — (Nuevo.) La propiedad de las aguas y de su potencial hidroeléctrico y de las obras que se construyan para aprovecharlo, es, en todos los casos reconocida a las provincias en cuyos territorios se hallen las obras, y por tanto la inversión de fondos federales en ellas sólo tiene carácter de préstamo.

La Nación sólo podría realizar obras en los ríos provinciales previo convenio con las provincias respectivas. En todos los casos en que existan excedentes de energía exportables de una provincia a otra, la provincia productora tendrá derecho a pedir una regalía razonable por la utilización de esos recursos.

Cuando la Nación administre esas obras sólo lo hará como gestora de negocios.

Art. 3º — (Nuevo.) Cuando las obras estén en ríos interprovinciales, cualquiera sea el lugar de ubicación de aquéllas, se agregará a las tarifas una regalía razonable por el uso del potencial hidroeléctrico de las aguas, para ser distribuidas proporcionalmente entre todas las provincias ribereñas.

Art. 4º — (Igual al artículo 2º del proyecto de la mayoría.)

Art. 5º — (Igual al artículo 3º del proyecto de la mayoría.)

Art. 6º — (Igual al artículo 4º del proyecto de la mayoría.)

Art. 7º — (Corresponde al artículo 5º del despacho de la mayoría.) La energía de las caídas de agua y de las otras fuentes hidráulicas comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El derecho de utilizar la energía hidráulica no autoriza de ningún modo el modificar el uso y fines a que estén destinadas estas aguas y tierras. En caso de que sea necesario utilizar tierras ribereñas, para instalación de obras, etcétera, deberá procederse a su expropiación, previa justa indemnización conforme a los principios del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Art. 8º — (Corresponde al artículo 6º del despacho de la mayoría.)

Suprimir el inciso e) y la última parte del artículo de referencia.

Art. 9º — (Igual al artículo 7º del despacho de la mayoría.)

Art. 10. — (Corresponde al artículo 8º del proyecto de la mayoría.) Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica promovidos por el gobierno federal o por una provincia, en los casos que los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, afectando a una o más provincias deberán ser autorizados por ley nacional y por leyes de las provincias donde se realicen las obras. También se deberá indemnizar a los particulares afectados por las mismas.

Art. 11. — (Corresponde al artículo 9º.) En cuanto se relacione con lo dispuesto en el artículo 4º, el gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía nacionales en la medida requerida para los fines a su cargo. Para utilizar las que se encuentren en territorios provinciales deberá realizar convenios previos con las respectivas provincias.

Art. 12. — (Igual al artículo 10.)

Art. 13. — (En reemplazo del artículo 11.) En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 8º y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Suprimir desde el segundo párrafo en adelante.

Art. 14. — (Igual al artículo 12.)

Art. 15. — (Igual al artículo 13.)

Art. 16. — (En reemplazo del artículo 14.) El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión o autorización otorgada en la forma y condiciones que se establecen a continuación:

a) Se requiere concesión:

- 1º Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública, cuando la potencia normal que se concede excede de quinientos kilovatios.
- 2º Para el ejercicio de actividades destinadas a un servicio de electricidad.
- 3º Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a 5.000 kilovatios;

b) Se requiere autorización para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de energía a transportar, cuando la potencia sea menor de 5.000 kilovatios, pero sus instalaciones requieran el uso de la vía pública o, en general, de bienes del dominio público o afectados al uso o servicio público.

Art. 17. — (Nuevo) Las concesiones a que se hace referencia en el inciso a) del artículo anterior serán otorgadas previa licitación pública y autorización otorgada en cada caso por el Congreso de la Nación cuando se trata de obras en jurisdicción nacional. La falta de licitación o de autorización legislativa anula a la concesión.

Las autorizaciones a que se hace referencia en el inciso b) del artículo anterior serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional. Las concesiones y autorizaciones que otorguen los gobiernos de provincias deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley, debiendo ser autorizados por las respectivas legislaturas.

Art. 18. — (Corresponde al artículo 15 del proyecto de la mayoría.) En las concesiones para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica que sólo podrán otorgarse por un plazo fijo, habrán de establecerse las condiciones y cláusulas siguientes:

- a) El objeto principal de la utilización;
  - b) Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.
- En estas normas se deberá tener en cuenta el siguiente orden de prioridad para el uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el riego y luego la producción de energía;
- c) Las potencias características del aprovechamiento y la potencia máxima de la instalación;
  - d) El plazo de la ejecución de los trabajos determinados en la concesión;
  - e) El plazo de explotación de la concesión, el que no podrá exceder de sesenta años;
  - f) Reserva expresa por parte del Estado de aprobar tarifas, fiscalizar capitales invertidos, investigar costos e inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la concesión a fin de una adecuada prestación de los servicios;
  - g) Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al Estado los bienes y las instalaciones;
  - h) Las condiciones y causales de caducidad por inobservancia de las obligaciones impuestas en las concesiones, discontinuidad en los servicios o deficiencia de los mismos;
  - i) La antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión, y la forma, tiempo y condiciones en que se realizarán las transferencias de los bienes de la concesionaria;
  - j) El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso de la fuente que ingresará al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Art. 19. — (Igual al art. 16).

Art. 20. — (Igual al del proyecto de la mayoría).

Art. 21. — (Igual al del proyecto de la mayoría).

Art. 22. — (Igual al del proyecto de la mayoría).

Art. 23. — (Igual al del proyecto de la mayoría).

Art. 24. — (Igual al del proyecto de la mayoría).

Art. 25. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por:

- a) El secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá, o el subsecretario en su reemplazo;
- b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combustibles, que será designado por el Poder Ejecutivo;
- c) El presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado;
- d) Un representante y un suplente por cada provincia, designados por el Poder Ejecutivo de la provincia respectiva con acuerdo del Senado de la misma, o del cuerpo legislativo que preste acuerdos según las constituciones respectivas;
- e) Un representante de la Capital Federal y territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

Todos estos representantes durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

En los artículos subsiguientes, en el recinto se pondrán algunas modificaciones de forma.

Emilio Jofré. — Carlos Aguinaga.

#### IV

(Punto IV. — Proyectos de distintos señores diputados presentados en 1959 y 1960)

Expediente 110-D-1959 (Pozzio)

#### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de quien corresponda y en forma verbal o escrita, informe:

1º — En virtud de qué disposición legal o cláusula contractual se aplica a las tarifas eléctricas de la sociedad SEGBA el porcentaje de rescate.

2º — Sobre los saldos pendientes, en su monto, para la aplicación del recargo en la tarifa eléctrica de recuperación saldos pendientes.

3º — Si para el establecimiento de las tarifas eléctricas se ha consultado a los gobiernos provinciales o municipales directamente afectados por la nueva sociedad SEGBA.

4º — Si se ha dictado la reglamentación establecida en la ley 14.772 para reconocer el porcentaje sobre las entradas brutas, correspondientes a los municipios afectados, y en su caso, estimaciones efectuadas.

5º — Si el Poder Ejecutivo ha convenido ya con las municipalidades interesadas los importes que les co-

rrespondan por aplicación de las cláusulas de reversión de las respectivas concesiones.

6º — Si entiende qué régimen equitativo de tarifas, es el de una mayor presión sobre los usuarios que en definitiva se traduce en un verdadero despojo.

7º — Cuáles son los reales costos, de los servicios, detallando cada uno de los que los integran.

8º — En virtud de qué disposición legal la empresa Agua y Energía, sin un solo centavo, —según expresiones del secretario de Estado de Energía y Combustibles a la prensa del país—, es dueña del servicio eléctrico de catorce partidos de la provincia de Buenos Aires y de dos mil quinientos millones de pesos en acciones de la SEGBA y, en su caso, establecer en detalle la procedencia.

\* \*

Expediente 214-D-1959 (Casella Piñero)

#### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que tenga a bien informar sobre los siguientes asuntos:

1º — Cuál es la situación actual de las obras correspondientes a la central hidroeléctrica El Nihuil Nº 2, que se construye sobre el río Atuel, Mendoza, por cuenta de la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica.

2º — Qué razones han determinado el despido, en masa y sin indemnización, de 437 obreros que trabajaban en las mencionadas obras.

3º — Si es exacto que se ha dispuesto dejar cesante o suspender por tiempo indeterminado al personal jerárquico técnico, administrativo y de maestranza que presta servicios en las citadas obras.

4º — Si es exacto que Agua y Energía Eléctrica no paga desde septiembre u octubre de 1958, cuentas pendientes con proveedores y contratistas de esas obras.

5º — Si es posible que la construcción de El Nihuil Nº 2 se mantenga paralizada por tiempo indeterminado y qué medidas se han adoptado para evitarlo.

6º — Cuál es, en definitiva, la energía eléctrica que provee el Nihuil Nº 1 y qué medidas se han adoptado para aumentar su volumen.

\* \*

Expediente 375-D-1959 (Perette)

#### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

1º — Encomendar a las comisiones de Industria y de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados el estudio inmediato de las iniciativas presentadas por la diputación radical del pueblo y la de otros sectores sobre derogación de la ley 14.772, de sociedad con CADE, contratos con ANSEC, investigación de las tarifas eléctricas, aumentos del canon de riego y soluciones urgentes a la cuestión eléctrica.

2º — Las citadas comisiones deberán pronunciarse antes del día 10 de junio y darán amplia publicidad a sus conclusiones.

3º — La Honorable Cámara considerará el dictamen o dictámenes de las citadas comisiones sobre la cuestión eléctrica, contrato con CADE, con ANSEC, tarifas eléctricas, etcétera, en la sesión especial del día 12 de junio a las 12, que será convocada a ese exclusivo efecto.

4º — Las citadas comisiones recabarán la opinión de técnicos, comisiones populares, Centro de Estudios Energéticos General Mosconi, Centro de Ingenieros, Federación de Cooperativas Eléctricas, etcétera.

\* \*

Expediente 652-D-1959 (Becerra, C. A., y Storani).

### Proyecto de resolución

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe a la brevedad posible sobre los siguientes puntos:

1º — Si tiene conocimiento que el ex secretario de Energía y Combustibles conocía la existencia de una diferencia en menos de dos mil millones de pesos entre el capital declarado por CADE como aporte privado y el comprobado por la Comisión de Verificación, según así lo habría informado el asesor de dicha secretaría por reportaje radiofónico e informado por el diario «Clarín» del 25 de junio en página 18.

2º — En su caso qué razón medió para que dicho secretario omitiese esa información, que según la misma estaría por hacerla pública recién después de aceptada su dimisión.

3º — Si no considera en su caso que dicha omisión por parte del señor ex secretario de Energía es violatoria a los deberes de funcionario público y pasible de responsabilidades.

4º — Si tomó alguna medida sobre el estado y marcha de la secretaría antes de aceptar su renuncia en la que agradecen sus servicios patrióticamente prestados.

\* \*

Expediente 831-D-1959 (ex diputados León y otros).

### Proyecto de resolución

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe por intermedio del ministerio correspondiente sobre los siguientes puntos:

1º — Si se ha desistido de la construcción de la central energética de El Chocón.

2º — Qué argumentos han llevado al Poder Ejecutivo nacional a tomar esta resolución.

3º — Si existen otras propuestas de financiación además de la del consorcio europeo que se rechaza.

Señor presidente:

Los argentinos todos y los señores legisladores sabemos que es intenso el déficit energético de la República. Sabemos también que una buena política para la recuperación del mismo es ir a la construcción de centrales hidroeléctricas. Por tal motivo, ante los repetidos anuncios de la construcción de la represa de El Chocón, todos interpretábamos que se estaba ante una obra de gran trascendencia no sólo por las vastas zonas que adquirirían capacidad de energía barata, sino también por la cantidad de la producción en kilovatios y por las posibilidades que toda ella significaba para la explotación de las riquezas de la Patagonia argentina.

Anuncié en la Cámara, en debates anteriores, que habría sectores interesados en frenar una obra que tenía un claro sentido de recuperación nacional y cuya importancia comprometía el esfuerzo del pueblo todo, por encima de todas las diferenciaciones partidarias.

Por ello sorprende el anuncio de la posible suspensión de las obras de El Chocón, que el propio señor presidente de la República había anunciado como perfectamente financiadas y con posibilidades inmediatas de realización. También sorprende que algunas informaciones periodísticas de la fecha signifiquen que la suspensión de la obra se debe a un estudio de nuestras planificaciones energéticas, que harían representantes del Banco Mundial.

Este tipo de obras son las que tienen la solidaridad de todos los argentinos, y en esa solidaridad está la del radicalismo argentino. El Poder Ejecutivo debe haber hecho todos los esfuerzos para la construcción de El Chocón. Esta obra significaba un esfuerzo gigantesco para nuestra economía, pues abarcaba todos los aspectos deficitarios desde lo industrial hasta la explotación agrícola. Por todo lo que se habló de ello y por esta sorpresiva paralización, es que me inquieto. Por todo ello y por creer en la necesidad de empujar la realización de esta obra, es que presento este pedido de informes, que lleva el limpio ánimo de esclarecer ante el pueblo los motivos ciertos de una nueva posibilidad de frustración argentina.

\* \*

Expediente 904-D-1959 (ex diputado Kronhaus).

### Proyecto de resolución

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que, por intermedio del señor ministro de Economía, se sirva informarla verbalmente sobre los siguientes puntos:

1º — Sobre las causas que han motivado la paralización de las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica Nº 2 de El Nihuil, sobre el río Atuel, en el Sur de la provincia de Mendoza.

2º — Sobre las causas que han motivado la suspensión de la construcción del plan de centrales hidroeléctricas en El Nihuil en su integridad.

3º — Sobre las razones que han motivado el corte del suministro eléctrico a la zona de influencia del Departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, servida por la Central Hidroeléctrica Nº 1 que ya se encontraba en funcionamiento.

4º — Sobre las causas que motivaron la paralización del tendido de líneas para la conducción de la energía eléctrica desde la central N° 1 de El Nihuil hasta las zonas del Gran Mendoza, San Juan y General Alvear, de la provincia de Mendoza.

5º — Si es verdad que Agua y Energía Eléctrica de la Nación adeuda a la empresa concesionaria de la construcción de las centrales hidroeléctricas de El Nihuil más de ciento veintisiete millones de pesos. En caso afirmativo, desde cuándo existe esa deuda y medidas arbitradas por el Poder Ejecutivo para tratar de solucionar la situación.

6º — Si es verdad que además de la deuda a que se refiere el punto anterior Agua y Energía Eléctrica adeuda también a Electrodinía una suma considerable por el tendido de las líneas.

7º — Si está enterado el gobierno que la sola producción de la Central Hidroeléctrica N° 1 de El Nihuil duplica a la producción de energía eléctrica de la provincia de Mendoza en todas sus demás usinas.

8º — Si se ha enterado el Poder Ejecutivo que la empresa concesionaria de la construcción de las usinas hidroeléctricas de El Nihuil, ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de Agua y Energía Eléctrica, se vio en la obligación de dar vacaciones a su personal desde el 27 de diciembre de 1958 hasta el 7 de enero de 1959, en cuyo lapso se le había prometido arreglar la situación.

9º — Si está en antecedentes el Poder Ejecutivo de que al no arreglarse la situación la empresa suspendió por noventa días a su personal, cuyo plazo de suspensión venció el 13 de abril de 1959.

10. — Si sabe el Poder Ejecutivo que al no solucionarse la cuestión la empresa prescindió de hecho de su personal paralizando totalmente las obras.

11. — Si sabe el Poder Ejecutivo qué cantidad de empleados, obreros y personal especializado se encuentra en la situación a que se refieren las preguntas anteriores.

12. — Si sabe el Poder Ejecutivo que el personal afectado mantiene juicios pendientes con las empresas concesionarias ante los tribunales provinciales del trabajo de la segunda circunscripción judicial de la provincia de Mendoza.

13. — Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo para solucionar la situación.

14. — Si es verdad que el Poder Ejecutivo ha firmado contrato sin licitación con una firma extranjera para proseguir las obras de las centrales hidroeléctricas de El Nihuil prescindiendo de la deuda que tiene con la concesionaria actual.

15. — Si la actual concesionaria de las obras de las centrales hidroeléctricas de El Nihuil actúa en virtud de adjudicatoria por licitación.

16. — Si es verdad que el atraso de las obras se debió a falta de cumplimiento por parte de Agua y Energía Eléctrica de la Nación de sus prestaciones de acuerdo a contrato.

\* \*

Expediente 905-D-1959 (ex diputado Kronhaus).

#### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que por intermedio del señor ministro de Economía se sirva informarla verbalmente sobre los siguientes puntos:

1º — Sobre las causas que han motivado la paralización absoluta de las obras de construcción del dique Agua del Toro sobre el río Diamante, en el Sur de la provincia de Mendoza.

2º — Si es verdad que esa obra está licitada y adjudicada. En caso afirmativo, fecha de la licitación y de la adjudicación, firma adjudicataria e importe de la obra.

3º — Si es verdad que después de haber sido licitada y adjudicada la obra, se ordenó su suspensión a la empresa adjudicataria por cambio de proyecto. En caso afirmativo, en qué consisten los cambios y fecha en que se ordenó la paralización de los trabajos.

4º — Si sabe el gobierno que la empresa adjudicataria acumuló en el lugar un valioso equipo técnico y mecánico y materiales avaluados en una considerable suma de dinero, con anterioridad a la orden de suspensión de los trabajos.

5º — Si está enterado el gobierno que para la construcción de la obra la empresa concesionaria contrató los servicios de numeroso personal —varios centenares de obreros, técnicos especializados y empleados—, con anterioridad a la orden de suspensión de los trabajos, habiendo sido trasladado dicho personal al lugar en que debía realizarse la obra.

6º — Si es exacto que la empresa concesionaria comenzó los trabajos preliminares para la construcción del dique antes de recibir la orden de suspensión de las tareas.

7º — Si se ha enterado el Poder Ejecutivo que ante esta situación y la prolongada espera a que fue sometida la firma concesionaria, ésta procedió a despedir a su personal, quedando solamente una dotación de alrededor de veinticinco hombres para el cuidado del material y equipos depositados en el lugar.

8º — Si el Poder Ejecutivo tiene fijado criterio acerca de la iniciación de esta obra, su ubicación y beneficios que ha de reportar.

9º — Si el Poder Ejecutivo ha calculado los perjuicios que la paralización de la obra trae consigo para el poder administrador, la economía de la Nación y la explotación de la riqueza del Sur de Mendoza.

10. — Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para la regularización de la situación reseñada en el cuestionario precedente.

\* \*

Expediente 952-D-1959 (Oreja).

#### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para solicitarle que adopte todas las medidas necesarias para que no sea postergada la ejecución de las obras de la presa y central hidroeléctrica de El Chocón, las que deben ser declaradas de interés nacional e impostergable realización.

Señor presidente:

El secretario de Industria y Minería e interino de Energía y Combustibles, doctor Carlos Juni, acaba de anunciar que como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, el gobierno argen-

tino ha dispuesto la postergación de las obras de El Chocón. Esta decisión ha sido comunicada al consorcio franco-belga-británico que había presentado la propuesta para la realización de los trabajos, respondiendo al llamado a licitación de la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica.

Este anuncio asesta un duro golpe a las esperanzadas previsiones de nuestro plan de desarrollo, que constituye la columna vertebral del gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente. La presa y central hidroeléctrica de El Chocón se ha convertido en uno de los valores símbolos de la expansión argentina, de la cancelación de los viejos esquemas del atraso y de la dependencia nacional, de la descentralización industrial que reclama el país para liquidar la concentración monstruosa del Gran Buenos Aires.

El año pasado, en orden del día 62, fecha 2 de julio de 1958, se aprobó por unanimidad un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo, formulado por los diputados que suscriben, respecto del estado en que se hallaban las tratativas para realizar esas obras y en especial lo relacionado con la proyectada línea de transmisión de energía a Buenos Aires, y convenios con las provincias de Neuquén y Río Negro para hacer posible esa operación.

Como representante del pueblo argentino en primer término, y de las provincias de Neuquén y Río Negro, en cuyo límite corren las aguas del río Limay que proveerá las obras de El Chocón; convencidos del futuro inmediato de grandeza que está reservado al Norte de la Patagonia, conectando este aprovechamiento hidroeléctrico y embalse para la irrigación de 100.000 hectáreas, con la explotación siderúrgica de Sierra Grande y la movilización de todos los ingentes recursos del Sur argentino, no podemos aceptar en silencio el frío anuncio de que se posterga sine die la ejecución de estos trabajos. Por ello, formulamos este proyecto, para el que solicitamos el voto favorable de todos los señores miembros de la Honorable Cámara.

\* \*

Expediente 2.249-D-1959 (Pologna).

### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe sobre los siguientes puntos:

1º—Qué medidas de urgencia proyecta para aliviar la falta de energía eléctrica en numerosas localidades del interior.

2º—Si dentro de las mismas se dispone ayuda financiera a las cooperativas populares.

3º—Qué razones ha tenido el Banco Industrial para negar a la Cooperativa de Electricidad de Olavarria, el crédito para la importación de un motor MAN de 2.050 HP ya fabricado y listo para embarcar y sobre el cual ha entregado a cuenta 1.617.576,24 pesos.

4º—Por qué razones ha negado asimismo el aval por el saldo de la deuda que exigen los fabricantes para hacer el embarque del grupo electrógeno contratado, mientras lo otorga por sumas muchas veces superiores a empresas particulares.

\* \*

Expediente 2.293-D-1959 (García y otros).

### Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de los organismos pertinentes, se sirva adoptar las medidas necesarias para que se intensifiquen los trabajos de construcción del dique Florentino Ameghino, en la provincia de Chubut, y la central hidráulica cuya construcción ya ha sido contratada.

Señor presidente:

Una reciente visita a las obras en construcción del dique Florentino Ameghino, en la provincia de Chubut, nos ha permitido comprobar objetivamente la importancia de la misma, el avanzado estado actual de los trabajos y la necesidad imperiosa de que los mismos se intensifiquen, a fin de que la terminación y habilitación de la presa puedan efectuarse en la fecha prevista. Estamos convencidos de que la habilitación de este dique ha de constituir un factor decisivo en el desarrollo económico de todo el valle del Chubut y un impulso extraordinario en la promoción industrial de esa provincia patagónica.

#### Estado actual de los trabajos

El estado actual de las obras de construcción del dique embalse Florentino Ameghino, al 30 de septiembre de 1959, es el siguiente:

Porcentaje físico de la obra realizada: 81 %.

Porcentaje de obra que falta realizar: 19 %.

Volumen total de hormigón obra: 530.000 m³.

Volumen de hormigón realizado: 350.000 m³.

Inversión total realizada: \$ 428.192.425,38.

Inversión prevista en el plan de trabajos correspondiente al ejercicio 1959/60: \$ 70.000.000,00.

Inversión que faltaría efectuar para concluir los trabajos de construcción del dique: \$ 220.000.000,00.

Fecha de terminación de los trabajos de construcción del dique: se estima que los trabajos se concluirán a fines de 1961, quedando ello subordinado a la disponibilidad, por parte de la empresa, de los fondos necesarios.

#### Préstamo de la provincia

Recientemente, debido a la falta de recursos, se planteó la paralización de los trabajos, llegando los obreros de la obra a recurrir a la huelga, ante la angustiosa situación que les acarrea el retraso en el pago de sus haberes.

Con una sensibilidad social digna de destacarse, el gobierno de la provincia de Chubut efectuó entonces un préstamo de 40.000.000,00 de pesos a la empresa, cantidad que deberá ser reintegrada el año próximo, con la cual se atenderán los gastos que demanda la prosecución normal de los trabajos en los próximos meses.

Hemos observado la imponente de la obra y la perspectiva de progreso que abre en aquella lejana zona patagónica a un vasto sector de población que hoy vive sacrificadamente, expuesto a las inundaciones periódicas y a las bajantes que, por falta de regulación del curso del Chubut, perjudican sus intereses y malogran los esfuerzos de la colonización.

*Producción de energía*

Además de los trabajos de construcción de la presa, se ha contratado la construcción de la central hidroeléctrica de una potencia inicial estimada de 50.000 kilovatios, que significará una inversión de 460.000.000 de pesos. Esta inversión incluye la erogación correspondiente a la construcción de las obras civiles destinadas a la central y a la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos electromecánicos. La habilitación de la central está prevista para fines del año 1962, subordinado ello también a la disponibilidad, por parte de la empresa, de los fondos necesarios.

Por todo ello, señor presidente, estimamos que el Poder Ejecutivo debe asignar un lugar destacado en las prioridades previstas para la terminación y habilitación de las obras en ejecución al dique y central Florentino Ameghino, teniendo en cuenta que con respecto al primero, están terminadas ya más de las cuatro quintas partes del total, restando solamente una inversión de 220 millones de pesos, cantidad ínfima en relación con la magnitud de la obra. Por otra parte, debemos destacar que únicamente por esta vía, con la puesta en marcha de las grandes obras básicas de promoción, se asegurará y consolidará el auténtico progreso y desarrollo industrial de la Patagonia, permitiendo la utilización y explotación de sus grandes recursos naturales, sin necesidad de recurrir a medidas de emergencia.

\* \*

Expediente 2.811-D-1959 (Suárez y ex diputado Kronhaus).

**Proyecto de declaración**

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo suspenda la orden de desmantelamiento de las instalaciones que posee la empresa Siemens Bauunion, en Nihuil Nº 2 (San Rafael, Mendoza).

Señor presidente:

La firma Siemens Bauunion, tenía a su cargo la construcción de las obras del Nihuil Nº 2. Por razones que son del dominio público, el Poder Ejecutivo rescindió el contrato con la compañía mencionada, alegando la falta de cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones. Las instalaciones efectuadas para la realización de las obras resultan inversiones de un valor muy significativo, y es de lamentar la pérdida que ocasionaría al Estado su destrucción. Los costos actuales quintuplicarían a los existentes.

\* \*

Expediente 144-D-1960 (Perette).

**Proyecto de resolución**

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

1º — Realizar una encuesta nacional acerca del proyecto del Poder Ejecutivo, sobre la ley nacional de energía para lo cual se recabará opinión de los distintos sectores del país.

2º — La Comisión de Industrias y la de Negocios Constitucionales de la Honorable Cámara, que tendrán a su cargo la realización de esta gran encuesta nacional, recabarán la opinión de especialistas y centros de estudios sobre lo siguiente:

- a) Opinión sobre el proyecto de ley nacional de energía;
- b) Medidas que se aconsejan para mejorar los servicios de electricidad del país;
- c) Actitud que debe adoptarse con respecto a los convenios eléctricos suscritos con CADE y ANSEC en 1958.

3º — Se solicitará entre otras, la opinión de las siguientes entidades:

- a) Gobiernos de provincia por intermedio de cada poder ejecutivo provincial;
- b) Municipio de la Capital Federal y municipios capitales de cada provincia;
- c) Centro Energético General Mosconi;
- d) Centro de Ingenieros
- e) Federación Nacional de Abogados;
- f) Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas;
- g) Universidades argentinas y profesores de derecho, economía e ingeniería;
- h) Partidos políticos;
- i) Organizaciones obreras;
- j) Federación Universitaria Argentina;
- k) Fuerzas armadas de la Nación.

4º — Las opiniones y trabajos de esta encuesta deben estar presentados y recopilados antes del 15 de mayo de 1960 y en base a estos estudios las comisiones respectivas prepararán el despacho o las conclusiones correspondientes, previa publicidad de toda la documentación que se logre.

\* \*

Expediente 309-D-1960 (Perette y Zarriello).

**Proyecto de resolución**

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

1º — Reclamar que el Poder Ejecutivo no celebre contrato alguno con la CIADE, repitiendo un nuevo caso CADE, sin previo pronunciamiento del Congreso Nacional.

2º — Requerir que se dé intervención a Aerolíneas Argentinas en las tratativas que se están realizando sobre contratos bilaterales y el servicio aéreo.

3º — Expresar la oposición de la Cámara de Diputados con respecto a la privatización del transporte automotor y requerir la respectiva y previa intervención del Congreso Nacional.

\* \*

Expediente 432-D-1960 (Perette y otros).

**Proyecto de resolución**

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

1º — Reclamar de Agua y Energía Eléctrica (AyE) deje sin efecto los aumentos de tarifas eléctricas dispuestos en las ciudades del interior, tales como los casos de Paraná y Gualguaychú.

2º — Señalar que esos aumentos no pueden ponerse en ejecución, aparte de la incidencia económica en la población y en los sectores populares, ya que no tienen la homologación legal indispensable de los municipios respectivos.

\* \*

Expediente 1.291-D-1960 (Nougues).

### Proyecto de declaración

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

DECLARA:

Que mientras el Congreso de la Nación no se pronuncie respecto al convenio definitivo con CADE, que viola el primer convenio aprobado por ley nacional 14.772, no es posible la consideración de la ley de energía, por cuanto importaría un instrumento en manos de las secretarías de Estado que violaron disposiciones terminantes de la ley citada, y pueden dar lugar a negociaciones de análogas consecuencias. A efectos de informar al cuerpo sobre los motivos que dieron lugar a negociaciones tan perjudiciales a los intereses públicos, corresponde se invite al señor ministro de Economía y al secretario de Energía y Combustibles a concurrir al seno de esta Honorable Cámara a dar las explicaciones pertinentes.

\* \*

Expediente 1.385-D-1960 (Perette).

### Proyecto de resolución

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

1º — Reclamar del Poder Ejecutivo deje sin efecto todo trámite o resolución sobre formación de una sociedad mixta para la explotación de la superusina de Dock Sud.

2º — Señalar que el Ministerio de Economía no puede comprometer el patrimonio nacional ni propugnar la formación de la presunta sociedad a espaldas del Parlamento argentino y en momentos en que el Poder Legislativo debe considerar toda la cuestión eléctrica.

3º — Significar que el Poder Ejecutivo, por intermedio del presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, ha señalado los graves peligros que para la economía nacional entrañan las sociedades mixtas y su papel con respecto a los servicios públicos de electricidad.

4º — Afirmar la decisión de defender el patrimonio nacional, la soberanía argentina y esos servicios de electricidad en manos del pueblo argentino, liberados de los grandes consorcios monopolistas foráneos, a la vez que señalando la grave responsabilidad del Poder Ejecutivo al adoptar estas decisiones con prescindencia del Poder Legislativo.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración en general.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: antes de que se conceda la palabra al señor diputado informante deseo anunciar a la Honorable Cámara, en nombre del bloque de la mayoría, que hecho el informe del sector de la mayoría, que va a ser realizado por el señor diputado Liceaga en nombre de las tres comisiones, de acuerdo a lo que prescribe el artículo pertinente del reglamento, y escuchados los informes de los otros dos sectores de la Cámara, este bloque, por mi intermedio, solicitará el cierre del debate, para que este proyecto de ley se vote inmediatamente.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Liceaga.

**Sr. Liceaga.** — Señor presidente: el debate que iniciamos ha tenido la virtud de polarizar en modo singular la atención del país. Desde diversos ángulos se está conmoviendo a la opinión pública. Muchos hombres militantes en diversos sectores del pensamiento argentino han alzado su voz coincidiendo en la reprobación del proyecto que vamos a tratar.

Puedo afirmar con plena responsabilidad que no hemos sido insensibles, que no han dejado de preocuparnos los ataques y acusaciones con que se quiere envolver a la mayoría de esta Cámara, dispuesta a dar su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo. El diputado que habla ha enfrentado acaso el mayor problema de conciencia de su vida pública. Por eso ha pesado cada argumento, cada crítica y cada oposición a la conducta y a la actitud asumida por nosotros. Pero una responsabilidad solidaria, que no está afirmada en una adhesión irreflexiva, sino en la comprensión del problema económico argentino, nos lleva a desechar posiciones irrealizables para buscar soluciones reales, dando al país los instrumentos necesarios para salir de la penosa paralización económica en que nos encontramos.

Todos y cada uno de los miembros de esta bancada, compenetrados de la realidad argentina, sabemos que de nada servirá someter al pueblo a restricciones y sacrificios y que nada significarán esas restricciones y sacrificios si se sigue careciendo del hilo conductor de la energía que mueve fábricas y motores, que posibilita poner en marcha la industria, que transforme en su integridad la riqueza nacional. De ahí, señor presidente, que quienes pretenden marcarnos con el estigma de entreguistas se estrellarán contra nuestra voluntad de construir una Nación próspera en ejercicio pleno de sus posibilidades y de su soberanía.

El despacho que consideramos se ha originado en el mensaje que acompaña al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, enviado al Congreso en el mes de diciembre último. Ese mensaje fue girado a las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, y fue sometido a un riguroso análisis. Se consultó a



funcionarios que estuvieron vinculados a la preparación del proyecto, como también a autoridades en materia eléctrica. Estos informes de funcionarios y autoridades, como también las opiniones vertidas en diversos ámbitos del debate público, fueron utilizados por las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en nombre de las cuales hablo, para producir despacho.

El proyecto del Poder Ejecutivo, como también el despacho, es producto de la aspiración de satisfacer exigencias de una realidad incuestionable en que se conjugan situaciones y causas institucionales como también situaciones y causas económicas. Estas causas están referidas en la electricidad al problema específico, que tiene caracteres propios y que es necesario poner en evidencia, siendo: la trascendencia adquirida por la energía eléctrica en la actividad contemporánea; la necesidad de una legislación que regule las relaciones entre quienes actúan, ya sea como productores y transportadores, ya como consumidores de energía eléctrica; la mayor participación del Estado en la producción, transporte y distribución de la energía; la obligación del Estado de impulsar y canalizar su propio esfuerzo y el de la colectividad para obtener la mayor y más eficiente producción de energía, y el requerimiento de grandes capitales y avanzados sistemas técnicos necesarios para los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que obligan a la interconexión para el logro de un mercado óptimo y la utilización integral de los potenciales hidroeléctricos. Esto hace necesario que el gobierno oriente su acción administrativa dentro del marco de una legislación apropiada.

El conjunto de estos factores obliga a ordenar el régimen eléctrico, estableciendo el alcance de la jurisdicción nacional y las atribuciones del poder administrador en la materia. Por este motivo, las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales han formulado el despacho que se halla a consideración de la Honorable Cámara. La mayoría cree que ha adecuado el proyecto de ley a la realidad institucional del país, a las necesidades del desarrollo de la producción, a los requerimientos presentes y futuros del mercado de energía, y a las exigencias de la moderna técnica de producción y de transporte de energía eléctrica.

Nadie puede ignorar la trascendencia de esta ley, que estimulará el desarrollo de la producción de energía eléctrica, máxime cuando ese desarrollo trata de solucionar la crisis eléctrica que oprime al país. Las necesidades de electricidad actúan o evolucionan con un desarrollo progresivo, mientras que la producción de energía eléctrica no marcha con ese mismo ritmo.

Los estudios hechos por las Naciones Unidas sobre la energía en América latina señalan cómo el consumo argentino de electricidad en

relación al producto bruto por habitante es inferior al 30 por ciento de la misma relación en el promedio mundial. Nosotros superamos a los países de América latina excepto Chile; pero tenemos una producción per cápita inferior a la europea. El cuadro que solicito se inserte en el Diario de Sesiones, a esta altura de mi exposición, demuestra este aserto.

El panorama está agravado porque las instalaciones dedicadas a la producción de energía eléctrica no pueden superar un deterioro definitivo. Los equipos superan con exceso a los aprovechamientos máximos. Las instalaciones actuales no pueden forzar ya sus posibilidades para satisfacer las mayores exigencias del consumo general del país, como también las del desarrollo industrial.

La potencia instalada de las usinas es de 1.918.000 kilovatios. En usinas termoeléctricas la potencia es de 1.512.000 kilovatios, mientras que la producción a diesel representa 406.000 kilovatios. Las instalaciones termoeléctricas evidencian un deterioro que hace necesario que se les reemplace en un volumen de una capacidad de producción de los 290.000 kilovatios, que representan el 20 por ciento de las instalaciones totales. En diesel, la potencia instalada alcanza a 406.000 kilovatios, en su mayor parte en usinas de reducida potencia. El 27 por ciento, o sea 120.000 kilovatios, sobrepasa la vida útil, reclamando una reposición inmediata.

El abastecimiento normal en el Gran Buenos Aires requiere nuevas instalaciones en reemplazo de parte de las existentes. Actualmente se dispone del suministro de CIADE y SEGBA, con una capacidad de producción de 820.000 kilovatios. Además, hay que agregar a esta producción el suministro por parte de Agua y Energía, de 200.000 kilovatios, sumando 1.020.000 kilovatios; pero carecen de eficiencia instalaciones por 250.000 kilovatios, la cual hace que tengamos instalaciones económicamente posibilidades y eficientes por 770.000 kilovatios.

Consideramos nosotros —y también los técnicos— que en esta zona son necesarias instalaciones con una potencia de 1.400.000 kilovatios, para atender las necesidades de los procesos de producción y de consumo. Ello crea una exigencia de 630.000 kilovatios, que se puede suplir con la instalación de las usinas del grupo generador de Puerto Nuevo, con 140.000 kilovatios, y las de Dock Sur, con 600.000 kilovatios. Esto determinaría la superación del nivel de la demanda, pero hay que tener en cuenta que el aumento vegetativo del consumo, que es del 6 por ciento anual, crearía una exigencia de mayores instalaciones por 84.000 kilovatios anualmente, que más las reservas se concretaría en los 100.000 kilovatios. El costo de la potencia instalada por kilovatio es de 200 dólares, que representaría, a través de las necesidades de 100.000 kilovatios, una erogación

anual de los 20 millones de dólares, o sea, 1.600 millones de pesos.

El Gran Buenos Aires tiene un sistema de transmisiones del tipo radial, por lo cual se resta tensión en los extremos de las líneas. Es así que se necesita una adecuación de todo el sistema de transmisión.

Los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica implican la posibilidad de distribuir con efectividad sólo el 45 por ciento de la energía producida. Se necesita adaptar nuevas redes, con un costo de 128 millones de dólares, o sea 10.600 millones de pesos, de los cuales el 35 por ciento, o sea 3.710 millones de pesos, se debe destinar a las redes de baja tensión; el 40 por ciento, o 4.240 millones de pesos, para las redes de media tensión y cabinas transformadoras, y el 25 por ciento, o 2.850 millones de pesos, para las redes de alta tensión. A esto hay que agregar el aumento vegetativo anual, que crearía la obligación de grandes desembolsos para actualizar los servicios.

En el interior del país el déficit se puede calcular en 300.000 kilovatios de potencia instalada, con formas anacrónicas de la producción, en general del tipo diesel, y con poca utilización de los aprovechamientos hidroeléctricos, en los que está radicada la posibilidad de concretar el verdadero desarrollo de la producción eléctrica del país.

Los proyectos realizados al filo de los años, 20 señalan lo que se debió hacer, pero no se hizo. Tengo en mi banca una planilla referente a los recursos hidroeléctricos en el país y su grado de utilización, y para mayor información solicito se incluya en el Diario de Sesiones a esta altura de mi exposición.

El potencial hidroeléctrico del país está calculado en 11 millones de kilovatios. Nosotros tenemos instalados solamente 142.000 y a instalar 363.000, lo que hace un total de 505.000 kilovatios, con una absorción de todas las posibilidades del 4/5 por ciento del total.

El Centro Argentino de Ingenieros señaló que para 1967 necesitaríamos instalaciones que produjeran 16.000 millones de kilovatios, pero en el momento presente sólo estamos produciendo 7.360 millones de kilovatios-hora anuales. Será necesario acrecentar la producción en casi más del 100 por ciento para no correr el riesgo de un embotellamiento que trabee el desarrollo nacional.

La canalización de la capacidad económica del Estado para electrificación choca con el obstáculo provocado por la diferencia entre lo que es necesario realizar y el poder económico que tiene en el momento presente el Estado argentino.

Las exigencias del desarrollo económico hacen que el Estado deba actuar en el ámbito de su jurisdicción para que la energía eléctrica llegue a los niveles necesarios para eliminar el déficit

existente y satisfacer los requerimientos futuros. El alcance de la propuesta de las tres comisiones y del proyecto que se está debatiendo está circunscrito por:

1º La determinación del ámbito jurisdiccional del gobierno nacional, dentro del cual podrá actuar como promotor o realizador.

2º El ordenamiento de la economía eléctrica, considerando a la producción de electricidad como una actividad industrial y al producido como un bien.

3º La atribución del Poder Ejecutivo dispuesta por una ley que dicte el Congreso para realizar o promover la producción industrial de energía eléctrica en el ámbito de su jurisdicción.

4º El tendido de una red de interconexión que permitirá el racional y económico aprovechamiento de los potenciales hidroeléctricos y el control del transporte de la energía a través de la empresa del Estado Agua y Energía.

5º El mantenimiento de la jurisdicción provincial y municipal dentro de su propia esfera, no afectando a la producción, transporte y distribución, como tampoco a los servicios públicos vinculados a los mismos.

6º La determinación de las normas a las cuales se ceñirá el otorgamiento de concesiones y autorizaciones dentro de la jurisdicción nacional.

7º La fijación del régimen económicofinanciero, que regulará las tarifas y precios de la energía producida, como también la utilización en el servicio público realizado por el Estado nacional.

8º La determinación de un sistema zonal y el control de la política eléctrica realizada por el gobierno nacional.

9º La especificación del régimen económico-financiero que permita la creación del fondo de la energía eléctrica para la realización de las obras requeridas y el desarrollo eléctrico del interior.

10 La autorización de la empresa del Estado Agua y Energía para actuar con la fluidez financiera necesaria para la realización de las obras que requiere el cumplimiento de los planes de electrificación.

Como circunstancia especial —y en su consideración he de poner la mayor preocupación—, se dispone que el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de servicio público en el gran Buenos Aires.

He de procurar señalar los rasgos más característicos, en sus aspectos técnico y económico, porque hacen a la esencia de esta ley y determinan las consecuencias de tipo institucional.

Un aspecto de la política económica vigente está referido a la necesidad de crear los factores de producción, que permitirán se impongan nuevas técnicas y se logre la transformación que la utilización de los elementos ener-

géticos ha de provocar, revolucionando nuestra economía.

Si el gobierno nacional debe actuar en esa transformación, es necesario que se limite el ámbito de su actuación, es preciso que en la organización de los planes y en la fijación de las prioridades se actúe considerando al país como una unidad económicosocial, y es preciso también que se actúe para suprimir los desequilibrios existentes. Si es cierto que se debe procurar suprimir el déficit de energía del gran Buenos Aires, no es menos cierto que debe eliminar el déficit del interior, acrecentar su potencial y permitir la expansión de las economías yacentes.

El despacho de la mayoría dispone que la ley regulará la acción del gobierno nacional cuando la misma esté referida a la industria, transporte y distribución de electricidad dentro de su propia jurisdicción. Su imperio no incluye lo referido a la transmisión de palabras, señales o imágenes. El último párrafo del artículo 6º dispone, expresamente —y la mayoría lo ha querido así—, para evitar errores de interpretación, que la jurisdicción local para los servicios públicos quede salvaguardada. Esta disposición, juntamente con el artículo 3º, que define el servicio público, condiciona claramente que el gobierno nacional no interferirá la gestión de las provincias o municipalidades.

El artículo 13 estatuye la aplicación subsidiaria de la ley 4.408 y, en consecuencia, de la 750 ½, manteniendo así las atribuciones de las autoridades locales.

Aclaradas estas limitaciones, queda por determinar el alcance de la jurisdicción nacional, que está determinada y delimitada por los diversos incisos del artículo 6º.

El inciso a) del artículo 6º incluye en la jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transporte y transformación, cuando se vincule a la seguridad de la Nación. El derecho del Congreso a legislar en esta materia está implícito en el artículo 67 de la Constitución, incisos 21 y subsiguientes. Como antecedente extranjero en esta materia existe la National Defence Act, sancionada el 3 de junio de 1916 en los Estados Unidos, autorizando al presidente de la República a investigar y determinar los medios adecuados para la producción de nitratos y de otros elementos necesarios al municionamiento de guerra, que le da atribuciones también para realizar aprovechamientos eléctricos. En virtud de esta ley en 1917 se comenzó la construcción del dique Wilson-Dam, en el río Tennessee, Estado de Alabama, finalizándose la misma en 1926.

El inciso d) motiva un detenido análisis, pues creo que en su explicación y en su aplicación está basada la jurisdicción nacional en cuanto a las atribuciones del poder nacional para realizar los aprovechamientos. En él se concretan dos factores esenciales, el uno referente a la regu-

lación del comercio entre diversas provincias a través de la cláusula comercial de la Constitución; el otro, de orden esencialmente técnico.

El aspecto técnico está fundamentado por dos factores que provocan variantes en la producción y el consumo. El primero vinculado con la modificación estacional de los potenciales hidroeléctricos; el segundo, relacionado con la variación estacional y diaria de la demanda de energía. Esto está configurado por la necesidad de más horas de iluminación artificial en épocas de invierno, y por la mayor demanda de energía en las últimas horas del día y primeras de la noche para el consumo familiar.

He de analizar estos dos hechos y señalar cómo se vinculan, cómo exigen una solución y cómo el aprovechamiento de los potenciales hidroeléctricos exige una adaptación de la interconexión, que en el caso especial de nuestro país vincula esta necesidad de interconexión a la cláusula comercial de nuestra constitución.

El potencial de un aprovechamiento hídrico no está regido solamente por el desnivel de la caída del agua, sino también por la masa de agua. La represa y el almacenamiento permiten regular artificialmente el caudal y en consecuencia el potencial; pero las variantes hídricas de la zona de alimentación de los caudales modifican en el año el potencial aprovechable.

Como la masa de agua regula la producción de electricidad, los aprovechamientos hidroeléctricos vinculados a los deshielos aumentan en potencial en la primavera, y se acentúa ese proceso durante el verano, a raíz del deshielo en las mayores alturas, para disminuir en el período invernal.

Se produce una disparidad determinada por el hecho de que cuando es menor la producción hidroeléctrica aumenta la demanda.

Por otra parte, en las regiones de llanura, las precipitaciones estacionales hacen posible una mayor acumulación en determinadas temporadas y por lo tanto un mayor aprovechamiento.

Al considerar la posibilidad de un aprovechamiento mareo motriz, es necesario tener presente que él no se presta a un suministro regular y continuo de la energía. La obtención de energía mareo motriz es posible solamente durante algunas horas del día, variando la producción de acuerdo con la curva de amplitud de la alta y baja marea. Se crean así dos clases de energía: la de producción firme y regular y la secundaria o temporaria.

Aunque fuese posible lograr la uniformidad en la producción de energía eléctrica durante el transcurso del año, es preciso tener presente que la demanda de energía no es uniforme en el día y que las diferencias entre la carga media y la carga máxima son más pronunciadas en las grandes concentraciones urbanas y en el invierno. Este déficit se suple con instalaciones complementarias que pueden ser hidráulicas o térmicas. En consecuencia, en la producción hidráulica

o térmica concurren dos clases de instalaciones: las de producción básica y las de producción máxima.

En las usinas de máxima existe una variante, que es el aprovechamiento por almacenamiento mediante bombeo, con lo cual se busca la finalidad de afirmar el rendimiento de las usinas de máxima.

Todos estos sistemas hacen posible suplir el déficit mediante interconexiones entre plantas situadas en regiones que tienen regímenes hidrológicos diferentes y tan complementarios como sea posible.

La interconexión permite: nivelar las diferencias interregionales que soporta la producción hidroeléctrica debido a desiguales regímenes hidrológicos; la utilización regular de la electricidad secundaria reduciendo las instalaciones de reserva; la elevación de factores de carga constante o la proporción entre la electricidad generada por una planta y la que ella es capaz de producir, con lo que se reducen los costos de producción; al ampliarse el área de acción, se diversifica la demanda elevándose así el factor de carga y reduciéndose los costos; la utilización de las plantas de acuerdo con las exigencias del consumo y la economicidad de la producción.

La economicidad de las interconexiones está remitida a la relación entre la producción de energía secundaria y el costo del tendido de las interconexiones. Se concreta así una ecuación en la cual uno de los factores es la energía a transportar y el otro es el costo del transporte. Cuanto mayor sea la energía secundaria posible de producir y menor el costo del tendido, más atractivo económico poseerán las interconexiones.

El sistema hidrológico argentino está caracterizado por las irregularidades de los caudales y por el régimen complementario de ellos.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas y los estudios realizados, el potencial hidroeléctrico de los ríos argentinos y su participación internacional alcanza a once millones de kilowatts capaces de generar cuarenta y un mil millones de kilovatios hora por año.

Para una mejor comprensión del problema, debe considerarse al país dividido en distintas zonas, de acuerdo con los regímenes hidrológicos y sus posibilidades de aprovechamiento.

La primera región, del Norte, abarca las provincias de Jujuy, Salta, parte de Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, con una proporción del 5,8 por ciento del potencial hidroeléctrico total. Esta región es pobre en aguas y por consiguiente en recursos hidroeléctricos. Los caudales máximos se producen en los meses estivales, en consonancia con las grandes precipitaciones pluviales.

La segunda región es la del centro y está constituida por las provincias de Córdoba y San Luis, cuyos recursos hidroeléctricos representan el 2,8 por ciento del total. Como la zona

Norte, esta región está alimentada por las grandes precipitaciones estivales que determinan la irregularidad de los caudales. Ello exige para su racional aprovechamiento costosas obras de regulación que gravan fuertemente sobre los costos de la energía y deben ser explotadas también para regadío. Los recursos hidroeléctricos de esta zona están explotados en su casi totalidad, o al menos están ya realizadas las instalaciones. Ello permite afirmar que en un futuro próximo se verá obligada a recurrir a la abundante energía hidroeléctrica de la zona andina.

La región andina está formada por las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza, que poseen el 19,8 por ciento del potencial total del país. Sus ríos, con altos desniveles, no tienen grandes caudales, y hacen difícil la instalación de represas. Por consiguiente, su aprovechamiento está muy vinculado al problema del regadío. El excedente de la producción de esta zona podrá ser transportado a la zona central, permitiendo a ésta un mejor aprovechamiento de sus embalses.

La zona litoral comprende las provincias de Formosa, Este del Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, que representan el 33,2 por ciento del potencial total. El aprovechamiento de este potencial exige la realización de convenios internacionales y de un ordenamiento hidrológico. El caudal del río Paraná está alimentado por una cuenca perteneciente en gran parte al Brasil, con lluvias anteriores a las que mantienen el irregular caudal del río Uruguay.

Analizando el estudio hecho en 1920 por los ingenieros Gamberales y Mermoz y continuado con posterioridad, surge la diferencia en el régimen de caudales de los dos ríos complementarios en sus épocas de máxima y mínima carga.

El informe preliminar de la delegación uruguaya a la Comisión Técnica Mixta para el aprovechamiento del Salto Grande señala una potencia a instalar de un millón cuatrocientos mil kilovatios, con una producción básica de ochocientos cuarenta mil kilovatios, lo que revela una gran producción de energía secundaria.

El aprovechamiento del Apipé, mediante un convenio internacional, permitirá el trasvase de los caudales excedentes del río Paraná al Uruguay, como lo han proyectado los ingenieros ya nombrados, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la potencia a instalar en Salto Grande.

La zona patagónica comprende las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y la gobernación de Tierra del Fuego, con una potencialidad hidroeléctrica que representa el 38,4 por ciento del total. Allí se observa el ejemplo de complementariedad de caudales que ofrecen los ríos Negro y Colorado. El primero tiene dos periodos de crecida: uno de-

bido a las lluvias de invierno que se producen durante los meses de junio y julio, y otro debido a los deshielos de primavera que tienen lugar en octubre y noviembre. A partir de esa época descende el caudal, produciéndose el estiaje durante los meses de marzo y abril. En cuanto al río Colorado, el máximo caudal se produce en los meses de enero y febrero.

Por otra parte, el aprovechamiento mareomotriz de la península de Valdez, con una generación intermitente de energía en el golfo San Jorge, debe complementarse con la utilización del río Limay.

De todo este panorama surge que en la región andina la producción secundaria se realiza en primavera y verano, y en el litoral los mayores potenciales se desarrollan en el invierno.

La racional utilización de los aprovechamientos hidroeléctricos podrán realizarse considerando su interconexión; posibilitándose una adecuación de todo el panorama o de toda la producción hidroeléctrica a bases de las interconexiones. Esto consagra el tendido de líneas de alta tensión, que permite el traslado de electricidad de una zona a otra, de una provincia a otra.

Para mayor comprensión de estos aspectos, pido que se inserte en el Diario de Sesiones el mapa que reproduce el posible trazado del sistema nacional de interconexiones, demostrativo de cuáles son las obras que se consideran de ejecución a través de la aplicación de esta ley de energía. En él están señalados a grandes trazos las interconexiones, como así también las provincias o regiones que serán alimentadas mediante el traslado de la energía eléctrica.

Las interconexiones no están libradas a la arbitrariedad, sino que están referidas a la racional y económica utilización de las potencias hidroeléctricas, y esta racional y económica industrialización está en función de la producción secundaria y del costo del tendido de la interconexión.

Todo esto está referido a la cláusula comercial de la Constitución. Así es dable pensar en un régimen de interconexiones que haga posible un desarrollo apropiado y económico de los aprovechamientos hidroeléctricos.

La ley se circunscribe a una adecuación de las posibilidades dentro de los factores institucionales, en los que actúa la cláusula comercial de la Constitución.

Tanto las disposiciones del proyecto del Poder Ejecutivo como el texto del despacho, merecieron los más rudos ataques en lo referente a jurisdicción nacional. Se dijo que la iniciativa avasalla nuestro sistema federal de gobierno. Yo considero que no se ataca ni vulnera ni en la letra ni en su espíritu la Constitución Nacional: está referido a la defensa nacional, al comercio interprovincial y al comercio internacional circunscritos a las atribuciones del

Congreso Nacional en el artículo 67 de la Constitución.

La ley se ajusta a un objetivo preciso, la energía hidroeléctrica.

El artículo 59 del despacho señala que la energía de las caídas de agua y de otras fuentes de energía constituyen una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran esa fuente. Esto explica que otros aprovechamientos de agua y de la fuerza eléctrica se reconocen dentro de la esfera de los poderes provinciales, siempre que la técnica y los hechos no determinen que su uso sea indivisible. La única excepción está indicada por la medida estrictamente indispensable para la instalación y operaciones de los correspondientes sistemas de obra de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.

Esta circunstancia trae tres consecuencias. Primero, la propiedad de la energía eléctrica no comporta para el titular ni la propiedad del agua, ni el dominio del suelo, ni tampoco el derecho al uso de uno u otro. Segundo, la jurisdicción sobre el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, no significa el desplazamiento de la jurisdicción local en lo que se refiere al régimen de las aguas o de las tierras. Tercero, se establece concordancia con el inciso 2º del artículo 15, cuando al hablar del requerimiento de las concesiones se refiere al «normas reglamentarias del uso del agua y en particular establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local».

También en el inciso citado se señalan las prioridades con referencia al uso doméstico del agua y al regadío.

El artículo 10 dispone que el Poder Ejecutivo proveerá las grandes captaciones de energía. Para cumplir esta disposición median dos procedimientos: primero, la ejecución de las obras y su explotación por cuenta propia de los grandes aprovechamientos hidroeléctricos; segundo, la delegación en terceros de la ejecución de las obras y explotación de los grandes potenciales.

Es necesario señalar cuál es el sentido de la ley, cuál es el ordenamiento que tendrá la economía eléctrica.

Del estudio de los antecedentes de la ley, de las consultas hechas a los funcionarios que expusieron su pensamiento con respecto a la aplicación de esta ley, surge lo siguiente: primero, la producción en la esfera de la jurisdicción nacional, será realizada por empresas del Estado o por empresas privadas; segundo, la interconexión de todas las plantas constituye una red que será manejada por la empresa del Estado Agua y Energía; tercero, las empresas productoras entregarán en venta a la red nacional la energía producida; cuarto, la red nacional transportará la energía a los mercados de consumo; quinto, los centros de consumo, que podrán ser servicios públicos nacionales, provinciales o mu-

nicipales, o plantas industriales aisladas, adquirirán la energía.

El primer párrafo del artículo 11 faculta al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones y autorizaciones. Estas no pueden depender del arbitrio del Poder Ejecutivo, porque están reguladas por lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 18 del proyecto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14, las actividades relacionadas con la producción de energía, transporte y distribución que realicen las empresas privadas, requerirán concesiones y autorizaciones. En consecuencia, el gobierno nacional otorgará en su jurisdicción concesiones de obras públicas.

Es menester insistir en algunos conceptos. El Estado podrá o no realizar la instalación de los grandes aprovechamientos. La contratación de las obras podrá efectuarse comprometiendo el esfuerzo presente de la Nación o mediante pagos diferidos. Si las condiciones de pago presente o diferido no permiten contratar las obras, es necesario que las mismas se realicen, aunque se deba contratar concesiones de obras públicas.

El nuevo panorama que se presenta por las obras hidroeléctricas funcionando como integrantes algunas de las empresas del Estado, Agua y Energía, y la concesión a empresas privadas, determinará una interconexión que regulará, a través de la empresa estatal citada, toda la producción.

El mercado de consumo del Gran Buenos Aires estará bajo el control del Estado nacional. El mercado de consumo del interior está servido en gran parte por Agua y Energía.

Existe un plan de traspasar esos servicios a las provincias y municipalidades. Sobre esto existe la situación que se crea por la concesión de obras públicas en favor de empresas privadas. Lo reconocemos.

Sé que muchos se pronuncian contra esta política, y sé de muchos que se han de expedir condenándola, como ya se está haciendo. Sé que han de afirmar que sería mejor, más útil y aún más saludable para el país, que esos aprovechamientos fuesen realizados por la empresa Agua y Energía.

Comparto esa posición, pero en el dilema de hacer o no hacer, opto por el hacer, aunque en ello no se cumplan todas las aspiraciones que han de impulsar gran parte de nuestra acción para sacar al país del atraso proveniente de años pasados. (Aplausos.)

Todos tienen el conocimiento de los esquemas que la realidad ha trazado sobre la influencia parcializadora de las inversiones de capitales en los países con economía primaria.

Nadie puede ya pasar por alto de cómo esas mismas inversiones sólo permiten el desarrollo de una producción básica que amplía la exportación y desarrolla el mercado interno, solamente para promover la absorción de las mercaderías importadas.

En las circunstancias presentes el Estado argentino debe canalizar esas inversiones para madurar la revolución industrial que es necesario realizar y que en este instante de la historia, como en cualquier otro momento, se debe lograr poniendo la energía al servicio de la producción. Sin energía no hay producción industrial, no hay adopción de los progresos técnicos; lo que se ha logrado queda paralizado, ciñendo al país dentro de los marcos de un proteccionismo que consolida los monopolios internos.

Sin energía abundante y a bajo costo no se pueden establecer industrias que permitan transformar las economías del interior del país y liberarnos de un régimen que nos somete a la tiranía de los monocultivos y de la oligarquía terrateniente.

Sin energía abundante no podremos elaborar los bienes que suplan las importaciones. Tampoco podremos evitar la distorsión de nuestras posibilidades.

Por eso es que en la opción hacemos este pronunciamiento.

Esta exposición ha desplazado la referencia detallada al artículo 11, para el último, procurando tratarlo en lo posible en forma especial.

El primer párrafo del artículo indicado dispone que el Poder Ejecutivo, en el ámbito de su jurisdicción, «podrá otorgar concesiones y autorizaciones, y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional». Esta norma señala una de las orientaciones que, en determinada circunstancia y para determinado caso, puede tomar la política económica del gobierno.

Puedo decir que este artículo es lo que más ha hecho reflexionar a muchos diputados, y también el que más ha preocupado al diputado que habla.

Es necesario que al considerar problemas de esta naturaleza sepamos qué es lo que pretendemos hacer y cuál es el móvil de todo ello. Y es más necesario aún cuando se dictan leyes que han de interesar al mercado de consumo de electricidad a través de concesiones, cuya consideración siempre ha conmovido a la opinión suscitando enconados debates y lesionando reputaciones. Por ello he querido referirme aisladamente a este aspecto de la ley y a las posibles consecuencias de su aplicación.

El artículo 11 obliga a considerar dos aspectos fundamentales: el institucional y el financiero.

El gobierno nacional en su jurisdicción puede actuar, por sí, como realizador exclusivo de parte o de toda la actividad eléctrica. Puede realizar por sí el aprovechamiento de los grandes potenciales o puede otorgar en concesión esos aprovechamientos. Puede realizar por sí, la prestación de un servicio público, o puede delegar esta prestación.

Siendo la jurisdicción nacional la delimitada por el artículo sexto, la única posibilidad que

posee el gobierno nacional de ejercer su poder jurisdiccional en materia de servicio público está circunscrita al territorio del Gran Buenos Aires, determinado por la ley 14.772, y Tierra del Fuego. Está más de acuerdo con lo mucho que hemos dicho, con lo mucho que nos hemos preocupado de que el servicio público sea realizado por los poderes públicos en cada una de las jurisdicciones que corresponda.

Pero no creo que a esta altura del proceso argentino se pueda restar poder al gobierno, dentro de términos férreos y normas rígidas, que impidan opciones, trabando las soluciones más racionales y económicas. La ley que consideramos debe crear todas las posibilidades que condiciona la economía eléctrica.

Con la sanción de la primera parte del artículo, facultando al Poder Ejecutivo para otorgar concesiones en su jurisdicción, es decir en el Gran Buenos Aires, el Congreso legisla sobre concesiones de obras públicas y servicios públicos. Crea las condiciones en que se deben otorgar las concesiones y autorizaciones, ejerce la facultad legislativa, esto es, reguladora de la concesión.

Es el Poder Ejecutivo, como poder administrador, quien debe otorgar las concesiones y ejercer las facultades propias del poder administrador. Estas facultades están reguladas por la ley, y se han de circunscribir dentro de los límites fijados por los artículos: 14, que dispone qué «es lo que debe ser objeto de concesión o autorización»; 15, que regula el régimen de las concesiones de obras públicas; 18, que legisla en detalle sobre concesiones de servicios públicos, y los artículos 39 y 40, que disponen sobre precios y tarifas.

En materia del régimen de concesiones, las condiciones de las mismas están detalladamente determinadas. Lo mismo en lo que respecta a precios y tarifas, en los cuales se especifican las bases que deben regir el cálculo de las tarifas.

Podría extenderme un poco más sobre todos estos aspectos que hacen al panorama de esta economía; las disposiciones reglamentarias me lo limitan. Pero no puedo dejar de asumir la responsabilidad de decir algunas cosas que conciernen al régimen eléctrico del Gran Buenos Aires.

Se nos ha acusado, desde todos los ámbitos de la opinión argentina, que nosotros estábamos por una reconversión del convenio autorizado por la ley 14.772. Tengo el deber y la responsabilidad de desmentir y condenar esa afirmación. También debo expresar que el gobierno mantendrá su fidelidad al cumplimiento de la ley 14.772 y que seguiremos la etapa del gran desarrollo nacional a través de la producción energética que transforme y revolucione todos los aspectos fundamentales de la economía nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — ¿Hay algún orador anotado, señor presidente?

**Sr. Presidente** (Monjardín). — No, señor diputado.

**Sr. Gómez Machado.** — Hago moción de orden de que se cierre el debate.

**Sr. Boffi.** — Si me permite el señor diputado, para una aclaración previa...

**Sr. Gómez Machado.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Boffi.** — Después de haber estado ausente de este recinto durante dos reuniones de la Honorable Cámara, he interpretado que no se podía perturbar más la marcha del Parlamento, y ante la inutilidad, frente al número, de poder obtener la sanción del proyecto de ley que he presentado con otros colegas, y dada la resolución de la mesa directiva de mi partido, que en el día de hoy ha emitido un comunicado considerando que es obligación formar quórum, deseo dejar establecido que en particular voy a solicitar las reformas al proyecto que estamos tratando, las que se van a referir al artículo 11, que trata de las concesiones. (*Aplausos.*)

**Sr. Tarulli.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Tarulli.

**Sr. Tarulli.** — Por no estar de acuerdo con la estructura general del proyecto en discusión, anticipo que voy a votar por su rechazo.

**Sr. Cárdenas.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.

**Sr. Cárdenas.** — Deseo manifestar que en particular propondré una reforma al artículo 11 del despacho de la comisión.

**Sr. Gómez Machado.** — Solicito, señor presidente, que si hubiera informe escrito, de acuerdo con el artículo 85 del reglamento, se inserte en el Diario de Sesiones.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Oportunamente se van a votar las inserciones solicitadas.

Se va a llamar para votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado Gómez Machado, de que se cierre el debate.

**Sr. Uzal.** — Solicito que la votación sea nominal.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado Uzal.

—No resulta suficientemente apoyado.



**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la moción de orden de cierre del debate.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Industria, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

— Resulta afirmativa de 95 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración en particular el artículo 1º.

**Sr. Gómez Machado.** — Pido la palabra.

Hago indicación de que se enuncien los artículos y se den por aprobados aquellos sobre los cuales no se formulen observaciones.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Habiendo asentimiento, se procederá en la forma indicada.

— Se aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado Heredia.

**Sr. Heredia.** — Señor presidente: quiero proponer a las comisiones que han formulado despacho, un agregado que iría al final de este artículo. Es el siguiente: «Cuando el trasvase de cuencas fluviales cuyas aguas estén distribuidas en sistema de riego de jurisdicción provincial, su aprovechamiento para energía eléctrica promovido por el gobierno federal, será autorizado legalmente por la o las provincias en donde se encuentre el lecho natural del río».

Para fundar este agregado he de ser sumamente breve. Es de conocimiento de los señores diputados la importancia que tiene la distribución del agua de los ríos en las zonas que están bajo riego; cualquier obra hidroeléctrica que pudiera interferir dicho sistema debe quedar a consideración de los gobiernos provinciales en los que se quiera instalar una obra de ese tipo, puesto que puede interferir el sistema de riego establecido. Creo que estas palabras bastan para explicar la intención del agregado que no desvirtúa en punto alguno el propósito fundamental de la ley.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Liceaga.

**Sr. Liceaga.** — Este artículo tiene por objeto fundamental limitar la acción del gobierno nacional en materia de energía, cuando hay trasvases de una cuenca fluvial a otra. Entendemos que el agregado propuesto por el señor diputado Heredia no atañe a esa especificación, por lo que la comisión no lo acepta.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 8º del despacho en consideración.

— Resulta afirmativa de 88 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Corresponde que la Honorable Cámara resuelva sobre el agregado propuesto por el señor diputado Heredia. Se requieren dos tercios de votos.

Se va a votar.

— Resulta negativa de 77 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 9º.

— Se aprueban los artículos 9º y 10.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.

**Sr. Cárdenas.** — En mi nombre y en el de los señores diputados Tarulli, Bulit Goñi, Alzabé, Santagada, Tello Herrera, Maluf y Abraham, propongo que se modifique la primera parte del artículo 11 en la siguiente forma: «En el ámbito jurisdiccional a que se refiere el artículo 6º, el Poder Ejecutivo otorgará las concesiones pertinentes ad referendum del Congreso de la Nación. Los contratos respectivos, con el mensaje del Poder Ejecutivo y el dictamen del Consejo Federal de la Energía, deberán ser examinados por el Congreso en un plazo no mayor de sesenta días a contar del día en que tomen estado parlamentario. El rechazo por el Congreso obrará como condición resolutoria de los contratos, pudiendo la aprobación producirse en forma expresa, o tácita transcurridos los sesenta días si el Congreso no se pronunciara.»

**Sr. Alzabé.** — Quiero dejar expresa constancia de mi voto en contra del artículo 11.

**Sr. Tarulli.** — Como bien lo ha señalado el señor diputado Cárdenas, apoyo el artículo propuesto por mi comprovinciano. Considero en mi opinión que con ello cumplimos con nuestro deber como legisladores de la Nación y no otorgamos facultades a otro poder.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Boffi.

**Sr. Boffi.** — Señor presidente: el artículo 11 del proyecto que estamos considerando se refiere a la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y autorizaciones. Soy contrario a toda clase de concesiones. Lo soy por íntima convicción, y, más, porque lo indica claramente el programa y la profesión de fe doctrinaria de la fuerza política a que pertenezco, y cuando estos documentos partidarios así lo indican lo hacen con un profundo concepto de soberanía e interpretando con justo derecho que la energía eléctrica en toda su integridad debe ser patrimonio del Estado.



A estos conceptos definitorios se agrega también un concepto ético. No dudo —nadie duda— de la honestidad del funcionario que desempeña la más alta magistratura de la Nación, y tampoco de la honestidad de los señores diputados que tienen esta honda preocupación por resolver el problema de la energía en el país. Todos sabemos, sin lugar a dudas, de la crisis ética y moral que sufre en este momento el país. Lo vemos todos los días, lo sentimos en cada instante; lo demuestra el periodismo en sus páginas. Se escuchó esto mismo en este recinto por diputados de esta bancada, y lo ha afirmado el propio presidente de la República en diferentes discursos que ha pronunciado por todos los lugares del país. A veinticuatro años de sucedida, aún no se han acallado los ecos del escandaloso negociado de las concesiones eléctricas en el que intervinieron dos compañías que aún actúan en el país, y que fue el principio de la corrupción moral en que todavía vive nuestra patria. Todo lo que se haga para impedir casos semejantes, es deber del legislador hacerlo. Nunca más cierto que ahora el concepto aquel, según el cual «vale más prevenir que curar.»

Se me dirá que las concesiones fueron otorgadas en esa oportunidad por un «parlamento chico», el Honorable Concejo Deliberante, pero también es cierto que el departamento ejecutivo pudo haber vetado esas ordenanzas y no lo hizo, tal vez porque era cómplice, o tal vez el organizador del ataque a los intereses del pueblo de la Capital de la República.

Por eso y por muchas otras cosas, soy contrario a las concesiones, y sobre todo, por lo que la propia Constitución, en su artículo 67, inciso 16, dice claramente en la parte final, cuando entre las atribuciones que corresponden al Parlamento afirma que tiene la autorización para dar las concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo; y creo que no podemos nosotros derogar lo que claramente está asentado en la Constitución Nacional.

El señor presidente de la República, en conversaciones que mantuvo con algunos diputados, nos ha manifestado que frente al gran desarrollo económico del país se deben aprovechar todos los capitales que quieran cooperar en ese desarrollo, y que ello debe hacerse con cierta rapidez para evitar que largas tramitaciones los hagan emigrar apenas llegan o que ni siquiera lleguen a nuestro país.

El señor presidente necesita una ley ágil, que le permita actuar rápidamente para resolver esos importantes problemas. El se pregunta, y nosotros también, si el Parlamento puede resolver esos problemas con la agilidad requerida. A pesar de la buena voluntad de todos los señores diputados, es evidente que muchas veces los debates se transforman en largos torneos oratorios, propios de una olimpiada, que impiden dar realidad a muchos proyectos; otras

veces, los proyectos se demoran excesivamente en las comisiones, y hay casos concretos en que se han ocupado largas sesiones para disminuir —por ejemplo— las penas a los terroristas, y no se han dado soluciones a importantes problemas, como el sanitario. Es explicable la preocupación del señor presidente de la República frente a estas situaciones.

Pero yo insisto en que el Parlamento no puede derogar esa autorización que claramente está fijada en el inciso 16 del artículo 67 de la Constitución Nacional. Se debe agregar, en el artículo que estamos considerando, alguna disposición para salvar esa situación. Coincidiendo en parte con la proposición que ha hecho el señor diputado Cárdenas, yo propongo el siguiente agregado: «El contrato de concesión será remitido al Congreso para su aprobación. El Congreso podrá debatir y examinar cada una de las concesiones y el correspondiente mensaje del Poder Ejecutivo, debiendo dar su pronunciamiento en el término de sesenta días a contar de la fecha en que tomó estado parlamentario dicho mensaje. Para rechazar la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo, el Congreso deberá pronunciarse expresamente dentro de aquel término; para aceptarla, puede hacerlo expresa o tácitamente, entendiéndose esto último si deja transcurrir el plazo antes expresado sin dar pronunciamiento alguno.»

De esta manera, nosotros daremos la palabra definitiva en cuanto a los contratos de concesión. Por supuesto, debemos fijar un plazo, porque las necesidades del país así lo exigen, y también para evitar largas sesiones, ya sea por el apasionamiento de los señores diputados o por el empleo de tácticas dilatorias para que los proyectos de leyes no se sancionen.

Dejo así expresada la oposición terminante que hago con estas palabras a que el Poder Ejecutivo, sin intervención del Congreso, conceda concesiones en la materia que estamos considerando.

**Sr. Presidente (Monjardín).**— Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.**— Se la cedo al señor diputado Aquino.

**Sr. Presidente (Monjardín).**— Advierto al señor diputado que a continuación está anotado para hacer uso de la palabra el señor diputado Posse.

**Sr. Posse.**— No tengo inconveniente en cederle la palabra al señor diputado Aquino, para hablar después de su exposición.

**Sr. Aquino.**— El proyecto que está a consideración de la Honorable Cámara ha tenido una larga etapa de elaboración. Cada uno de sus términos ha sido sopesado, desde los múltiples aspectos jurídicos hasta los técnicos, económicos y éticos, porque ello estaba dentro de la preocupación de la bancada de la Unión Cívica Radical Intransigente.

Desde el punto de vista estrictamente institucional, no hay, de ninguna manera, delegación de facultades por parte del Congreso de la Nación en favor de otro poder del Estado. Por este proyecto se reglamenta específicamente, a través de todas sus cláusulas, la forma, el modo, el tiempo y la manera en que el poder administrador puede otorgar las concesiones. La prestación concreta de un servicio público entra en el ámbito administrativo y, en consecuencia, nosotros entendemos que el proyecto se ajusta perfectamente al derecho constitucional, porque es el poder administrador el que debe otorgar la concesión dentro de los requisitos y fórmulas convenidos para la satisfacción de una necesidad colectiva.

Entiendo que la disposición constitucional invocada por el señor diputado Boffi — artículo 67, inciso 16— no se refiere a la situación en debate. Se trata de una situación distinta en que, por ley del Congreso, se estimula una determinada actividad en beneficio de la Nación. En esos casos, efectivamente, se hace un tipo de concesiones, se hace un relevamiento de algún tipo de obligación, se establece un privilegio, un estado especial, un status jurídico, para que se cumplan los objetivos que prevé la Constitución Nacional. En estos casos es el Poder Legislativo el que establece este tipo de privilegio o de favor, especial, quebrando por esta vía excepcional el principio de igualdad ante la ley que prevé nuestra Carta Magna. Es decir, se trata de una situación completamente diferente.

Afirmo que el motivo, el móvil ético que invocamos en nuestra carta orgánica partidaria y en nuestra profesión de fe estará siempre resguardado en la conciencia militante de los hombres y mujeres de la Nación Argentina, y que no trabará el desarrollo nacional, sino que lo fortalecerá. Creemos que el desarrollo económico va unido a un hondo latido espiritual, y nosotros cumpliremos, sin ningún tipo de desviación moral, el gran programa que quiera Argentina y que creemos honradamente servir con esta ley y con nuestra presencia en las bancas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Posse.

**Sr. Posse.** — El señor diputado Boffi, pese a todo lo que se quiera disputar en contrario, ha traducido la íntima convicción que nos llevó al partido, y del partido al Parlamento. La elocuencia de sus conceptos me releva de expresar otros. Estimo que no se trataría sino de una reiteración innecesaria. Además, considero — pese a que los abogados saben esgrimir mayores argumentos para interpretar el articulado de la Constitución— que el Poder Legislativo no debe delegar facultades que le son propias e irrenunciables.

Así, escuetamente expuestos estos conceptos, quiero significar que estoy completamente de acuerdo con la modificación propuesta al artículo 11, y que solamente por disciplina, que nunca rompí, que jamás estuvo en mi ánimo no acatar, votaré tal como lo impone la mayoría de mi bloque.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: este artículo 11 es el nudo gordiano de la ley. Nosotros lo hemos analizado a la luz de la doctrina y de los principios partidarios, y venimos a este recinto a votarlo sin ninguna hesitación, sin ninguna duda. Nuestra profesión de fe doctrinaria expresa que los medios de la realización nacional son variables, como variables son las formas para lograrla. Lo importante es que los fines se mantengan inalterables, por lo que afirmamos que, a través de esta ley, esos fines que hacen al proceso de nuestra emancipación nacional y de la emancipación del hombre argentino, no se conmueven ni son rozados por la sanción que va a dar el Congreso.

Esté tranquilo el señor diputado Boffi. Alguna vez se hará en este Parlamento, en forma exhaustiva, la historia de las concesiones argentinas, de las que todos los hombres que en este momento estamos en este cuerpo somos herederos en cuanto han tenido de oprobioso y negatorio de la emancipación, y esas concesiones, señor presidente, han sido votadas por los cuerpos deliberativos del país, de donde la preocupación ética de si tenemos que otorgar o no concesiones está unida fundamentalmente a la posibilidad de que la criatura argentina se emancipe.

Si en este momento nos temblara el pulso y no creyéramos vocacionalmente que estamos en un proceso de transformación, de revolución argentina, entraríamos en la duda y pararíamos el progreso del país, sumergiéndolo al hombre argentino en la penumbra y en la miseria. Pero como tenemos bien firme el pulso, y sabemos que el fin fundamental de esta generación a quien le ha tocado venir a este Parlamento es realizar ese proceso de transformación nacional, no podemos detenernos. Nuestro fin es la emancipación definitiva de nuestro hombre; por eso estamos aquí para votar esta ley, cumpliendo con los fines éticos de nuestra profesión de fe.

Quiero aprovechar la circunstancia para demostrar al país cómo es el Parlamento argentino, donde deben debatirse las leyes. Nuestra angustia de estos días fue porque el país podría quedar sin ley de energía. Invitamos a todos los sectores del país a concurrir a este Parlamento, así como se ha debatido esta noche aquí, entre los hombres de la Unión Cívica Radical Intransigente, contraponiendo las opiniones e, incluso, votando en contra del despacho de la comisión; pero lo que no puede ocurrir en el país es que

no haya ley de energía, porque los legisladores se nieguen a discutirla en el recinto.

Yo acuso a los que no han tenido la envergadura moral de concurrir a este recinto a cumplir con su deber, porque están unidos a la traición, al hombre argentino. Yo los acuso así, ante el futuro de mi país, y traigo aquí los nombres de los prohombres del radicalismo, de los prohombres que alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer algo por este país, aun teniendo que someterse a una realidad concreta, porque el país no se construye en teoría. Estamos apenas en el arte de lo posible, y nuestra decisión es definitiva. O esta ley está al servicio del hombre argentino, o no habría ley de energía en el país, con lo que el proceso industrial de nuestra emancipación se detendría definitivamente.

En esta oportunidad quiero también decir que he visto por ahí invocaciones a sectores distintos de nuestro medio social. Se han hecho invocaciones a las fuerzas armadas, a los obreros, a los patronos. Los únicos que tenemos soberanía para legislar aquí somos los legisladores del país, representantes del pueblo de la República. *(Aplausos.)* Cualquier invocación de otro tipo significaría resignar nuestros mandatos y postrarnos de rodillas ante lo que no es representativo del pueblo. Por eso, señor presidente, yo afirmo también que esa sí sería una delegación de las facultades fundamentales del Parlamento. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)* También digo que en la disyuntiva de seguir caminando hacia adelante o detenernos, ponemos esta ley al servicio del futuro, y nos sometemos tranquilos al juicio de la historia. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Valle.

**Sr. Valle.** — Quiero dejar constancia de mi voto en contra del artículo 11 del despacho de la comisión, y mi adhesión a la modificación propuesta por el señor diputado Boffi.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Voy a proponer un agregado al artículo en nombre del sector de la mayoría. Después de las palabras «Poder Ejecutivo otorgará», agregar «previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que deberá producirse en el plazo que fije la reglamentación respectiva...»

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Hay tres agregados al artículo 11: uno propuesto por el señor diputado Cárdenas; otro propuesto por el señor diputado Boffi; y el que acaba de enunciar el señor diputado Gómez Machado.

¿La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Cárdenas?

**Sr. Liceaga.** — No, señor presidente. La comisión acepta únicamente el agregado propuesto por el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 11 tal como está redactado en el dictamen de la comisión, con el agregado que acaba de enunciar el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Cárdenas.** — Considero que debe votarse en primer lugar la proposición del diputado que habla.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Si la comisión la hubiese aceptado, sí; pero como no la aceptó, corresponde votar en primer lugar el artículo del dictamen. Si la Cámara lo rechazara, entonces correspondería votar la proposición del señor diputado, que por no contar con la aceptación de la comisión requiere dos tercios de votos.

Se va a votar el artículo 11 del dictamen, con el agregado aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa de 84 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Tarulli.** — Que conste mi voto en contra del artículo 11 que figura en el despacho de la comisión y que acaba de aprobar la Honorable Cámara.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado Liceaga.

**Sr. Liceaga.** — En la Secretaría se encuentran algunas modificaciones que vamos a proponer en nombre de las comisiones. Pido a la Presidencia que disponga que a medida que se enuncien los artículos, se dé lectura a la modificación correspondiente.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Para los artículos 12 hasta el 16, no se han propuesto modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 12.

—Se aprueba.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 13.

—Se aprueban los artículos 13 y 14.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 15.

**Sr. Maluf.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Maluf.

**Sr. Maluf.** — Me siento en la obligación de dejar aclarado, respecto del inciso a), apartado 2, donde se fijan las prioridades para el uso del agua, que esas prioridades son válidas en todas las circunstancias en que se interrumpa el paso libre de las aguas. Que sea previa a cualquier autorización la fijación de los cupos de agua y energía para los Estados aguas abajo. En el caso del dique El Cadillal, Tucumán, previo al aval debe fijarse el cupo de agua y energía que le corresponde a Santiago del Estero.

En el futuro lo mismo con el dique de Cabra Corral, en Salta: que se apliquen estas prioridades para el uso de agua y energía.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — ¿Propone algún agregado el señor diputado?

**Sr. Maluf**. — No, señor presidente; es una simple aclaración.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se da por aprobado el artículo 15.

En consideración el artículo 16.

—Se aprueba.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 17.

Se va a leer por Secretaría un agregado propuesto por la comisión, que iría como párrafo final.

**Sr. Secretario** (Oliver). — La comisión propone agregar el siguiente párrafo final: «Asimismo queda autorizado para avalar la financiación de obras de interés nacional en aquellos contratos que tengan cláusulas de reversión al Estado.»

**Sr. Schweizer**. — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Schweizer.

**Sr. Schweizer**. — Es para pedir una explicación.

Según el agregado que acaba de leerse, el Poder Ejecutivo queda autorizado para avalar. ¿Cómo es eso? Yo entiendo perfectamente lo que es un aval, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha podido dar nunca aval de ninguna naturaleza, salvo que se entienda que lo hace en nombre del país...

**Sr. Liceaga**. — Generalmente los avales que da el Poder Ejecutivo son en base a una reglamentación o autorización de los bancos de la Nación e Industrial para que dispongan las garantías correspondientes al crédito otorgado.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 17 con el agregado propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 18.

—Se aprueban los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 39. Hay una modificación propuesta por la comisión, que será leída por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Oliver). — La comisión propone agregar en el último párrafo de este artículo, después de las palabras: «y de las tarifas», lo siguiente: «...para venta en bloque por parte del Estado...».

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 39 con el agregado propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 40.

—Se aprueban los artículos 40, 41, 42, 43 y 44.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 45. La comisión propone una modificación.

Tiene la palabra el señor diputado Llugdar.

**Sr. Llugdar**. — Desisto de hacer uso de la palabra porque en el texto está hecha la salvedad que yo quería hacer.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Por Secretaría se leerá la modificación que la comisión propone al artículo 45.

**Sr. Secretario** (Oliver). — En el artículo 45 la comisión propone agregar, después de las palabras «del Estado», lo siguiente: «y las sociedades en que la misma participe»; y sigue el artículo: «podrán financiar...», etcétera.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 45 con el agregado propuesto por la comisión, del que se acaba de dar lectura.

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Hay dos artículos nuevos propuestos por la comisión, que llevarían los números 46 y 47, los cuales serán leídos por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Oliver). — El artículo 46, nuevo, establece: «El patrimonio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado, se integrará con todos los bienes muebles e inmuebles, ocupados o afectados en cualquier forma, modo y lugar a sus actividades, comprendidos los terrenos, edificios, obras e instalaciones, planteles y equipos, instrumentos y vehículos, fondos y demás efectos destinados a sus actividades específicas de persona jurídica de derecho privado.

»Consecuentemente, decláranse transferidos a la empresa los dominios sobre todos los terrenos de propiedad del Estado nacional que ocupa o se encuentran afectados a dichas actividades, con excepción de aquellos que correspondan a obras, trabajos o servicios que se ejecutan o prestan por cuenta del gobierno nacional, cuando ellas sean totalmente de fomento y en la proporción que corresponda en las que lo sean parcialmente, o en las que respondan a finalidades múltiples.

»El Poder Ejecutivo formalizará los respectivos títulos, su registro y demás recaudos pertinentes, quedando autorizado para transferir asimismo los bienes inmuebles que en lo sucesivo se requieran con iguales propósitos, con-

forme a los planes de acción y presupuestos anuales que apruebe, de acuerdo con las disposiciones vigentes.»

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar el artículo 46 (nuevo), que ha sido propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a dar lectura por Secretaría de otro nuevo artículo propuesto por la comisión y que llevaría el número 47.

**Sr. Secretario** (Oliver). — Tiene el siguiente texto: «Declárase cancelada la deuda de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, con el gobierno nacional, proveniente de fondos entregados a ella y a los organismos antecesores por la Tesorería General de la Nación, el Fondo Nacional de la Energía o el Fondo de Reserva de la Energía para la ejecución de obras, cualquiera sea su naturaleza, para realizar estudios o para costear déficit de explotación, así como los servicios de amortización e intereses vencidos si ellos existieran.»

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 48, que en el dictamen de la comisión figura como artículo 46. Hay una modificación propuesta, que se leerá por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Oliver). — La modificación a que se refiere el señor presidente consiste en reemplazar las palabras «noventa días» por «treinta días» en las varias veces que figuran en el artículo.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Como es proposición de la comisión, se va a votar el artículo con esa modificación.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — En consideración el artículo 49, que en el dictamen de la comisión lleva el número 47.

— Se aprueba.

— El artículo 50 — en el dictamen artículo 48 —, es de forma.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Queda sancionado el proyecto de ley (1). (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Monjardín). — El señor diputado Liceaga ha solicitado tres inserciones, las que se van a votar por su orden.

Se va a votar la primera inserción solicitada.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la segunda inserción solicitada por el señor diputado Liceaga.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la tercera inserción solicitada por el señor diputado Liceaga.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la indicación del señor diputado Gómez Machado.

— Resulta afirmativa de 89 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se harán las inserciones en el Diario de Sesiones (1).

Tiene la palabra el señor diputado Camet.

**Sr. Camet.** — Señor presidente: deseo pedir la inserción en el Diario de Sesiones de una ponencia que me entregó el profesor de derecho constitucional, Alberto Padilla, ante una consulta especial que le formulé en el día de ayer sobre la constitucionalidad de la delegación de poderes.

Creo de fundamental importancia este dictamen, que si bien no ha sido hecho especialmente para este proyecto de ley, cobra especial autoridad ya que el propio autor me lo ha entregado para ilustrarme sobre el tema que le consulté, y me dijo estas palabras: «Si no hubiera delegación, no habría sido posible que el gobierno de los Estados Unidos hubiere ejecutado el plan Marshall; y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado constitucional el voto de los legisladores de Estados Unidos delegando poderes al Poder Ejecutivo.»

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Camet.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 97 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Monjardín). — Se hará la inserción en el Diario de Sesiones (2).

Cumplido el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión.

— Es la hora 21 y 35.

FRANCISCO BERTORINO.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

(1) Véase el texto de las inserciones en el Apéndice.  
(2) Véase la inserción en el Apéndice.

A P E N D I C E

I

SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º—Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional; con excepción del transporte y distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión de señales, palabras o imágenes, que se regirán por sus respectivas leyes especiales.

Art. 2º—A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 3º—A los efectos de la presente ley, denominase servicio público de electricidad, la distribución regular y continua de energía eléctrica, para atender las necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de una colectividad o grupo social determinado de acuerdo a las regulaciones pertinentes.

Correlativamente, las actividades de la industria eléctrica destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público serán consideradas de interés general, afectadas a dicho servicio y encuadradas en las normas legales y reglamentarias que aseguren el funcionamiento normal del mismo.

Art. 4º—Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con una línea de transmisión o de ésta con el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no comporten desmedro a las disposiciones de la presente ley.

Art. 5º—La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa, jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el de modificar el uso y fines a que estén destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que lo requieran la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.

Art. 6º—Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando:

- a) Se vinculen a la defensa nacional;
- b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más provincias, o una provincia con otra, o con el

territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur;

- c) Correspondan a un lugar sometido a la legislación exclusiva del Congreso Nacional;
- d) Se trate de aprovechamientos hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de todos ellos;
- e) En cualquier punto del país integren la red nacional de interconexión;
- f) Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera;
- g) Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear o atómica.

Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º cuando una ley del Congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de su unificación.

Art. 7º—El Poder Ejecutivo proveerá lo conducente, dentro de las facultades que le otorga esta ley, para promover en cualquier lugar del país grandes captaciones de energía hidroeléctrica.

Art. 8º—Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica promovidos por el gobierno federal o por una provincia, en los casos que los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, afectando a más de una provincia, deberán ser autorizados por ley nacional.

Art. 9º—En cuanto se relacione con lo dispuesto en el artículo 6º, el gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía, en cualquier lugar del país, en la medida requerida para los fines a su cargo.

Art. 10.—Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de explotación, de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley y especialmente para el regular desarrollo o funcionamiento de la Red Nacional de interconexión y/o los restantes sistemas eléctricos nacionales.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica, designando a quien tendrá facultad en cada caso para promover los procedimientos judiciales de expropiación.

Ar 11.—En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6º, y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo otorgará, previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que deberá producirse en el plazo que fije la reglamentación respectiva, las concesiones y autorizaciones, y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Las facultades precedentes comprenden el derecho de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y

demás lugares sometidos a la legislación exclusiva del Congreso Nacional.

Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo nacional, según lo justifiquen las circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones que sean consecuencia de esta ley, la exención de gravámenes e impuestos nacionales vinculados a la constitución de los mismos.

En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales, referidos en el artículo 35, inciso b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º de la misma que fueran de jurisdicción local serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Art. 12. — Las obras de instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta exención las tasas retributivas por servicios mejoras de orden local.

Art. 13. — Las disposiciones de la ley 4408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán de aplicación subsidiaria en cuanto no esté previsto y sea compatible con la presente, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales —provinciales y municipales— en todo lo que sea materia de su respectiva competencia.

#### *Concesiones y autorizaciones*

Art. 14. — El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión o autorización del Poder Ejecutivo, en los siguientes casos:

##### *a) Se requiere concesión:*

1. Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública, cuando la potencia normal que se concede exceda de 500 kilovatios.
2. Para el ejercicio de actividades destinadas a un servicio público de electricidad.

##### *b) Se requiere autorización:*

1. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a cinco mil kilovatios.
2. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea menor de cinco mil kilovatios pero sus instalaciones requieran el uso de la vía pública, o, en general, de bienes del dominio público o afectados al uso o servicio público.

Art. 15. — En las concesiones para aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción

nacional (artículo 14, inciso a)-1), que podrán otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeterminado, habrán de establecerse las condiciones y cláusulas siguientes:

1. El objeto principal de la utilización.
2. Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.
3. Las potencias características del aprovechamiento y la potencia máxima de la instalación.
4. El plazo de la ejecución de los trabajos determinados en la concesión.
5. El plazo de explotación de la concesión cuando ésta sea a término, el que no podrá exceder de sesenta años.
6. Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al Estado los bienes y las instalaciones.
7. Las condiciones y causales de caducidad por inobservancia de las obligaciones impuestas en las concesiones a término.
8. La antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión, y la forma, tiempo y condiciones en que se realizarán las transferencias de los bienes, cuando la concesión fuese por tiempo indeterminado.
9. El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso de la fuente, que ingresará al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Art. 16. — En las concesiones para el aprovechamiento de fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción nacional, para los trabajos determinados en la concesión o para la explotación de la misma, el concesionario, sin perjuicio de las indemnizaciones que deba pagar a los particulares afectados, tendrá los siguientes derechos:

- I. De acupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión las propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua, y para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales.
- II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua.
- III. De solicitar al Poder Ejecutivo que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 10, cuando fuere necesaria la ocupación definitiva del dominio de terceros, y toda vez que ello no se hubiese previsto en el mismo acto constitutivo de la concesión y no fuera posible obtener el acuerdo de partes.

Art. 17.— El Poder Ejecutivo, previo dictamen del consejo federal, podrá estimular bajo forma de aporte de capital, financiación, contribución y/o exenciones impositivas temporarias a los titulares de las concesiones a que se refiere el artículo 15 cuyos trabajos y obras originaren beneficios múltiples o cuyo objetivo principal interese a la defensa nacional o procure un mejoramiento notable de las condiciones de utilización agrícola de los cursos de agua o la regularización de su régimen o facilite su navegación. Asimismo queda autorizado para avalar la financiación de obras de interés nacional en aquellos contratos que tengan cláusulas de reversión al Estado.

Art. 18.— En las concesiones de servicio público de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) -2), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 en cuanto resulte de aplicación, se establecerán especialmente:

1. Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
2. Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente.
3. La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de electricidad está obligado a atender.
4. La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse, así como de sus modificaciones y ampliaciones, los que en todo momento deberán ajustarse para atender el incremento de la demanda de la zona.
5. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones.
6. Las garantías que debe prestar el concesionario según determine la reglamentación.
7. Las causales de caducidad y revocación.
8. Las condiciones en que el Estado adquirirá los bienes afectados a la concesión, en caso de caducidad, renovación o falencia.
9. Las obligaciones y derechos del concesionario.
10. Las condiciones, derechos u obligaciones para la interconexión de las instalaciones.
11. La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los mismos, y en especial el régimen de las instalaciones costeadas por los usuarios.
12. La forma de determinación del capital inicial.
13. El sistema de justiprecio de los bienes afectados a la concesión, cuando fuere necesario para determinar las tarifas, la utilidad del concesionario o la adquisición de los mismos por el Estado.
14. El derecho de constituir las servidumbres necesarias a los fines de la concesión.
15. Las atribuciones del Estado de inspección, fiscalización y demás, inherentes al poder de policía.
16. El régimen para la constitución de los fondos de depreciación, renovación, ampliaciones y otros que sea necesario prever.
17. El régimen del suministro y venta de energía.
18. El régimen tarifario.
19. El régimen de infracciones y multas.

Art. 19.— Toda cesión total o parcial de una concesión y todo cambio de concesionario requerirán para su validez la aceptación expresa de la autoridad competente.

Art. 20.— El régimen de las autorizaciones de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso b), será regla-

mentado por el Poder Ejecutivo y se caracterizará por la exclusión de uno o más requisitos, según los casos, de los fijados a las concesiones de servicio público.

Se incluirán, sin embargo, en cuanto fueran de aplicación, cláusulas que contemplen lo previsto en los incisos 12 a 19 del artículo 18.

Art. 21.— Los aprovechamientos de la energía hidroeléctrica y cualquier otra actividad de la industria eléctrica excluidos del régimen de concesiones y autorizaciones del artículo 14, pero comprendidos en el ámbito de la jurisdicción nacional, se ejercerán con sujeción a las reglamentaciones vigentes o a dictarse.

En especial, podrán los particulares, individual o colectivamente, o agrupados en cooperativas, consorcios de usuarios y otras formas de asociación legítima, utilizar para las necesidades de sus propiedades o industrias la energía hidroeléctrica de cursos de agua pública, con la sola sujeción a dichas reglamentaciones y siempre que la potencia total instalada no exceda de quinientos kilovatios y no afecte a otros aprovechamientos, o los planes nacionales y locales de electrificación.

Igualmente, los propietarios de cursos de agua privada a que se refieren los artículos 2.350 y 2.637 del Código Civil, podrán utilizar la respectiva energía hidroeléctrica para su propio uso y aun cederla a terceros, con tal que ello no revista el carácter de un servicio público.

#### *Importación y exportación de energía eléctrica*

Art. 22.— Queda facultado el Poder Ejecutivo para autorizar la importación y exportación de energía eléctrica, previa determinación de la cantidad máxima de energía a exportar o a importar.

La autorización deberá subordinarse a condiciones y garantías relativas al uso de la energía y al precio de venta o reventa.

Art. 23.— La autorización no tendrá plazo superior a diez años, pudiendo ser prorrogable; y podrá revocarse en cualquier momento, cuando no subsistieren las circunstancias que originaron su otorgamiento, o mediaren graves motivos de interés público.

La revocación podrá también tener lugar por no uso de la autorización, o inobservancia de las condiciones a que se subordinó su otorgamiento.

#### *Consejo Federal de la Energía Eléctrica*

Art. 24.— Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del país y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;
- b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; las prioridades en la ejecución de estudios y obras; a las concesiones y autorizaciones; y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad;
- c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria eléctrica;



- d) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

Art. 25. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por:

- a) El secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá o el subsecretario en su reemplazo;
- b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combustibles, que será designado por el Poder Ejecutivo;
- c) El presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado;
- d) Un representante y un suplente por cada provincia designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos gobiernos locales;
- e) Un representante de la Capital Federal y territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros, tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

Art. 26. — El consejo designará seis de sus miembros que constituirán un comité que será presidido por el representante de la Secretaría de Energía y Combustible.

Dicho comité tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomiende;
- b) Ejercer las funciones que el consejo le delegue;
- c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato al consejo si el caso lo requiriese o en la primera reunión ordinaria en su defecto.

Art. 27. — Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y del comité, las dependencias que determine la Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que dicte para su actuación.

Art. 28. — El Consejo Federal de la Energía delimitará zonas de electrificación, integrada cada una de ellas por la provincia o provincias que, racional y técnicamente, constituyan un núcleo energético desde el punto de vista del afianzamiento gradual del sistema eléctrico argentino o tengan, cuando se trate de dos o más provincias, una interdependencia real o potencial en la materia.

En cada zona de electrificación así constituida, funcionará un Comité Zonal de la Energía Eléctrica, dependiente del consejo federal y formado por los miembros titulares de las provincias de que se trate, a que se refiere el artículo 25, inciso d) y e), y por los presidentes o directores de los entes a cargo, en las mismas provincias, de los problemas locales de hidráulica y electricidad.

El Consejo Federal de la Energía será reglamentado sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una intervención informativa en todo problema, de la competencia del consejo federal, que se refiera a la respectiva zona; así como la más amplia libertad de iniciativa, por ante el consejo fe-

deral y por intermedio de los miembros titulares respectivos a que alude el artículo 26, incisos c) y d) para proponer las tarifas, la aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las soluciones energéticas que juzguen de interés para la zona respectiva.

Art. 29. — Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, se atenderán con cargo al Fondo Nacional de Energía Eléctrica

*Fondos eléctricos. — Fondo Nacional de la Energía Eléctrica*

Art. 30. — Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica con el fin de contribuir a la financiación de los planes de electrificación, el cual se integrará:

- a) Con un aporte del tesoro nacional que se fijará anualmente;
- b) Con el 50 % como mínimo del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;
- c) Con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía que se establecen en el artículo 15, inciso 9;
- d) Con el derecho de importación de la electricidad que en cada caso se establezca por los organismos competentes;
- e) Con el recargo de \$ 0,10 por kilovatio-hora sobre el precio de venta de la electricidad. Queda facultado el Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal de Energía Eléctrica, para modificar este recargo, no pudiendo exceder del 15 % de dicho precio de venta;
- f) Con el producido de la negociación de títulos de deuda nacional que se emitan con cargo a ser servidos con recursos del fondo;
- g) Con la recaudación por reembolso, y sus intereses, de los préstamos que se hagan de los recursos del fondo;
- h) Con donaciones, legados, aportes y otros recursos no especificados anteriormente.

Art. 31. — El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará:

- a) El 80 % del mismo con destino exclusivo a los estudios, construcción y ampliación de las centrales, redes y obras complementarias o conexas, que ejecute el Estado nacional;
- b) El 20 % remanente será transferido al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, conforme con lo dispuesto en el artículo 32, inciso d).

*Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior*

Art. 32. — Unifícanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se integrará:

- a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;

- b) Con los aportes del Tesoro de la Nación que correspondan a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Económico y otros que se determinen en la ley de presupuesto;
- c) Con el diez por ciento (10 %) del producido del Fondo Nacional de la Energía;
- d) Con el veinte por ciento (20 %) [artículo 30, inciso d)] del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Art. 33. — El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará para:

- a) Aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para acogerse a estos beneficios las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la amortización de tales aportes. Las sumas recaudadas en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a la renovación, ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de electrificación, o al reintegro, en su caso, de los respectivos préstamos;
- b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias;
- c) Préstamos a empresas privadas de servicios públicos de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000 kilovatios instalados.

Al cierre de cada ejercicio los saldos anuales no utilizados se transferirán al ejercicio siguiente del mismo fondo.

Art. 34. — La Secretaría de Energía y Combustibles distribuirá el fondo referido con la intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y lo administrará asegurando en todos los casos el retorno de los préstamos de acuerdo a las siguientes normas:

- a) En los casos de los préstamos del artículo 33, incisos a) y b), con un interés no menor del 6 % anual y con amortización hasta quince años;
- b) Para los casos de los préstamos del artículo 33, inciso c), con un interés no inferior al 8 % anual y con amortización hasta cinco años.

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta diez (10) años más en los siguientes casos: I) Cuando los préstamos se apliquen total o parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural; II) Cuando se destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 80 % del total de la inversión. En estos casos, para lo invertido en electrificación rural o en la compra de equipos y elementos de fabricación nacional, la tasa de interés aplicable podrá reducirse al 3 % anual.

### *Transporte y distribución de la energía eléctrica. — Sistemas eléctricos*

Art. 35. — Para los efectos de la presente ley se denominan:

- a) Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN) las centrales, líneas y redes de transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias —sin distinción de las personas, públicas o privadas, a quienes pertenezcan—, sometidos a la jurisdicción nacional;
- b) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP) las centrales, líneas y redes de jurisdicción provincial;
- c) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE) las centrales, líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones complementarias, de propiedad del Estado nacional o que él administra o explota;
- d) Red Nacional de Interconexión (RNI) al conjunto de sistemas eléctricos nacionales interconectados.

Art. 36. — La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión y la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran necesaria y racionalmente la misma, cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo.

Cuando se trate de captaciones hidroeléctricas utilizables mediante aprovechamientos fluviales múltiples, su planificación, estudio y coordinación quedarán supeditados a las condiciones que contemplen la racional y económica utilización de todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica.

Art. 37. — Todas las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Energía y Combustibles, la que tendrá a su cargo:

- a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN) mediante la interconexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
- b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la Nación;
- c) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro de las utilidades y la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
- d) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;
- e) Ejercer las funciones de policía de seguridad técnica de los sistemas a que se refieren los incisos a), c) y d) del artículo 35, y de inspección técnica contable sobre las instalaciones, funcionamiento y régimen tarifario de ellos;
- f) Impartir las normas técnicas y disposiciones necesarias para el funcionamiento y operación de los servicios de jurisdicción nacional, de acuerdo con los principios de la presente ley,

y de los reglamentos que se dicten para su aplicación;

- g) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo las tarifas y precios de compra y venta de la energía a los productores y a los distribuidores de la Red Nacional de Interconexión (RNI), y servicios públicos de jurisdicción nacional;
- h) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), incluida la Red Nacional de Interconexión (RNI), con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 38. — El despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y el manejo y funcionamiento de los Sistemas Eléctricos del Estado estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado, la que a dichos efectos, sin perjuicio de las facultades que le confiere su estatuto orgánico, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nacional de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a las empresas u organismos prestatarios de servicios públicos de electricidad, y a las grandes industrias;
- b) Establecer anualmente el régimen de funcionamiento de cada central integrante de la Red Nacional de Interconexión;
- c) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de cargas, de acuerdo con las normas preparadas por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Los Sistemas Eléctricos Provinciales a que se refiere el artículo 35, inciso b), podrán conectarse a la Red Nacional de Interconexión si desean recibir o entregar energía por dicha red. A tal efecto la autoridad provincial respectiva y Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado, acordarán las condiciones de la operación y régimen del mutuo servicio, a los efectos del despacho de carga.

#### *Precios y tarifas*

Art. 39. — El Poder Ejecutivo nacional fijará los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en las centrales y líneas que integran la Red Nacional de Interconexión y para los servicios públicos de jurisdicción nacional, los que dentro del principio de lo justo y razonable deberán responder básicamente a los siguientes conceptos:

##### *a) Costos de capital:*

- 1. Se considerarán en los costos de capital las dotaciones al fondo de renovación que se determinarán sobre la base de un porcentaje fijo a establecer, sobre el valor de reposición de la potencia instalada con sus equipos y elementos conexos.
- 2. Las dotaciones a los fondos de reserva.
- 3. Los impuestos.
- 4. Los seguros.
- 5. Las amortizaciones de capital, siempre que en la correspondiente concesión o autorización existan cláusulas de traspaso total o parcial sin cargo para el Estado, de los bienes del concesionario o permisionario al vencer la concesión o autorización.

6. Los intereses del capital, que se reglarán de acuerdo con las normas de la correspondiente concesión o autorización.

##### *b) Costo de los sueldos del personal:*

- 1. Los sueldos, jornales y en general toda remuneración que se paguen de acuerdo con normas legales que los autoricen.
- 2. Los beneficios de carácter social establecidos y que se establezcan por normas legales y las sumas que anualmente deben destinarse a constituir o incrementar los fondos de reservas especiales que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones.

c) Gastos generales, administración, dirección técnica y asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley;

d) Combustibles, lubricantes y en general todos los materiales cuyo consumo resulte necesario en el periodo correspondiente y que estén destinados a la generación, transformación, transmisión y distribución de electricidad, en su caso;

e) Valor de la energía que se adquiere a terceros.

f) Intereses y gastos complementarios de financiación sobre bonos y otros capitales crediticios destinados a la explotación y que hayan sido aprobados previamente por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá exceder del 10 % anual sobre los respectivos capitales;

g) Los demás gastos no especificados en los rubros anteriores, siempre que guarden relación de casualidad con las actividades de la explotación;

h) Las pérdidas de energía por todo concepto, de acuerdo con las normas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles;

i) Cláusulas de ajuste:

1. Los costos de capital, mantenimiento y varios se ajustarán anualmente.

2. Los cambios que sufra el precio de la mano de obra y de los combustibles serán reajustados dentro de los treinta (30) días de producidos, de acuerdo con las fórmulas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles.

3. Las disminuciones de costo originadas en una mayor eficiencia técnica serán acreditadas por partes iguales a favor de los consumidores y la empresa o entidad productora, transportadora o distribuidora que lo haya originado.

Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa de energía y de las tarifas para venta en bloque por parte del Estado, se seguirá el procedimiento de apremio establecido en el artículo 25 de la ley 50, siendo título hábil la constancia de deuda expedida por la oficina competente del ente prestatario.

#### *Disposiciones complementarias*

Art. 40. — Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base de la demanda probable estimada como conveniente, que soporte cada central durante el año.

Art. 41. — Las empresas del Estado o privadas que integren los sistemas eléctricos nacionales ajustarán sus libros y contabilidad a un plan general de cuentas para permitir la fiscalización contable permanente de los mismos por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Art. 42. — Las industrias en el ámbito de la jurisdicción nacional, cuando las circunstancias lo justifiquen y ello se juzgue conveniente y adecuado por la Secretaría de Energía y Combustibles, podrán abastecerse directamente o interconectar sus propias centrales con los servicios eléctricos nacionales.

Art. 43. — Las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirán el cinco por ciento (5 %) del importe que resulte de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a la venta en bloque.

En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5 % se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas.

Art. 44. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a utilizar de los recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior a que se refiere el artículo 32 de la presente ley, las sumas necesarias para la continuidad del auxilio financiero establecido por el decreto 11.219/59.

Art. 45. — Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, y las sociedades en que la misma participe podrán financiar sus obras de expansión futuras o en ejecución mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusivamente a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas, en modo tal que el producido de las mismas cubra las amortizaciones e intereses de las deudas que se contraigan al amparo del presente régimen.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan, las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizadas.

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipo de interés y características financieras que considere conveniente a los fines de proceder a la emisión de los valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella se considere necesaria.

Art. 46. — El patrimonio de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, se integrará con todos los bienes muebles e inmuebles, ocupados o afectados en cualquier forma, modo y lugar a sus actividades, comprendidos los terrenos, edificios, obras e instalaciones, planteles y equipos, instrumentos y vehículos, fondos y demás efectos destinados a sus actividades específicas de persona jurídica de derecho privado.

Consecuentemente, decláranse transferidos a la empresa los dominios sobre todos los terrenos de propiedad del Estado nacional que ocupa o se encuentran afectados a dichas actividades, con excepción de aquellos que correspondan a obras, trabajos o servicios que se ejecutan o prestan por cuenta del gobierno nacional, cuando ellas sean totalmente de fomento y en la proporción que corresponda en las que lo sean parcialmente o en las que respondan a finalidades múltiples.

El poder Ejecutivo formalizará los respectivos títulos, su registro y demás recaudos pertinentes, quedando autorizado para transferir asimismo los bienes inmuebles que en lo sucesivo se requieran con iguales propósitos, conforme a los planes de acción y presupuestos anuales que apruebe, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 47. — Declárase cancelada la deuda de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, con el gobierno nacional, proveniente de fondos entregados a ella y a los organismos antecesores por la Tesorería General de la Nación, el Fondo Nacional de la Energía o el Fondo de Reserva de la Energía para la ejecución de obras, cualquiera sea su naturaleza, para realizar estudios o para costear déficit de explotación, así como los servicios de amortización e intereses vencidos si ellos existieran.

Art. 48 (transitorio). — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se constituirá una vez que la mitad de las provincias hayan comunicado al Poder Ejecutivo nacional su propuesta para el nombramiento de los representantes y éstos hayan sido designados. Si en el término de los treinta días las provincias no hubiesen realizado tal propuesta, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica será integrado con el número de representantes designados.

Constituido el consejo, deberá proceder dentro de los treinta días siguientes a elevar, para la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, el proyecto de reglamentación de la presente ley y el proyecto de organización funcional a que ajustará su cometido.

Art. 49. — Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes, en cuanto se opongan a la presente ley.

Art. 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## II

### INSERCIONES

#### 1

#### INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO LICEAGA

Año 1958

#### Energía eléctrica producida por habitante por año

P A I S	Habitantes (millares)	Producción (millones kvh)	Producción por habitantes kvh
a) Estados Unidos de América .....	174.810 (5)	724.556 (4)	4.143
Francia .....	44.500 (3)	61.800 (4)	1.389
Inglaterra .....	51.680 (3)	98.508 (6)	1.906

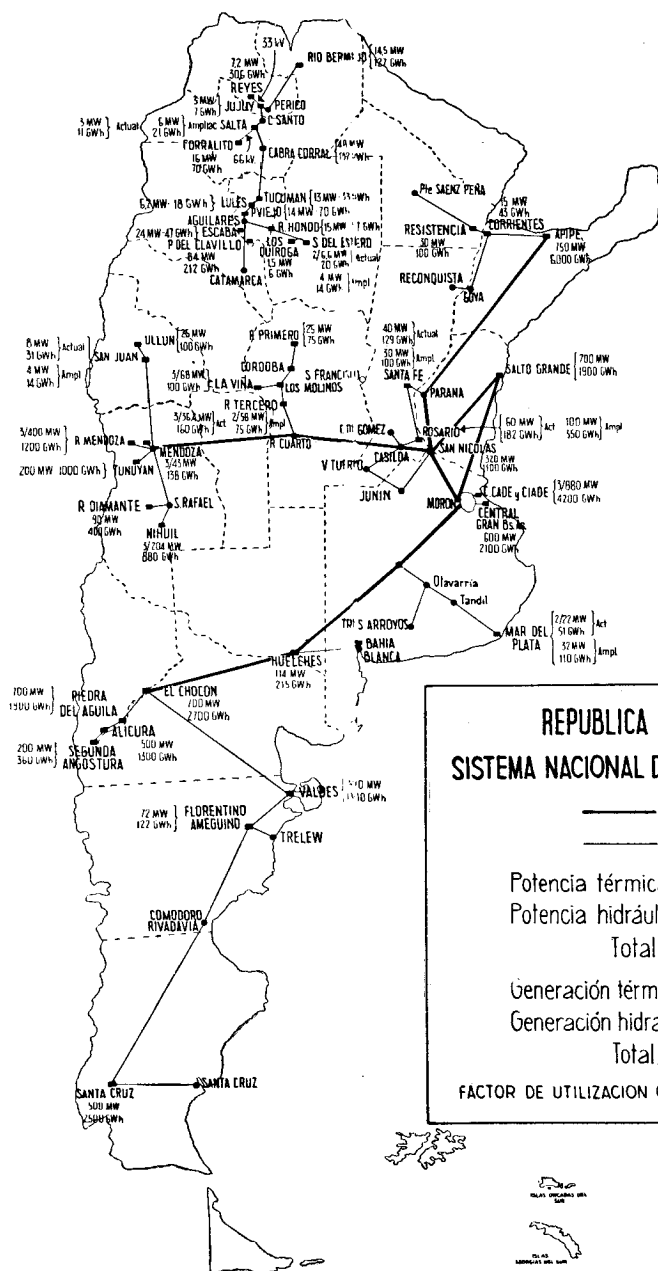
P A I S	Habitantes (millares)	Producción (millones kvh)	Producción por habitantes kvh
Bélgica .....	9.053 (3)	12.512 (4)	1.382
Alemania Occidental .....	54.374 (3 y 7)	95.268 (4)	1.752
Suiza .....	5.185 (3)	16.872 (4)	3.254
Suecia .....	7.415 (3)	30.360 (4)	4.094
Canadá .....	17.048 (3)	96.744 (4)	5.674
b) Italia .....	48.735 (3)	45.492 (4)	933
España .....	29.662 (3)	15.468 (4)	521
Noruega .....	3.526 (3)	27.504 (4)	7.800
c) Chile .....	7.298 (3)	3.637 (4)	498
Perú .....	9.651 (5)	675 (5 y 8)	70
Colombia .....	13.522 (3)	1.512 (4)	118
México .....	32.348 (3)	9.072 (4)	280
d) Argentina .....	20.438 (1)	9.349 (2)	457

- (1) Datos del Boletín de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. Buenos Aires, mayo de 1959.  
 (2) Incluidos 1.979 millones de kvh de autoproducción. Cifra obtenida hasta la fecha en una encuesta que se efectúa por primera vez en el país.  
 (3) Estimación del Boletín Mensual de Estadística, Naciones Unidas. Noviembre 1959.  
 (4) Incluida autoproducción. Datos Boletín Mensual de Estadística, Naciones Unidas. Noviembre 1959.  
 (5) Estimación del año 1956. Datos del Boletín Mensual de Estadística, Naciones Unidas. Noviembre 1959.  
 (6) No incluye cifras de autoproducción. Datos del Boletín Mensual de Estadística, Naciones Unidas, Noviembre 1959.  
 (7) Incluido Berlín Oeste  
 (8) Fuente: CEPAL.

## 2

## Los recursos hidroeléctricos en la República Argentina y su grado de utilización

CUENCA HIDROGRAFICA	Económicamente aprovechable		Instalado o en equipamiento		Grado de utilización (sobre energía) %
	mvh	gvh	mv	gvh	
A) Zona Norte .....	630	2 200	64.-	218.-	9,7
Río Pilcomayo .....	—	—	—	—	—
Ríos Bermejo e Itiyuro .....	128	500	8.-	35.-	7.-
Río Pasaje o Juramento .....	132	500	17.-	74.-	14,8
Río Dulce .....	350	1 120	33.-	75.-	6,7
Varias de Catamarca .....	20	80	6.-	29.-	36,2
B) Zona Centro .....	280	1 000	131.-	404.-	40,4
Sistema Sierras de Córdoba .....	250	900	128.-	393.-	43,7
Sistema de San Luis .....	30	100	3.-	11.-	11.-
C) Zona Andina .....	2.210	9.800	219.-	936.-	9,5
Ríos de La Rioja .....	10	30	1,6	6,6	22.-
Río Jachal .....	80	270	1,4	6,5	2,4
Río San Juan .....	120	400	16.-	62,7	15,7
Río Mendoza .....	620	2 200	41.-	220.-	10.-
Río Tunuyán .....	700	2 800	—	—	—
Río Diamante .....	240	1 500	—	—	—
Río Atuel .....	320	1 500	159.-	640.-	42,7
Río Malargüe .....	20	700	—	—	—
Afluentes río Colorado .....	100	400	—	—	—
D) Zona Litoral .....	3.680	15.000	1.-	3.-	—
Canal del Bermejo .....	30	200	—	—	—
Río Paraná e Iguazú .....	2.850	12 000	0,6	2.-	—
Río Uruguay .....	750	2 700	—	—	—
Varias (Prov. Bs. As.) .....	50	100	0,4	0,8	—
E) Zona Patagónica .....	4.200	16.000	90.-	294.-	1,8
Río Colorado .....	170	500	—	—	—
Río Negro .....	1.800	7 000	18.-	119.-	1,7
Río Chubut .....	110	250	72.-	125.-	50.-
Río Senguerr .....	20	50	—	—	—
Andina al Pacífico .....	500	2 200	—	—	—
Ríos y lagos del Sur .....	1.100	5 000	—	—	—
Mareas patagónicas .....	500	1 000	—	—	—
Totales .....	11.000	44.000	505.-	1.850.-	4,2



## REPUBLICA ARGENTINA SISTEMA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

— 380 kV  
- - - 132 kV

Potencia térmica ..... 2186,6 MW.

Potencia hidráulica ..... 6159,8 "

Total ..... 8346,4 "

Generación térmica ..... 8654 GWh.

Generación hidráulica 23326 "

Total ..... 31980 "

FACTOR DE UTILIZACION CENTRALES TERMICAS 0,4 (40%)

# INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CAMET

## Delegación legislativa. — Ponencia para el II Congreso de Ciencias Políticas

Nuestro Congreso legisla por medio de códigos, de leyes, de decretos y de ordenanzas, pues todas estas denominaciones se encuentran en el artículo 67 de la Constitución cuando enuncia las atribuciones del Congreso. Pero, tan diversa terminología queda unificada bajo la denominación de ley, cuando el artículo 73 usa esta expresión al fijar la fórmula para dar fuerza a lo que el Congreso decreta o sanciona.

La ley puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo conforme a la atribución que tiene por el artículo 86, inciso 2 de la Constitución para proveer a la ejecución de ella cuidando no alterar su espíritu.

Resulta así que cada uno de estos órganos del gobierno tiene su poder propio: —uno para hacer la ley, otro para reglamentarla—.

Encuentro que crea confusión decir que el poder de reglamentación pertenece tanto al Ejecutivo como al Congreso y que se trata de un poder de idéntica naturaleza en el sentido de que ambos pueden comprender y se refieren a disposiciones de un orden semejante o igual, aunque el contenido y la extensión no reconozcan limitación alguna cuando el poder se ejercita por el Congreso, como resulta del considerando de una sentencia de la Corte. (Fallos, tomo 148, página 430, punto 10.)

En el caso citado no podía hablarse de delegación porque la ley no disponía que el Ejecutivo actuara ejercitando una atribución del artículo 67. Se trataba de un decreto que la Corte encontró que encuadraba dentro del poder de reglamentar propio del Ejecutivo.

El problema se presentó cuando la ley dispone que el Ejecutivo llenará una función que es propia de la ley. En tal caso ¿cabe admitir que la ley delegue en el reglamento algo de lo que la ley no decide?

La respuesta negativa la dan quienes entienden que la delegación «está en absoluto prohibida por un texto expreso de la Constitución». (González Calderón, Derecho Constitucional, tomo 2 N° 834.)

Tan terminante opinión se funda en la prohibición que contiene el artículo 29. Es un fundamento que no convence. El legislador no tiene atribuciones para disponer de «la vida, el honor o las fortunas de los argentinos», todo lo cual está protegido por nuestra declaración de derechos, de modo que el Congreso no puede delegar lo que no tiene. Cuando se habla de delegación se entiende que se trata de la delegación de aquellas atribuciones que el Congreso tiene.

Otra posición consiste en hacer un distingo. Así Bielsa dice: «Sólo puede negarse delegación cuando se trata de poderes estrictamente legislativos, v. gr. el poder legislativo.» Agrega «que tampoco el poder punitivo puede delegarse, y en los casos en que ha motivado delegación de lo que él considera delegable, ha denominado el decreto reglamentario como «reglamento delegado». (Der. Adm., tomo II, página 189, 5° ed.).

Este autor admite que cabe hablar de delegación del legislativo. Pero, de la Constitución no resulta la distinción entre lo que es estrictamente legislativo, y lo que no lo es, ni autorizada la distinción entre decreto reglamentario de la ley y «reglamento delegado» de la ley.

Aceptado que cabe la delegación, ella puede versar sobre cualquiera de las atribuciones del artículo 67. Y sólo corresponde establecer bajo qué condiciones debe ella hacerse para que no resulte violado el principio de la separación de poderes.

En este terreno los fallos de la Corte de los Estados Unidos han señalado la necesidad de que la delegación se realice dentro de canales señalados por la ley. El legislador marca los límites dentro de los cuales el Ejecutivo graduará la aplicación de la ley y precisa las circunstancias que determinarán esa aplicación dentro de los bordes que limitan el cauce trazado.

Hace varios años enuncié estas condiciones al comentar el caso *Schechter v. U. S.*, recién decidido por la Corte de aquel país. El tribunal encontró que era una delegación inconstitucional la de la «code-making authority» que había hecho el Congreso.

Un caso de delegación admitida fue el mencionado por el presidente del tribunal en su voto al que me referí diciendo: «Por último se mencionó el caso de la disposición legislativa sobre «tarifa inflexible» por la que se autorizó al Poder Ejecutivo para variar de tiempo en tiempo los derechos de aduana de acuerdo a las diferencias que se fueran produciendo entre el precio de los productos en el extranjero y el costo de producción de los mismos artículos en los Estados Unidos. La Corte reconoció la validez del «rate-making body» creado por esa delegación legislativa. (Jurisprudencia Constitucional de la Corte Americana, página 17, ed., Buenos Aires, 1938.)

Una exposición muy completa de los casos de jurisprudencia en aquel país fue hecha un tiempo después entre nosotros. (Véase Bidegain, «El Congreso de Estados Unidos de América», N° 330, ed. Buenos Aires, 1950.)

Nuestra Constitución no permite ninguna interpretación que nos coloque dentro de lo que prevén algunas nuevas constituciones de Europa. Así la Constitución de Italia cuando en su artículo 76 disponen que las Cámaras pueden delegar en el gobierno el ejercicio de las funciones legislativas. Esa delegación debe ser limitada en cuanto al tiempo, definida en cuanto al objeto e indicar los criterios directivos a los que debe conformarse la autoridad que recibe la delegación. En esos casos los decretos se llaman «leyes delegadas» o «decretos legislativos». (B. Pallieri, «Dir. Cost.», N° 77, 3° ed., Milán, 1953.)

La Constitución francesa de la V República, ha estatuido a su vez sobre la ley y el reglamento, introduciendo un cambio que ha sido juzgado como verdaderamente revolucionario.

El artículo 34 de esta Constitución enumera los asuntos que serán objeto de ley. Enuncia luego otros sobre los cuales el Parlamento sólo puede determinar los principios fundamentales. Y por el artículo 37 dispone que «las otras materias que no son del dominio de la ley tienen un carácter reglamentario».

De ahí resulta que la competencia legislativa es la excepción, de modo que todo aquello que no esté expresamente mencionado en la Constitución puede ser materia de normas fijadas por el gobierno y no

por el Parlamento. Un profesor francés, M. George Bedel, pone como ejemplo el espacio interplanetario. Las normas relativas a él, quedan dentro del alcance del poder reglamentario al que denomina «poder normativo gobernante», y expresa que este poder no depende de la ley ni está subordinado a ello.

Otra disposición todavía más terminante trae aquella Constitución. El artículo 38, en efecto, dice: «El gobierno puede, para la ejecución de su programa, pedir al Parlamento la autorización para tomar por medio de ordenanzas durante un tiempo limitado, medidas que normalmente quedan en el dominio de la ley.»

Esta referencia a la delegación para cumplir un determinado programa recuerda la situación que en los Estados Unidos se ha presentado cuando el legislador ha votado determinados planes —el Plan Marshall, por ejemplo— cuya aplicación habría sido im-

posible con la tesis de que el Poder Legislativo no puede delegarse.

En síntesis, concreto mi opinión diciendo que considero constitucional la delegación legislativa de cualquiera de las atribuciones del artículo 67, siempre que esa delegación no signifique dejar al ejecutivo hacer la ley, sino que limite su acción a la de graduar la ley dentro de los límites que ella señala y en razón de mediar las condiciones que ella establece.

Frente a un caso concreto convendrá analizar los precedentes de los fallos de los Estados Unidos y los principios de los autores que comentan la Constitución Italiana para poder dictaminar si la ley marca con la precisión requerida los límites dentro de los cuales se ejercerá el poder que se le delega.

*Alberto G. Padilla.*

*Buenos Aires, 12 de agosto de 1960.*